

**ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COCA
EN EL DEPARTAMENTO DEL META 1982 – 2004**

AUTOR: OMAR GUTIÉRREZ LEMUS

BOGOTÁ, ENERO DE 2005

**Este estudio fue financiado por la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, ASDI**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN GENERAL	3
MARCO TEÓRICO Y POLÍTICO DE ANÁLISIS	6
HIPÓTESIS DE TRABAJO.	9
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y EL ESPACIO EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE COCA	12
Consideraciones en Torno a la formación del Estado	12
Consideraciones en Torno a la Formación del Espacio.....	19
Los Desequilibrios Espaciales en las Zonas Productoras de Coca	21
La Economía y Los Macroproyectos de Ordenamiento Territorial	27
DIMENSIÓN Y PROBLEMÁTICA REGIONAL DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS	37
LOS ACTORES REGIONALES IMPLICADOS	54
Actores Sociales	55
Actores Armados Ilegales.....	64
Actores Políticos.....	70
Actores Institucionales	73
LÍNEAS PROGRAMÁTICAS.....	78
Desarrollo Alternativo y Desarrollo Rural	79
Gobernabilidad Local y Participación Ciudadana.....	82
Proyectos Económicos Concertados de Desarrollo	85
Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales.....	88
CONCLUSIONES GENERALES.....	91
BIBLIOGRAFÍA	96

INTRODUCCIÓN GENERAL

El diagnóstico que se presenta en las siguientes páginas es un esfuerzo de sistematización de un conjunto de dinámicas económicas y políticas relacionadas con la proliferación de cultivos ilícitos en el departamento del Meta y está destinado a proponer alternativas para el desarrollo humano sostenible. En un marco más amplio, se inscribe también en los estudios sobre las problemáticas del conflicto armado realizado por el Proyecto BCPR –Redes, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado con recursos del gobierno sueco. Así, con la caracterización de un amplio territorio de este departamento se formulan luego un conjunto de líneas programáticas (ver tabla de contenido) que podrían influir en decisiones y acciones políticas de alguna importancia. En especial, estas líneas programáticas podrían ser desarrolladas por entidades privadas u organizaciones sociales, apoyadas por el Estado y en lo posible, estarían enmarcadas en el Programa de Desarrollo y Paz del Departamento y, mas allá, dentro de una estrategia de Laboratorio de paz.

En concreto, el diagnóstico propone explicaciones de tipo social, político y económico a la situación de crisis actual en grandes zonas rurales y campesinas del departamento del Meta. Para esto hace una aproximación a la problemática general del territorio de 15 municipios donde se han detectado cultivos ilícitos y, en particular, a 7 de estos mismos municipios: La Macarena, Vista Hermosa, La Uribe, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán.

De acuerdo con la división territorial definida por Cordepaz¹, los cultivos de coca en el departamento están localizados en la amplia franja que comprenden las Subregiones del Ariari, Duda-Guayabero y Río Meta (ver mapa 1) que se caracterizan por la siguiente problemática socio-económica:

- Es una zona de Parques y Reserva Forestal colonizada y con graves procesos de deterioro ambiental.
- Es un espacio de poblamiento relativamente reciente (70 años) donde han predominado economías y sociedades de carácter campesino.
- Es el área donde se han registrado el mayor número y la concentración de cultivos ilícitos en el país, desde 1999.

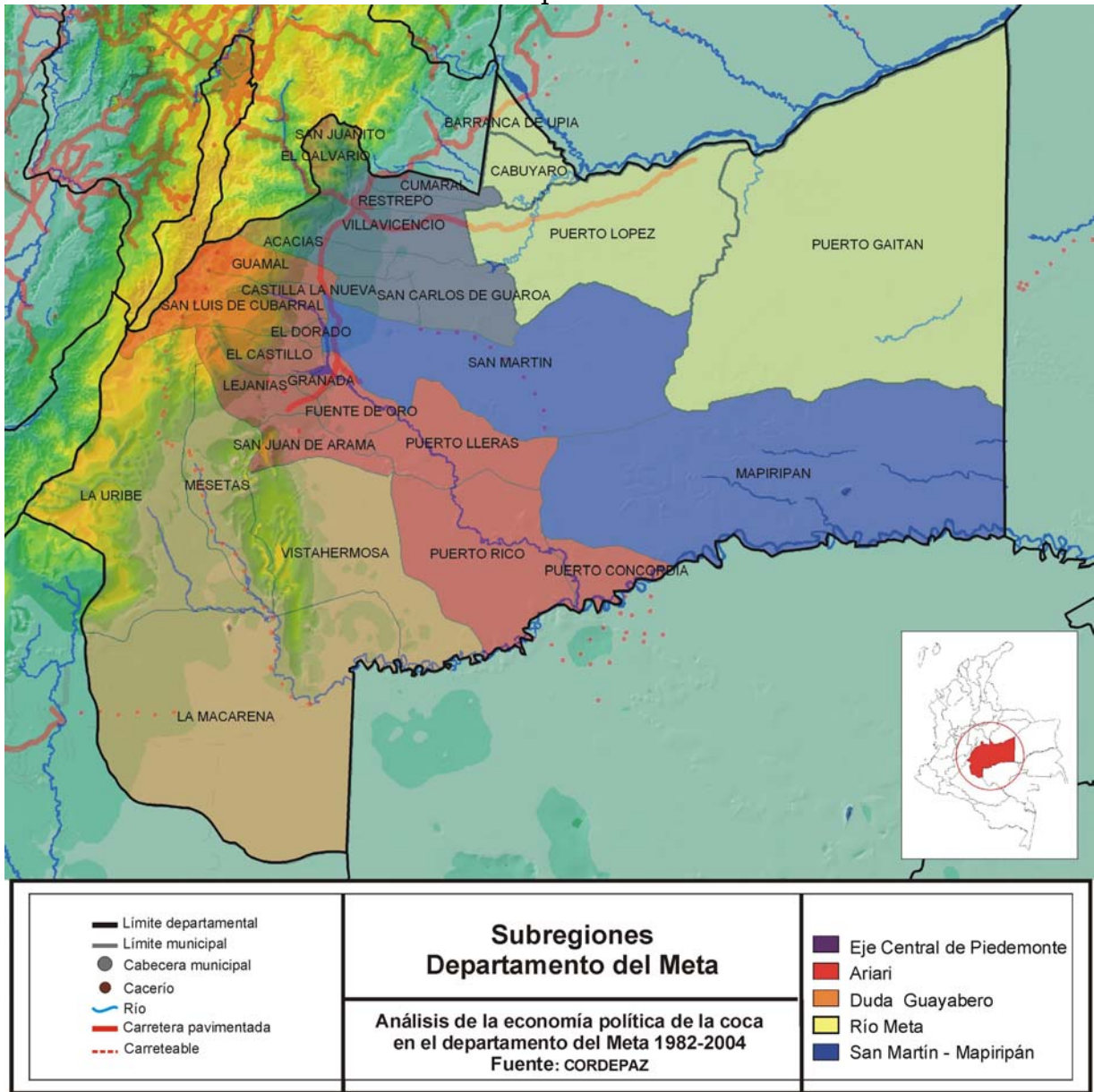
¹ GONZÁLEZ José J. (2004: 11-20).

- Hizo parte de la zona de distensión y es hoy el área de influencia y enfrentamiento entre el Bloque Oriental de las Farc y del Bloque Centauros de las Autodefensas.
- Es un lugar donde la economía rural se encuentra en crisis reciente por las decisiones de los grupos armados ilegales y por los efectos no previstos de la aplicación de la política de lucha contra las drogas y el Plan Colombia.
- Esta crisis económica de origen rural se ha extendido a las zonas urbanas del departamento y ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes.
- Ha sido un espacio político caracterizado por grandes problemas de gobernabilidad y debilidad organizativa de la sociedad civil.

Los anteriores aspectos están íntimamente relacionados y demandaban un diagnóstico propositivo que propusiera y/o influyera en la formulación de políticas que, a su vez, contribuyeran al desarrollo regional sostenible.

Para abordar los temas mencionados se partió de un análisis político y espacial de las subregiones mencionadas que abarca las últimas cuatro décadas, basado en fuentes secundarias; esto con el ánimo de ofrecer un escenario amplio de comprensión de la problemática central que se intenta detallar después: el surgimiento, la consolidación y la crisis de la economía ilícita de la coca. Sobre esta problemática hace una sucinta descripción -que no obstante abarca veinticinco años de historia- y se subraya el papel que han cumplido allí una serie de actores regionales y los intereses que ellos mismos han puesto en juego, en ámbitos muy diversos. Finalmente, recogiendo esta masa de análisis se ensaya proponer un conjunto de recomendaciones que abarcan aspectos relacionados con el desarrollo alternativo (alcances y limitaciones en los municipios del Ariari y Duda-Guayabero); la gobernabilidad local y regional (como se forman, perciben y circulan las élites locales); la autonomía civil frente a los grupos armados irregulares (necesidad de consolidar espacios eminentemente civiles); el fortalecimiento interno de las organizaciones rurales (en términos sociales y empresariales); los proyectos económicos concertados de desarrollo de las economías campesinas (seguridad alimentaria y proyectos comerciales).

Mapa 1



MARCO TEÓRICO Y POLÍTICO DE ANÁLISIS

El enfoque propuesto para este trabajo intenta establecer relaciones entre las actividades económicas ilícitas vinculadas a la producción y comercialización de base de coca y distintos fenómenos políticos y sociales vividos en algunos municipios del Meta. Por esta razón se dice que es un enfoque desde la economía política. Abarca, entonces, una sucinta investigación sobre los siguientes componentes: a.) el origen social y la apropiación privada que tienen los recursos generados por la economía ilícita; b.) la forma y el grado en que estos recursos han afectado la distribución del poder político y las oportunidades sociales en el orden regional o local; c.) la manera en que la economía ilícita ha transformado la economía campesina y de colonización en las zonas productoras de hoja de coca; d.) las formas y características de organización social y política que ha impulsado esta economía ilícita; e.) sus efectos sobre el ejercicio de la autoridad civil y el funcionamiento del Estado local; f.) el beneficio que han obtenido de ella los carteles del narcotráfico y los grupos armados ilegales (fijación de precios, compra en situaciones de duopsonio, acumulación de recursos de inversión, etc.); g.) así mismo, sus efectos sobre la violencia política, el conflicto armado y la pobreza en los municipios donde predomina; h.) por último, cuáles han sido los resultados y las limitaciones más significativas de los proyectos de desarrollo alternativo y, frente a esto, el por qué de la necesidad de insistir en un enfoque de desarrollo rural.

Obviamente, el tratamiento de todos estos temas es, por ahora, una aproximación que requerirá ajustes analíticos teóricos y de sistematización de información empírica a medida que se puedan profundizar los diagnósticos y evaluaciones participativas que se deriven del eventual diseño y puesta en marcha de una estrategia de intervención del PNUD en un campo tan complejo como es la superación definitiva y sostenible de la economía ilícita de la coca en una zona con altos niveles de conflicto social y político. En este sentido, como se mencionó, el trabajo que se presenta enfatiza el análisis sobre algunos efectos de la economía ilícita en la producción campesina y en la vida política de un conjunto de siete municipios rurales fuertemente golpeados por la violencia y donde los niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos es reconocidamente débil.

En un plano más amplio, el enfoque propuesto se basa en algunos estudios que subrayan la necesidad de alcanzar la paz, la democracia y los buenos gobiernos locales para reducir la pobreza². Esto es fundamental incluso en un tema tan ligado al conflicto armado, el accionar de la

² ROBB Caroline (2002); SEN Amartya (2000).

delincuencia organizada y la generación de riqueza ilegal, como es la proliferación de los cultivos ilícitos en zonas rurales. En los ámbitos local y regional, tanto el Estado como la Sociedad Civil deben emprender acciones conjuntas para generar las capacidades políticas y económicas que permitan reducir y superar los efectos del conflicto armado sobre la población y avanzar en soluciones concertadas en la disminución definitiva de los cultivos ilícitos y la suspensión total del procesamiento de base de coca. Sobra decir que en el departamento del Meta, como en otras regiones del país, se sobreponen y retroalimentan actualmente, en el espacio y en la sociedad rural, algunas *dinámicas perversas*³ como son: el conflicto armado, los cultivos ilícitos, la presión por las mejores tierras y el desplazamiento forzado. A nivel local, la clave de la solución de buena parte de este entrelazamiento perverso, que refuerza la pobreza y deteriora el nivel de vida de los habitantes rurales y campesinos, puede estar en la creación de garantías reales y democráticas para la participación y el acceso organizado de todos los ciudadanos, sin discriminaciones, a la vida pública y el Estado de sus municipios.

En otras palabras, existen razones para pensar que un aspecto fundamental de la solución a la problemática de los cultivos ilícitos pasa por la adopción de cambios de tipo político e institucional que beneficien a los sectores sociales hasta ahora marginados de las decisiones más importantes sobre el desarrollo del departamento del Meta. Así, las alternativas de tipo económico y productivo toman mayor realce a la luz de la necesidad de los mencionados cambios de orden “superestructural”. Es palpable la urgencia de actuar sobre aspectos estrictamente sociales como la marginalidad espacial y gubernamental⁴; la desconfianza en las instituciones del Estado local y departamental; la ausencia de reconocimiento y estímulo institucional a la cohesión interna y a la organización empresarial de los sectores más vulnerables de la población; la negación de derechos y garantías ciudadanas a los personas que residen en zonas de enfrentamiento armado, dada la asociación arbitraria que se hace de ellas como apoyo o base social de los grupos armados ilegales; la ilegalidad forzada en que se encuentran los pequeños productores de coca debido a que no poseen una alternativa económica más rentable y han sufrido coerción para rendir tributos y vender la base de coca a las organizaciones armadas; estos mismos productores enfrentan el riesgo de las fumigaciones y de quedar atrapados en el endeudamiento con terceros para poder sembrar o arrendar un lote de coca. En síntesis, se trata de crear y fortalecer canales e instancias de

³ Esta noción fue acuñada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio para designar relaciones o situaciones que impiden o retrasan el desarrollo humano sostenible de una región.

⁴ Los actos de gobierno muchas veces no llegan a los habitantes más pobres y alejados de los centros urbanos.

comunicación, inclusión institucional y de participación en asuntos de política pública a los habitantes de estos municipios.

Sin embargo, se creyó necesario realizar un examen crítico de las condiciones de distinto orden que han condicionado la existencia y la evolución de la problemática de los cultivos ilícitos en esta región del país. Por esta razón, el diagnóstico ensaya una serie de interpretaciones de tipo sociológico sobre la manera como se han construido el Estado⁵ y el Espacio⁶ en lo que son hoy las subregiones del Ariari y el Duda Guayabero para ofrecer un sustento más sólido al posterior análisis de la evolución de la economía ilícita y los distintos intereses que se mueven alrededor de su funcionamiento. Esto también da un apoyo a los supuestos mencionados antes sobre el carácter de las soluciones o las alternativas que se deben buscar y suministrar para superar la economía en cuestión.

Incidir en la formulación y marcha de una política pública respecto a la proliferación de cultivos ilícitos en zonas de economía campesina y de colonización es un asunto de gran dificultad en el país; máxime cuando son los mismos afectados por las fumigaciones quienes aspiran a tal cosa. Esta posibilidad fue un asunto muy debatido, con poco éxito, durante las marchas cocaleras de 1996 y la experiencia ha demostrado que es algo muy difícil de lograr en un aspecto central de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, como es la política antidrogas⁷. Sin embargo, existen un conjunto de eslabones de intervención institucional que es posible consolidar desde una perspectiva de mediano y largo plazo contando con la capacidad y la disposición política de instituciones civiles (públicas y privadas) para conformar alianzas que redunden en beneficio del desarrollo humano de los habitantes de estas zonas rurales. En primer lugar se trataría de involucrar de entrada a las comunidades y grupos organizados de pobladores en el análisis de su situación de pobreza y marginamiento institucional para encontrar con ellos alternativas y comprometerlos de forma paulatina en su ejecución; además con el objetivo de generar capacidades sociales e individuales entre los directamente afectados, respetando sus jerarquías y organización comunitaria⁸. También se trataría de construir relaciones sociales con acentos y valores éticos, distintas a las propagadas antaño por las bandas de narcotraficantes, para ganar en un proceso de acercamiento entre pobladores e instituciones a nivel local y regional; los proyectos y acciones que se generen en este intercambio deben consolidar protagonistas

⁵ TILLY Charles (1992); URIBE María T (2000); GONZÁLEZ Fernán (1998); WEBER Max (1977).

⁶ BAILLY Antoine (1988); NÉMERY, Jean-Claude et WACHTER Serge (1993); GONZÁLEZ José J. (1998a); MOLANO Alfredo (1989a).

⁷ TOKATLIAN, Juan (2000).

⁸ Sería un error crear nuevas organizaciones o entregar a entidades paralelas responsabilidades y recursos que las mismas comunidades pueden asumir.

y dolientes tanto del lado de quienes reciben como de quienes entregan⁹. Este acumulado de construcción de redes de pobladores e instituciones formales permitirá avanzar en la realización acciones productivas que mitiguen los efectos de la economía ilícita entre los más pobres y en la formulación de políticas públicas con un fuerte soporte social y una dosis mucho más alta de realismo en la solución de los problemas que se enfrentan para la superación de la economía ilícita.

Estos son algunos elementos conceptuales y de política que podrían caracterizar la intervención de PNUD en zonas de alta presencia de cultivos ilícitos, a los que sería necesario agregar la diferenciación de actores e intereses en juego; la identificación de capacidades y disposición a los compromisos de las instituciones implicadas; la participación civil en busca de objetivos públicos claros; el aprendizaje asesorado en el manejo de conflictos locales; la influencia política de la comunidad internacional y el poder normativo del derecho y la justicia en la formación organizaciones y “élites” políticas locales. Por último, se debe recordar que esta estrategia de intervención es un esfuerzo de construcción colectiva con aliados y debe ser ejecutada por grupos gestores locales y regionales en un proceso ascendente de abajo hacia arriba y de la periferia al centro de la vida política del departamento¹⁰.

HIPÓTESIS DE TRABAJO.

Durante la realización del trabajo de campo y en el proceso de revisión de la información empírica y secundaria para este diagnóstico de aproximación a la economía política de la coca, surgieron algunos supuestos, tanto de carácter teórico como empírico, que fueron sistematizados de la siguiente manera:

- Desde 1998 se ha configurado en el departamento un escenario económico y político proclive a plantear alternativas viables para la superación de la economía ilícita. Tal escenario ha sido determinado por la aplicación de la política contra las drogas (fumigaciones con glifosato, control al tránsito y suministro de insumos o precursores, programas de desarrollo alternativo –PLANTE-) y la paulatina y ascendente intromisión del conflicto irregular (guerrillas – paramilitares) en las zonas productoras de hoja de coca.

⁹ También es importante no caer en el error de discriminar con argumentos técnicos o políticos a la población que habita en el área de influencia de determinado grupo ilegal. Esto generaría aún más resentimiento y desconfianza frente a los programas gubernamentales.

¹⁰ GONZÁLEZ José J. (2003: 58)

- Por lo tanto, ofrecer alternativas viables al tema de la economía ilícita significa avanzar claramente en el tema de la superación del conflicto armado. En diferentes momentos, tanto paramilitares como guerrilleros han manifestado algún interés político (un tanto incierto a veces) de terminar con su participación en el negocio. Existe, entonces, la posibilidad de ensayar respuestas a este respecto desde la sociedad civil para beneficio de los habitantes de las zonas donde hacen presencia estos grupos.
- De la misma forma, ofrecer alternativas viables al tema de la economía ilícita significa avanzar decididamente en el tema del mejoramiento de la calidad de la vida de los habitantes del Ariari y el Duda-Guayabero-. Diversas iniciativas impulsadas por algunos gobiernos locales y organizaciones civiles se han propuesto este objetivo y demandan apoyo gubernamental e internacional para lograr resultados de mayor alcance.
- La coca llegó a la zona limítrofe del Meta y el Guaviare en un momento (1978) en que los programas de colonización dirigida por el Estado, emprendidos desde los años cincuenta, entran en una fase de estancamiento y crisis por el debilitamiento del apoyo estatal a la economía campesina y al proceso de poblamiento¹¹. De esta forma, a nivel social, la economía ilícita se convierte una fuente que contribuye a solventar algunas deficiencias importantes en el proceso de colonización y poblamiento de tierras baldías. Paradójicamente, frente a la política de ocupación de baldíos, sostenida por el Estado durante largo tiempo, y sus claras limitaciones institucionales y ambientales o ante los conflictos sociales que suscitó¹², los recursos provenientes de la economía ilícita sirvieron para sostener procesos campesinos relativamente estables de ocupación de territorios en la Orinoquia y Amazonia.
- Por consiguiente, aunque la economía ilícita lleva más de 25 años de crecimiento en el departamento, no ha desarticulado la economía campesina en importantes zonas (Vista Hermosa, La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, La Uribe) y ésta puede ser fortalecida mediante el apoyo institucional externo. De otra parte, se debe atender la problemática social generada por el desplazamiento y el cambio de uso o de renta de la tierra en otras zonas (San Martín, Mapiripán, Puerto Gaitán) donde la economía campesina ha venido perdiendo terreno¹³.
- En los últimos siete años los campesinos y colonos de los municipios estudiados han visto reducidos sus ingresos, pese a la proliferación de

¹¹ GONZÁLEZ José J. (1998b:32-33) (1998c:43-54).

¹² FAJARDO Darío. (2002).

¹³ GONZÁLEZ A., José J. 2004.

cultivos ilícitos y al aumento de la producción de base de coca. Además han visto disminuida su libertad de movimiento, residencia y expresión pública. Estos hechos se conjugan hoy para generar un deseo colectivo de cambiar la naturaleza de la economía regional.

- No obstante el énfasis económico de la problemática de los cultivos ilícitos, resulta fundamental impulsar políticas que creen capital social y acerquen a la población civil y a las autoridades locales a la normatividad del Estado de Derecho.
- Con el transcurso del tiempo, los grupos irregulares (FARC y AUC) han penetrado o se han apropiado de los circuitos de comercialización regional tanto de precursores químicos (encadenamiento hacia atrás) como de la pasta de coca (encadenamiento hacia delante). Este hecho reforzó la tendencia al establecimiento de controles cada vez más complejos tanto para garantizar las condiciones de seguridad del negocio (manejo de la información, confianza) como para ejercer coacción y violencia para hacer valer acuerdos y compromisos entre los agentes y eslabones involucrados en el circuito.
- La anterior situación otorga mayor poder de facto a nivel regional a estos grupos armados y dificulta enormemente las acciones del Estado en su lucha contra el narcotráfico en los eslabones intermedios de la cadena (transporte de grandes cargamentos de cocaína, provisión de precursores, contrabando de armas, lavado de activos, etc.). Al mismo tiempo interfiere las acciones de erradicación forzada y los programas de desarrollo alternativo, debido a que aleja a la población civil del Estado o desvirtúa sus propósitos y, por defecto, otorga cierto apoyo a la presencia o los argumentos de estos grupos armados.
- Las condiciones políticas e institucionales para que los campesinos y colonos de las zonas productoras de coca puedan adelantar acciones sociales y económicas profundas de superación de la economía ilícita y encuentren alternativas de desarrollo rural son complejas. Entre estas condiciones se tiene, por ejemplo, que paulatinamente deben aumentar los niveles de gobernabilidad de las administraciones municipales; la población de estas zonas debe, también, incrementar su autonomía para tomar decisiones, frente a los grupos armados irregulares; es necesario que los programas en marcha tengan acceso e interlocución con el mayor número posible de actores involucrados (Stakeholders); así mismo, que un conjunto de instituciones (públicas y privadas) y organizaciones sociales regionales mantengan su interés en trabajar conjuntamente por el desarrollo y la paz; además, que estas organizaciones e instituciones adopten la propuesta de desarrollo rural y territorial como base de superación de la economía ilícita.

Los anteriores supuestos deberían articularse al proceso de planeación y ejecución del Programa de Desarrollo y Paz del Meta y, eventualmente, a la preparación de un Laboratorio de Paz, en el entendido de que son fundamentalmente los habitantes rurales más alejados del departamento quienes demandan prioridad en estas acciones pues es en sus zonas de residencia donde se escenifica como más dramatismo la violencia, el desplazamiento obligado, la exclusión política y la pobreza.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y EL ESPACIO EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE COCA

Lo dicho en las secciones anteriores compromete el análisis del tema de los cultivos ilícitos con la configuración del Estado y el Espacio en esta zona del país. Por esta razón se presentan aquí algunos rasgos particulares de la evolución de estas nociones centrales, resaltando el hecho de que tanto el primero como el segundo son procesos en construcción con expresiones locales diferenciadas.

Consideraciones en Torno a la formación del Estado

Durante los últimos cincuenta años se ha vivido en esta subregión del departamento un lento proceso de afianzamiento del poder Estatal (entendido como relación de dominación). Todavía hoy la integración de territorios y la centralización del control político juegan un papel fundamental en este proceso. Inicialmente la colonización de extensas áreas de bosques baldíos, el establecimiento de poblaciones migrantes, la fundación de municipios y la consolidación de comunidades partidistas en distintas zonas fue el escenario predominante en buena parte del Meta¹⁴. Este escenario estuvo marcado por la violencia y en él se consolidaron las facciones partidistas que acapararían los eventos electorales y los periodos de gobierno municipal¹⁵. Con estas mismas facciones se comenzaron a formar las “elites” locales. En suma, se puede decir que surgió un poder político en manos de grupos liberales, conservadores y comunistas que sirvió de mediación con el Estado central y, en algunos aspectos, se opuso a los intentos de centralización y modernización de la administración del poder.

¹⁴ GONZÁLEZ José J. (1992)

¹⁵ Así, por ejemplo, dentro de la memoria colectiva, en Granada han dominado los Liberales, mientras en Acacías los Conservadores son mayoritarios y Mesetas ha sido un fortín del Partido Comunista y la Unión Patriótica.

El peso de las *comunidades políticas* y los intentos de conformación de “élites” partidistas en un contexto recurrente de violencia por razones económicas e ideológicas, han sido características fundamentales en la formación del Estado local en estas subregiones. Así en el Alto Ariari (Granada, Cubarral, El Castillo; Medellín del Ariari) se instauraron fuertes disputas entre Liberales, Conservadores y Comunistas, desde los años cincuenta¹⁶. En el Medio Ariari (Mesetas, La Uribe, Lejanías), la temprana presencia de colonos y organizaciones de inspiración comunista, daría una característica especial a la configuración de espacial de esta zona hasta los años ochenta y noventa, cuando la Unión Patriótica alcanzó resultados electorales significativos dentro del marco de descentralización política municipal¹⁷. Por último el Bajo Ariari (Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa, Concordia) fue escenario de una colonización liberal (en los años cincuenta y sesenta) seguida de una fuerte presencia de los grupos de narcotraficantes (finales de los setenta y comienzos de los ochenta) y la aparición y fortalecimiento significativo de las FARC en las zonas rurales (principios de los ochenta y buena parte de la década de los noventa). Frente a este panorama el Estado central ha encontrado aliados o detractores según el momento histórico; para señalar solamente un caso: luego de un periodo de amplio alzamiento armado de los liberales del llano¹⁸, los gobiernos de Rojas Pinilla y Lleras Camargo encontraron en los antiguos líderes guerrilleros apoyos importantes en sus en sus proyectos de pacificación y extensión de la presencia institucional en los años cincuenta y sesenta¹⁹.

En otras palabras, ha existido en la región de estudio una resistencia mayor o menor, de acuerdo con la coyuntura política y los vaivenes del conflicto armado, a la instauración del monopolio de la dominación y el ejercicio legal del poder, de acuerdo con la normatividad de un Estado moderno. A este respecto el antecedente reciente más importante se encuentra plasmado en el proceso de descentralización política (especialmente la elección popular de alcaldes) que debía conducir a un grado mayor de presencia estatal y de legitimidad de las instituciones oficiales en zonas apartadas del departamento. En efecto, los años del auge del proceso de descentralización (décadas del ochenta y noventa) coinciden en el Meta con un periodo de fuerte violencia política a nivel municipal, fundamentalmente en las subregiones del Ariari (EL Castillo, Vista Hermosa. Lejanías, Mesetas, Granada) y del río Meta (Puerto Gaitán, Puerto López).

En contradicción a las expectativas de reforma y modernización del Estado, se produjo como tendencia un grado mayor de afianzamiento de los

¹⁶ Ibid, GONZÁLEZ José Jairo (1992).

¹⁷ URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo. (1995: 49-63)

¹⁸ FRANCO, Eduardo. (1994).

¹⁹ MOLANO Alfredo. (1989b).

sectores más tradicionales de la política, refractarios a cambios profundos en el ejercicio del poder y la participación electoral. Este hecho frustró también los esfuerzos del primer proceso de paz (emprendido por el presidente Betancurt) para facilitar un proceso democrático de formación y de circulación de élites locales y regionales²⁰. En las décadas de los 80 y 90, mediante el influjo de la violencia política, la corrupción oficial y la presión de los grupos de justicia privada (autodefensas y paramilitares) o narcotraficantes, se cerraron estas posibilidades de reforma²¹. Recientemente, sucesivos gobiernos (Samper, Pastrana, Uribe) han buscado la forma de pacificar el escenario y negociar con estos sectores políticos locales y regionales una transición que permita la instauración del poder de Estado central y la integración de antiguos territorios de frontera a la vida de la Nación.

Esta apretada síntesis de una historia política que comienza con la insurrección de los guerrilleros liberales subordinados a Guadalupe Salcedo²² y las Columnas de Marcha, en los años cincuenta²³ y termina con el proceso de negociación con las FARC y la eventual desmovilización de los Bloques Casanare y Centauros de las autodefensas, sirve para ilustrar una evolución muy compleja que supone la expropiación y/o la cooptación de las funciones de dominación política de “grupos privados”, en este caso facciones partidistas, grupos armados, bandas de narcotraficantes, personajes carismáticos²⁴ y su traslado a la órbita del Estado central. Lógicamente este ha sido un proceso con altibajos, mediado por múltiples intereses particulares y donde la violencia ha sustituido muchas veces a los procedimientos democráticos y participativos; más aún, es todavía una obra inconclusa que sirve de escenario a nuevos y antiguos enfrentamientos políticos por los recursos económicos; por la supremacía en los procesos electorales; la administración del Estado a nivel local y departamental y, sobre todo, por la extensión, en el territorio, de hegemonías partidistas e ideológicas (en mayor o menor medida penetradas por el conflicto armado).

²⁰ Del lado de las FARC y el Partido Comunista también se presentaron fuertes discrepancias sobre la manera de conducir la política dentro de la Unión Patriótica. Ibid, URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo.

²¹ Mediante una serie de entrevistas con habitantes de Vista Hermosa se pudo establecer que quien primero organizó los grupos paramilitares en este municipio (1988) fue Gonzálo Rodríguez Gacha. Este hecho se escenificó dentro de las disputas del grupo armado encabezado por este narcotraficante y las FARC, en áreas de cultivo de coca; sin embargo, el mayor número de víctimas de la ofensiva de los paramilitares fueron militantes de la Unión Patriótica y civiles sin un pasado político muy activo.

²² En especial Dumar Aljure y el “tuerto” Giraldo que fueron los “jefes” en esta zona. Ver: MOLANO Alfredo (1989b)

²³ BARBOSA Reinaldo (1992); MOLANO Alfredo (1989a); GONZÁLEZ José J. (1992).

²⁴ Como ya se mencionó: Berardo Giraldo, Dumar Aljure, Guadalupe Salcedo, Plinio Murillo, Hernando Duran D., etc.

El nudo central de esta trama política parece estar en el sistema de dominación que finalmente se impondrá en el territorio. De la dominación indirecta, ejercida por las facciones partidistas, los personajes míticos, los grupos armados y las bandas de narcotraficantes se trataría ahora de instaurar una *dominación directa*, mediada por la ley y la justicia, el monopolio de la coacción en manos de las fuerzas militares, la participación civil en asuntos públicos y la administración profesional del Estado²⁵. En la misma trama ha sido fundamental, para tradicionales “grupos privados” e intermediarios del poder del Estado o sus detractores, no dejarse excluir por sus adversarios y lograr niveles de posicionamiento legal e institucional en el sistema de dominación que se construye, para conservar así sus recursos de poder y consolidarse socialmente. Esto es válido en el Meta tanto para las “élites” locales civiles y sectores sociales con mayor o menor organización como para los grupos armados ilegales²⁶.

Es obvio que este ha sido un proceso de larga duración con procesos sociales e institucionales y actores con ideología y tendencias *centrífugas* y *centrípetas* con respecto a las pretensiones del Estado central. Lo importante es rescatar la importancia normativa que tiene en este proceso la participación civil y el juego democrático para alcanzar un estadio donde exista equilibrio y complemento entre las “partes” (las regiones en formación) y el “todo” (el Estado y la Nación); máxime cuando a lo largo de más de medio siglo, han predominado los conflictos sociales y políticos frente a la regulación y se ha impuesto la violencia sobre la institucionalidad formal²⁷. Aún así, es claro que en las subregiones del Ariari, el Duda Guayabero y el Río Meta, el Estado ha tenido un desarrollo más lento y diferenciado que en los municipios cercanos a Villavicencio y que, por otra parte, las lógicas de dominación en las zonas más apartadas han estado ligadas a la organización de grupos armados (guerrillas liberales y comunistas); subculturas regionales (Cundinamarca, Huila, Boyacá, Santander, Antioquia) y partidistas (Liberales, Conservadores Comunistas, Unión Patriótica); grupos de justicia privada y bandas de narcotráfico (Rodríguez Gacha, Victor Carranza, Miguel Arroyabe, Martín Llanos, etc.). Estos sectores han conformado *redes de poder* que, en un juego ambivalente, oponen resistencia al Estado y, al mismo tiempo, intentan hacer parte de él a través acciones tanto legales como violentas.

En toda la amplia zona del sur y el oriente del Meta, la violencia política ha sido una constante en la evolución del Estado local; existe entre

²⁵ GONZÁLEZ, Fernán (1998: 167)

²⁶ Esta es la situación que se vive actualmente en municipios como Vista Hermosa y fue analizada desde los años ochenta por algunos autores. Ver CUBIDES C., Fernando (1989: 332-367).

²⁷ TILLY, Charles (1992: 109, 152-153)

ambos fenómenos una estrecha relación histórica. Este es un factor que no puede soslayar ningún estudio ni ninguna propuesta política referida a la superación del conflicto actual. Por consiguiente, es necesario reconocer que tanto los grupos insurgentes como las facciones partidistas y para-estatales han jugado un papel clave en la formación del Estado en esta zona. Más allá de cualquier consideración de índole filosófica o moral, esto es una constante histórica que debe ser incorporada como parte sustancial de eventuales explicaciones sobre la persistencia de violencia en los municipios mencionados. Además, la construcción del Estado y, por ende, de la Sociedad Civil son procesos todavía inconclusos en esta zona del país.

Es así como algunas dinámicas relacionadas con el conflicto armado han jugado también un papel central (aunque poco deseable) en este proceso de constitución del Estado a nivel local y regional. En los últimos veinticinco años, las disputas entre los actores involucrados en el control por los *recursos de dominación política* han estado financiadas en buena parte por la economía ilícita de la coca. Desde los tiempos de las pugnas entre Rodríguez Gacha y las FARC por el control territorial y la regulación de la producción y comercialización de coca en La Macarena, Vista Hermosa y San José del Guaviare; pasando por el proceso de elección popular de alcaldes y la construcción de obras de infraestructura y modernización vial o económica, en los años ochenta y noventa; hasta las actuales disputas del Bloque Centauros y los distintos Frentes de las FARC por el control de amplias zonas del departamento y el reconocimiento político de sus causas; todo este proceso, repito, concierne a las tendencias a la centralización del poder político y al intento de participación de distintos grupos sociales en el ejercicio del mismo poder. En este contexto, los recursos provenientes de la producción de coca han servido para fortalecer la posición de los actores y para alcanzar sus objetivos estratégicos tanto en el plano de la ilegalidad como en su relación con el Estado.

Con todo, en el mismo periodo la situación predominante de conflicto armado ha determinado la *fragilidad de la soberanía estatal* en buena parte del Meta. Aún hoy, en sus distintos órdenes territoriales, el Estado no ha logrado detener la guerra ni pacificar los sociedad²⁸ y, menos todavía, garantizar la vigencia del orden constitucional y legal²⁹. La imposición del Estado a través de la coacción o cooptación y el consenso no ha ocurrido en todo este territorio. Por el contrario, en amplias zonas de las riberas del Ariari, el Guayabero y el Güejar, los grupos armados (amparados en cierta

²⁸ Incluso a nivel institucional, desde ciertos espacios periféricos del Meta, se ha cuestionado la autoridad de la Gobernación por considerarla lejana, ausente, indolente y poco eficaz en la solución de los problemas municipales. Un momento de especial crisis del poder político de los departamentos ocurrió poco después de promulgación de la Constitución de 1991 y con la creación del Corpes Orinoquia.

²⁹ URIBE, María T. (2000: 460)

legitimidad local) han construido *órdenes alternativos* donde rigen normas que escapan y/o se oponen al control del Estado y que reclaman para sí la soberanía en sus territorios³⁰. Esto es claro por ejemplo en las zonas rurales de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y la Macarena donde las FARC aspiran a consolidar una “nueva Colombia” e, igualmente, en una amplia zona de la ribera occidental del Ariari (Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia) y Guaviare (Mapiripán) donde el Bloque Centauros de las AUC piensa crear un polo de desarrollo con la ejecución de proyectos agrocomerciales y agroindustriales de gran impacto regional. Se tiene, entonces, un complejo contexto donde se yuxtaponen estos *órdenes alternativos*³¹ (se enfrentan a través de la guerra y la ejecución de proyectos de desarrollo) y, al mismo tiempo, se relacionan (negativa o positivamente) con el Estado que hace presencia en las Alcaldías, las Fuerzas Armadas y las entidades de orden Nacional y Departamental.

De esta forma, en las subregiones del Ariari y el Río Meta, la consolidación de la “soberanía” de estos órdenes alternativos ha estado mediada, en primera instancia, por la capacidad de los grupos armados ilegales de controlar el ejercicio de la coacción física sobre los habitantes (violencia, intimidación, convencimiento) y beneficiarse de las economías predominantes en la zona (coca, ganadería, comercio, transporte, agroindustria, etc.). En ambos aspectos, las FARC mantuvieron una posición más o menos dominante hasta 1997; cuando las AUC penetraron desde San José y Granada. De esta forma, cuando las AUC entran al “territorio histórico” de las FARC y disputan con éstas el establecimiento de órdenes alternativos, la confrontación por las rentas generadas por la producción de base de coca (la principal economía) y el ejercicio de la coacción física se tornó especialmente violenta. El monopsonio en el mercado de la base de coca y el cobro de “contribuciones” permitieron acelerar el reclutamiento de combatientes y financiaron la guerra; al mismo tiempo aumentó el control sobre la movilidad, la residencia y el desplazamiento de la población, esto era igualmente necesario tanto para mostrar su poder político como para impedir que el bando contrario se apropiara de los excedentes provenientes de economía ilícita.

En conclusión, el conflicto armado ha sido la expresión y un medio fundamental para alcanzar la centralización política y la integración de territorios periféricos en el Meta. De la misma forma, actores de distinto origen social, regional e ideológico han buscado jugar papeles centrales frente al Estado para alcanzar de éste reconocimiento legal y poder local o regional; no importa que para esto deban recurrir a medios ilícitos y violentos. Por su parte, el Estado y sus representantes políticos han querido

³⁰ URIBE, María T. (2000: 459- 460).

³¹ URIBE, María T (2000: 460).

integrar los territorios y las poblaciones donde operan grupos armados ilegales a través del estímulo a la colonización y ocupación de territorios baldíos; la ejecución de planes de inversión pública (vías de comunicación, obras de infraestructura, apoyo a grandes proyectos productivos, etc.); la persecución a economías ilícitas (erradicación forzada, incautación de precursores químicos, desmantelamiento de carteles, proyectos de sustitución de cultivos) y reformas políticas y administrativas de corte modernizante (descentralización fiscal, desconcentración de funciones, elecciones locales). Estos procesos han sido especialmente intensos en los últimos veinte años y se han concentrado con mucha fuerza en antiguos espacios de control guerrillero y de existencia de grandes recursos naturales (incluidos los cultivos ilícitos).

En este contexto de lucha abierta por el poder político ha ido naufragando poco a poco el espíritu tecnocrático que se vivió en los años de auge de la descentralización. Así por ejemplo, se decía hace diez años que un indicador fundamental del nivel de desarrollo institucional de los municipios era su capacidad de obtener recursos de cofinanciación y la prioridad en los proyectos que se emprendía con estos recursos era la construcción de vías o redes de acueducto y alcantarillado. Además, se argumentaba que la capacidad de las localidades se mediría en la posibilidad de generar recursos propios a través del cobro de impuestos, en especial, el derivado del catastro rural. Sin embargo, en subregiones como el Ariari o el Duda, de reciente colonización y donde existen Parques Nacionales o Áreas de Manejo Especial, el cobro de impuestos de esta naturaleza ha sido una de las grandes debilidades para la autonomía municipal³². En realidad, la mayoría de sus municipios son jóvenes y enfrentan dificultades administrativas, fiscales y de planificación bastante serias que dificultan el proceso de municipalización de las funciones de gobierno que deberían realizar. Esto sin mencionar las funciones de protección y vigilancia de los derechos humanos en un escenario de conflicto armado interno.

Frente a las debilidades de gobierno de la mayoría de los municipios de las subregiones del Ariari, el Duda y el Río Meta, el Departamento ha mantenido, pese a todas las críticas, un lugar de supremacía. Hoy la Gobernación cumple funciones clave como articular los diferentes niveles de administración del Estado; además ejecuta planes y proyectos y presta servicios sociales. No obstante, dichas funciones dependen administrativa y financieramente de los correspondientes ministerios y están concentradas a nivel territorial. Así, el Ariari, por ser una subregión relativamente integrada a Villavicencio, recibe mucha influencia de la Gobernación (especialmente el Alto Ariari). Con todo, en el Medio bajo Ariari, los municipios tienen diferentes niveles de consolidación y obedecen a diversas dinámicas locales

³² Entrevistas con funcionarios de Vista Hermosa y Puerto Rico.

que han interferido en el proceso de descentralización o han presionado el ordenamiento territorial en cierta dirección. El origen de la mayoría de estas dinámicas, como se dijo, está en la violencia política y en la lucha territorial e ideológica que mantienen el Estado, los grupos políticos, los paramilitares y la guerrilla. Son estos los factores que han condicionado la modernización institucional en los municipios del Ariari, por encima de las necesidades económicas de las zonas marginales, manifestadas por las organizaciones e instituciones sociales, o de los grandes proyectos de integración regional y nacional impulsados por el Estado³³.

Consideraciones en Torno a la Formación del Espacio

La zona de estudio es uno de los territorios menos desarrollados de la Orinoquia colombiana; allí no existen grandes ciudades y los municipios tienen una frágil estructuración urbana debido a las singularidades económicas y sociales de su poblamiento en distintos periodos³⁴. No obstante, para cualquier programa de desarrollo resulta fundamental poner en evidencia las singularidades de génesis y jerarquización de estos centros para comprender la complejidad de las dinámicas sociales que organizan su espacio, por muy incipientes que éstas sean. Es de especial importancia para la zona detectar las regularidades sociales y económicas que han marcado la evolución de sus municipios, profundamente ligados a la estructura agraria de sus espacios de influencia en momentos en los cuales se profundiza el proceso de integración al resto del departamento.

Durante mucho tiempo, la zona de estudio se caracterizó por su alto grado de inestabilidad en el afianzamiento de una red urbana y fue definida como periférica y de escasa integración económica y social al resto del país³⁵. Desde la década de los ochenta, se diagnosticó que estos municipios enfrentaban grandes obstáculos para asumir a cabalidad la anunciada autonomía administrativa y política anunciada en las primeras medidas de

³³ Incluso en algunos municipios, los grandes proyectos productivos, protegidos por grupos armados al margen de la ley, compiten con las capacidades del Estado para crear relaciones de cohesión entre la población.

³⁴ La Orinoquia es una amplia región natural conformada por departamentos como Vichada, Casanare, Arauca, Meta, Guaviare y Guainía. Cerca del 80% de los municipios de esta región tiene características predominantemente rurales; solo una pequeña parte de ellos, menos del 18%, pueden ser considerados asentamientos con algún grado de desarrollo urbano.

³⁵ Los municipios oriente y sur del Meta han crecido con deficiente dotación de infraestructura productiva y han sido receptores de flujos migratorios expulsados por diversas razones del interior del país o atraídos por los periodos de auge en los ciclos de algunos productos de exportación (quina, caucho, marihuana, coca). Las excepciones parciales a esta situación son Puerto López y Granada, municipios con poblaciones urbanas de importancia y sin registros de existencia de cultivos ilícitos.

descentralización y afianzadas luego con todo el proceso desatado por la Constitución de 1991.

Esta zona tampoco ha conocido un dinamismo demográfico notable, en los últimos diez años apenas ha elevado en cerca de 15 mil personas su población (tabla 1)³⁶. Sin embargo, la economía de la coca y la explotación de recursos forestales han impulsado el crecimiento y la creación de nuevos corregimientos y veredas en un proceso que conserva una significativa dinámica en algunos municipios como La Macarena (El Rubí, San Juan de Losada), Vista Hermosa (Santo Domingo, Puerto Nuevo, Piñalito), Puerto Rico (Puerto Toledo) y Concordia (El Trincho, el Mielón). En síntesis, la consolidación de estos municipios es reciente e inestable y está sujeta, en primera instancia, a las eventualidades de recursos naturales, la producción de coca o al crecimiento de otras actividades productivas del sector primario. No se han establecido en la región centros industriales ni se han puesto en prácticas políticas de crecimiento económico que tengan como base la utilización racional de los recursos naturales para aprovechar sus posibles ventajas competitivas.

Tabla 1
POBLACIÓN MUNICIPAL MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS SUBREGIONES DE ARIARI Y DUDA-GUAYABERO

Municipios	1995	1998	2001	2004
Mapiripán	9,745	10,098	10,464	10,820
Mesetas	13,146	13,706	14,297	14,889
La Macarena	12,123	12,805	13,538	14,295
La Uribe	8,825	9,201	9,598	9,995
Puerto Concordia	10,714	11,498	12,351	13,253
Puerto Rico	17,249	18,512	19,886	21,337
Vista Hermosa	18,536	19,069	19,609	20,111
Total	90,338	94,889	99,743	104,700

Fuente: DANE

Hasta hoy, la abundancia de recursos naturales no ha significado un viraje en la dinámica económica de estos municipios ni ha provocado una concentración de las actividades y los factores sociales que contribuyan a su desarrollo³⁷. Este hecho favoreció la llegada de cierta tendencia migratoria que buscaba agotar las posibilidades de enriquecimiento fácil sin pensar en un establecimiento permanente. Con todo, en muchos aspectos se

³⁶ Los datos han sido suministrados por el DANE y corresponden a las proyecciones de población; pero seguramente el conflicto armado y el desplazamiento forzado han afectado estas cifras en la realidad.

³⁷ Con todo, recientemente se ha impulsado algunos cultivo industriales como estevia algodón y palma de aceite en Vista Hermosa, Puerto Concordia, Puerto Rico y Mapiripán, sin que esto signifique un uso más racional de los recursos disponibles.

desconocen las características de ocupación del espacio y su potencial geográfico y económico. Hace diez años, desde el nivel central (Villavicencio) se comentaba que el Ariari y el Duda Guayabero hacían parte de las áreas de frontera interna, de colonización y poco polarizadas³⁸, donde los procesos económicos no eran homogéneos ni articulados sino aislados y coyunturales con respecto al resto del Departamento.

Además, debido a las singularidades políticas de su poblamiento, en las cuales habían jugado un papel importante la violencia y los antagonismos ideológicos, esta zona del Departamento era un territorio profundamente segmentado en lo espacial y en lo social. En muchos lugares, el ejercicio de los derechos y las libertades civiles parecían estar limitadas a ciertas minorías, como sucedió en los más duros momentos de la Violencia de los años cincuenta. En este sentido, los ríos Ariari, Duda, Guayabero y Güejar eran todavía fronteras políticas y económicas que trazaban marcadas diferencias entre los habitantes del Meta.

Los Desequilibrios Espaciales en las Zonas Productoras de Coca

Los desequilibrios regionales son, a la vez, causa y efecto de las decisiones estatales, de manera que sin una interacción de hipótesis económicas, políticas y sociales no se puede esperar³⁹ ninguna explicación viable del mismo fenómeno. Sin embargo, la preocupación por la planificación y el desarrollo de las ciudades fue anterior a la aparición del interés por el ordenamiento del territorio y a los fundamentos de la planificación regional. Este hecho es fácilmente constatable en regiones marginales o fronterizas como la Orinoquia donde se fundaron capitales intendenciales o comisariales por razones de soberanía o para enfrentar conflictos con países vecinos⁴⁰. Así mismo, en la actualidad son pocas las cabeceras municipales de las zonas productoras de coca que cumplen funciones distintas a las administrativas.

La aparición de ciudades es, entonces, un hecho prácticamente inédito en esta zona. Se puede decir que sólo existe una concentración humana que puede recibir este calificativo en San José del Guaviare, cuya fundación data de mediados de...⁴¹. A otro nivel, el nacimiento y el crecimiento de Granada

³⁸ Esta amplia zona se polariza alrededor de tres municipios de influencia regional: Granada, San José del Guaviare y San Vicente del Cagüan.

³⁹ Como consecuencia de los graves desequilibrios entre las regiones, los Estados generalmente deciden proceder a un verdadero ordenamiento del territorio. Los principales objetivos de este proceso son, con frecuencia, redistribuir las actividades económicas, corregir los desequilibrios a través del impulso a puntos claves del espacio e invertir en el desarrollo de lugares marginados de la acción del Estado. BAILLY, Antoine (1988: 12 - 22).

⁴⁰ Así, se fundaron Puerto Carreño en 1925 y Mitú en 1935.

⁴¹.

como epicentro de la subregión del Ariari, no ha revestido un hecho de importancia para la red urbana nacional⁴². Por las anteriores razones, se debe señalar que la importancia del proceso de ocupación del espacio en las zonas de estudio se encuentra hoy en su posición geopolítica⁴³ y que fue, ante todo, un espacio en construcción definido por condiciones naturales donde los ríos Ariari, Güejar, Guayabero y Guaviare sirvieron de “corredores poblacionales” para la configuración de una realidad social que no es homogénea ni está aún consolidada⁴⁴. En su interior se puede distinguir, y no solamente por factores naturales, la siguiente división:

ALTO ARIARI: Cubarral, El Dorado, El Castillo y Granada⁴⁵.

MEDIO ARIARI: Lejanías, San Juan de Arama y Fuente de Oro.

BAJO ARIARI: Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia⁴⁶.

DUDA- GUAYABERO: Mesetas, La Uribe, Vistahermosa, La Macarena.

RÍO META: Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuayaro y Barranca de Upía.

Cada uno de estos sectores ha conocido un proceso de colonización y poblamiento que lo diferencia en el contexto del departamento (ver mapa 2).

El Alto Ariari fue el primero en consolidarse con una migración campesina fundamentalmente liberal y conservadora que empieza en los años treinta. Ejemplo de este proceso son los actuales municipios de El Castillo y San Luis de Cubarral. Durante largo tiempo, en su interior se

⁴² Este municipio es un modelo de ocupación relativamente dirigido y asistido por el Estado, pero en el interior del espacio de su influencia se ha configurado un cuadro económico y social sustentado por la iniciativa individual y al margen de los procesos recientes de colonización.

⁴³ Con el inicio del proceso descentralizador, el Ariari-Guayabero cambia de significado para el resto del departamento, se le considera ahora una zona estratégica política y económicamente. Por distintas razones, en esto coinciden los actores enfrentados, tanto institucionales como ilegales.

⁴⁴ Sólo a partir de la creación de la Región de Planificación de la Orinoquia y de la formulación del Plan de Desarrollo Regional, donde se caracteriza al Ariari como una subregión “integrada” al área de influencia de Villavicencio, se considera la posibilidad de que el Estado introduzca elementos para el ordenamiento territorial.

⁴⁵ A pesar de ser la zona menos extensa de las tres, ha sido de gran importancia por hallarse cerca de Villavicencio y porque sus tierras poseen gran valor agrícola. Además, constituye el entorno de Granada.

⁴⁶ Con cierta frecuencia se incluye a Mapiripán y a La Macarena dentro del grupo de municipios de influencia de Granada, pero en realidad estas localidades se encuentran a orillas de los ríos Guayabero y Guaviare, relativamente lejos del Alto Ariari. No obstante, tanto La Macarena como Mapiripán tienen importantes nexos económicos con Vistahermosa y Puerto Concordia, y están en la zona de influencia de San José del Guaviare.

desarrolló y demarcó el enfrentamiento ideológico que caracterizaba a toda la subregión. De una parte estaban Medellín del Ariari y El Castillo, localidades de mayoría comunista; de otro Cubarral de antiguo predominio conservador, y El Dorado que, en la década del noventa, fue ascendido a municipio, aparentemente como estrategia de los sectores que apoyaban a los grupos paramilitares para debilitar a las localidades de mayoría comunista.

En el Medio Ariari y el Duda, Lejanías y Mesetas fueron pobladas por campesinos que provenían del Tolima y la región de Sumapaz, muchos de los cuales estaban orientados por el Partido Comunista. Hasta allí llegaron antiguos integrantes de las “Columnas de Marcha” e iniciaron un proceso de colonización que se extendió entre 1955 y 1962, tiempo en el cual fue ocupado todo el territorio⁴⁷. Durante los años ochenta, esta zona fue escenario de disputas electorales entre facciones Liberales y la Unión Patriótica, asunto que trajo mucha violencia por la intervención de los primeros grupos paramilitares, organizados por Rodríguez Gacha⁴⁸ y el fracaso del proceso de paz entre el Estado y las FARC. En los años noventa, estos municipios se vieron afectados por el desplazamiento forzado como efecto de una nueva ola de violencia política⁴⁹.

El Bajo Ariari muestra una consolidación tardía producto del aprovechamiento de las instalaciones de las antiguas bodegas de la RUBBER DEVELOPMENT COMPANY, la influencia del proceso colonizador del Duda-Guayabero y la proliferación de los cultivos de ilícitos desde los años setenta (marihuana) y ochenta (coca)⁵⁰. Dentro de esta zona ocurren procesos de colonización con una relativa autonomía del centro de influencia de Granada⁵¹; Puerto Rico y, en especial Puerto Concordia, están estrechamente ligados a la historia de San José del Guaviare. Además, buena parte de los flujos migratorios que poblaron las riberas del Guayabero desde La Macarena, procedían de San Vicente del Cagüan (Caquetá) o del mismo San José del Guaviare⁵².

Como puede apreciarse, en el interior mismo de estas amplias divisiones espaciales existen marcadas diferencias en el proceso de

⁴⁷ MOLANO A., (1989a: 286-288)

⁴⁸ Allí también tuvo lugar una disputa armada entre las FARC y un grupo del EPL que intentó establecerse en la zona a mediados de los ochenta.

⁴⁹ URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo. (1995: 53-63).

⁵⁰ MOLANO A., (1989a: 280-304).

⁵¹ Desde Puerto Lleras hasta San José del Guaviare y desde aquí hasta el municipio de La Macarena, a lo largo de los ríos, aparecieron en los años ochenta y noventa pequeños asentamientos cuyos habitantes derivan su sustento de la coca y el comercio de bienes traídos de Villavicencio, Bogotá y Cali.

⁵² Este proceso de colonización se extendió más hacia el oriente, llegando a Calamar y a Miraflores.

afianzamiento de los municipios. Esto es particularmente cierto en el Medio y Alto Ariari, las áreas de menor extensión territorial. Allí han existido espacios más o menos integrados y “desarrollados” dependiendo de sus condiciones naturales y sociales o políticas y su cercanía a polos urbanos como Villavicencio o Granada.

De otra parte, se puede decir que en el Ariari algunos de los actuales municipios no poseen lo que se considera un perímetro urbano y su erección como tales se debió a decisiones políticas de la Asamblea Departamental o de la Gobernación, en las cuales mediaron intereses electorales o territoriales por encontrarse, los nuevos entes territoriales, en lugares limítrofes con otros departamentos. Por su número de habitantes y por su importancia económica apenas podían ser considerados municipios. Este fue el caso de Puerto Concordia sobre el Ariari y en límites con Guaviare; La Macarena en el Guayabero, en zona limítrofe con Caquetá; Mapiripán sobre el Guaviare, muy cerca a San José y, hace doce años, por razones económicas y electorales, El Dorado en el Alto Ariari⁵³.

En pocas palabras, la gran inestabilidad del proceso de consolidación de las cabeceras municipales en esta parte de la Orinoquia es bastante clara. No obstante, en el Ariari-Güayabero y en Oriente del Departamento las localidades han mostrado una fuerte tendencia a constituirse en municipios. De manera sostenida y al poco tiempo de ser fundadas, en los últimos cuarenta años, la mayoría de las quince localidades donde se han registrado cultivos de coca, se han erigido en municipios.

Sin embargo, la adopción de las decisiones de ordenamiento tuvo efectos variados en las localidades involucradas que, en ocasiones, no fueron consultadas⁵⁴. Estos municipios se opusieron algunas veces a las disposiciones de la Asamblea Departamental o de la Gobernación. El impulso que recibieron los gobiernos locales, a través de la descentralización y los planes de modernización del Estado en los años ochenta y noventa, los llevó a asumir un papel más protagónico en ciertos litigios territoriales con sus vecinos⁵⁵. Indudablemente, aparecieron conflictos en el desarrollo de estas

⁵³ Como se mencionó, la mayoría de estos municipios son rurales, su población total ha sido inferior a 20.000 habitantes o tienen un alto porcentaje de residentes “flotantes” debido al cultivo de coca, como es el caso de Vistahermosa o Puerto Rico. Según la clasificación realizada en 1994, con base en el censo nacional de 1993, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley de modernización de los municipios, solamente Granada y Vistahermosa estaban en cuarta categoría, los demás (Lejanías, El Castillo, Fuente de Oro, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico) se ubicaban en la quinta o sexta y última categoría (Cubarral, La Macarena, Mapiripán).

⁵⁴ El caso más resonado fue la creación de El Dorado con la secesión de territorio del Castillo y Cubarral.

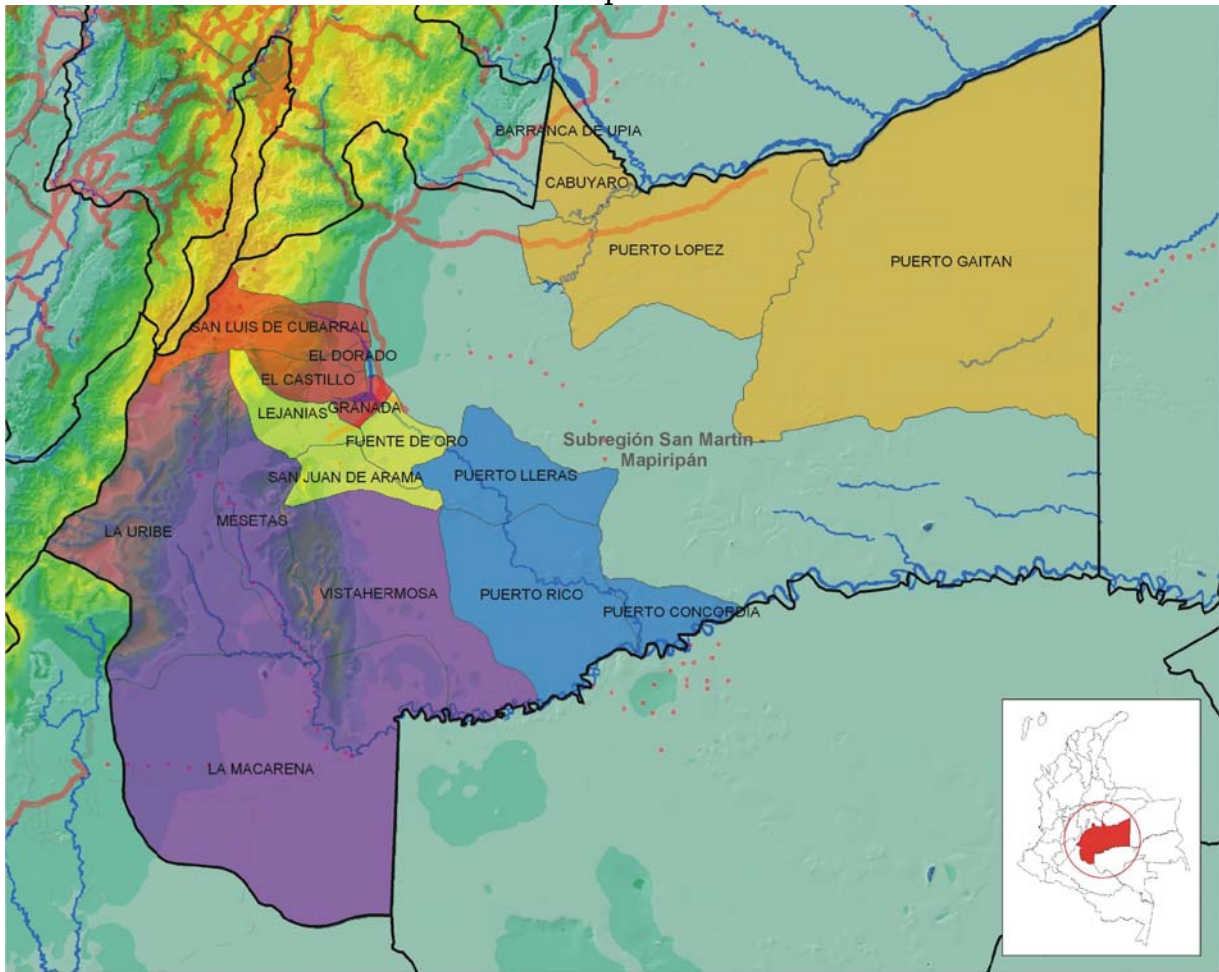
⁵⁵ Otro caso de importancia fue el litigio entre La Macarena y San Vicente del Caguan por la zona de San Juan de Losada.

políticas dictadas por los departamentos que, según la Ley, deberían tener como principal ejecutor a los municipios, en sus espacios de intervención locales. En este sentido se podía decir que buena parte del Ariari y el Oriente del Departamento habían llegado a ser espacios de intervención política que marchaban muy cerca del proceso de descentralización⁵⁶ pero en medio de profundas divisiones ideológicas, electorales y económicas.

Con todo, los efectos de estas políticas de modernización del Estado en una situación de violencia no han sido evaluados hasta el momento. Aún es necesario indagar por los resultados de la imposición de las decisiones de ordenamiento y descentralización en una subregión de reciente configuración socio-espacial y marcada por la violencia política. Tampoco se ha analizado por qué razones, en qué medida y con cuáles características, estas subregiones llegaron ser un espacio de intervención institucional.

⁵⁶ BAILLY, Antoine, et. al., op. cit., Pag. 12 - 13.

Mapa 2



- Limite departamental
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Cacerío
- Río
- Carretera pavimentada
- Carreteable

**División Interna
Subregión Ariari**

**Análisis de la economía política de la coca
en el departamento del Meta 1982-2004**

Fuente: Cinep

- ALTO ARIARI
- MEDIO ARIARI
- BAJO ARIARI
- DUDA- GUAYABERO
- RÍO META

La Economía y Los Macroproyectos de Ordenamiento Territorial

Desde los años noventa y como efecto de la Constitución de 1991, el Estado Colombiano intentó corregir los desequilibrios espaciales en la región de la Orinoquia y dentro de los proyectos de reorganización de este espacio, el Ariari apareció como una de las subregiones con mayores posibilidades de inserción en una órbita económica con el interior del país. Al menos los municipios más cercanos a Granada, como Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro, El Dorado o San Juan de Arama.

Ciertamente, la cercanía al pie de monte y a Bogotá del sector de influencia más fuerte de Granada, posibilitaría, al menos en teoría, la comunicación terrestre y el flujo de mercancías, servicios y personas, favoreciendo así su desarrollo. Sin embargo esto no sucedió en la medida requerida por razones que se tratará de exponer.

Desde aquellos años, en la subregión del Ariari subsiste un modelo territorial y económico basado en la gran propiedad ganadera (medianamente tecnificada⁵⁷) o la producción agrocomercial⁵⁸; sin embargo, entre más se desplazaba la mirada por el río Ariari o Güejar hacia el sur, era palpable la implantación de un modelo distinto, basado en la ganadería extensiva, poco productiva, la economía campesina y en el cultivo y el procesamiento de la coca⁵⁹. Con todo, estos modelos pervivían y se retroalimentaban.

En consecuencia, era posible reconocer algunos circuitos económicos (producción y comercialización) de importancia regional, entre sectores como la agricultura agro-comercial (arroz, soya, sorgo, algodón, maíz tecnificado, palma africana, cacao, caña, café) y las frutas (cítricos, papaya); la ganadería extensiva o semi-extensiva; el comercio; el transporte de pasajeros y de carga, tanto terrestre como fluvial; los servicios financieros; la economía campesina; pesca artesanal o tecnificada; pequeña empresa manufacturera, talleres de carpintería, aserrios, talleres de metalmecánica, etc.; construcción, civil y de vivienda; turismo, tradicional y ecológico y cultivo y procesamiento de la coca.

Todas estas dinámicas, con diversos grados de articulación recíproca (unas proveían materias primas o bienes intermedios a las otras o hacían

⁵⁷ La ganadería tecnificada es aquella que aumenta la relación número de cabezas/hectarea (capacidad de carga), introduce prácticas de manejo de pastos y recuperación o protección de bosques.

⁵⁸ Esta última principalmente en los municipios cercanos a Granada.

⁵⁹ Según declaraciones de los alcaldes de Puerto Concordia y Puerto Rico, en 1996, más del 80% de la población de estos municipios vivía del cultivo de coca.

traslados de capital hacia otras), realizaban distintos aportes al Producto Interno Bruto o al valor invertido anualmente en la región a través de, por ejemplo, la generación de empleo o de excedentes⁶⁰. De igual manera estos circuitos económicos, según el producto que generaban, estaban ligados a escenarios locales, regionales, nacionales e, incluso, internacionales.

Además, como se dijo, no existían actividades industriales que permitieran jalonar grandes procesos de desarrollo urbano. Las oportunidades económicas de la subregión se derivaban, en gran medida, de las especiales condiciones naturales que ofrecían para actividades como la ganadería, la agricultura comercial o la agro-industria, más productivas que la agricultura campesina.

Sin duda, entonces, el nacimiento y consolidación del Ariari como subregión se debe, aún hoy, al influjo básico de la economía de mercado, al actuar de los agentes particulares y muy poco a la acción del Estado⁶¹. Esta situación es ajena a los principios básicos del ordenamiento territorial que considera fundamental la intervención del Estado para equilibrar las diferencias de desarrollo de las regiones, producto de los diversos grados de estabilización de los procesos productivos capitalistas.

Así, en la década de los sesenta un sector del Alto Ariari conoció una fase de colonización “empresarial” que significó la inserción de la producción agrícola y ganadera en un medio capitalista; a diferencia de una fase anterior de colonización campesina que incorporó estas tierras a la frontera agrícola nacional. Además, la acción del Estado durante el Frente Nacional, en el desarrollo del Programa de Rehabilitación, no logró consolidar una estructura agraria donde primara la producción campesina tipo *farmer*; por el contrario, pese a la inversión en obras de infraestructura (construcción de la carretera Villavicencio-Granada o el puente sobre el río Ariari) y la creación de algunos créditos, muchos campesinos asentados en las tierras aledañas a Granada, desde los primeros años de violencia, vendieron sus fincas a los “empresarios” y reanudaron el proceso de colonización sobre los cursos de los ríos Güejar, Ariari, Duda y Guayabero.

Este fenómeno, suficientemente analizado por distintos autores, condicionó la estructura agraria de buena parte de la subregión del Ariari⁶². Esta forma de apropiación del espacio, en la cual la colonización campesina

⁶⁰ No se conoce un estudio pormenorizado de los aportes de estas dinámicas económicas al desarrollo social de la región Orinoquense, un balance global lo ofrece el Plan de Desarrollo realizado por el Corpes. Ver: Corpes de Orinoquia. ORINOQUIA HACIA EL SIGLO XIX, págs. 53-75.

⁶¹ Sobre los procesos de poblamiento y desarrollo histórico asistidos por el Estado, puede consultarse MOLANO A., (1989a) y GONZÁLEZ José J. (1992).

⁶² Ver: FAJARDO M., Dario (1987).

valoriza el suelo haciéndolo apto para el cultivo o la ganadería, en beneficio del “empresario” que luego compra las *mejoras*, se mantiene hoy vigente y representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y la acción del Estado, en sus diversos niveles, en la ejecución de políticas de ordenamiento territorial en el Ariari y el Duda-Guayabero.

Se puede decir, entonces, que estas subregiones se han especializado en actividades ganaderas, agro-comerciales y, recientemente, agro-industriales, gracias a ciertas condiciones de localización, que tienden a extenderse a otras áreas, dentro de sus mismos límites, dotadas de condiciones semejantes, en ausencia de modelos alternativos de desarrollo económico que implicarían una acción más concentrada del Estado. Esto era claramente perceptible antes (en los años ochenta y noventa) en municipios como Granada, Fuente de Oro, Cubarral, El Dorado o San Juan de Arama; hoy se aprecia la misma tendencia en otros municipios más distantes como Concordia, Mapiripán y Vista Hermosa.

Entre tanto, para muchos pobladores rurales del Medio y Bajo Ariari solamente ha existido la alternativa comercial que ofrece el cultivo y el procesamiento químico de la coca. Esta alternativa invirtió los postulados de rentabilidad económica formulados para las actividades legales⁶³; de esta forma, la producción de coca se vio estimulada por el aislamiento y la relativa marginalidad espacial del área, la protección armada ejercida por la guerrilla, la existencia de vías alternas de exportación (grandes ríos, pistas clandestinas de aterrizaje) y la cercanía de grandes espacios fronterizos sin vigilancia.

En resumen, el Ariari se ha especializado por acción o defecto de actores sociales e institucionales en tres actividades económicas: la agricultura comercial y agroindustrial; la ganadería semi-extensiva o extensiva y la producción de coca en espacios claramente delimitados. Esto debido a la existencia de condiciones particulares de dotación ambiental “restringida” en la mayoría de su territorio (clima húmedo tropical y suelos ácidos y poco fértiles) y de localización marginal en términos sociales e históricos.

Paradójicamente, fueron las condiciones naturales las que incitaron la colonización y poblamiento del Ariari. Durante la primera etapa migratoria muchos colonos llegaron atraídos por la presencia abundante de un recurso básico como el agua, la fertilidad de algunos suelos (piedemonte llanero) y la

⁶³ Como se sabe, la economía de la droga invirtió la lógica espacial de la localización productiva con referencia a los grandes centros de consumo. Entre más lejos se encontrara el lugar de su producción y mejor garantizaran las condiciones territoriales su clandestinidad, mayores eran las oportunidades de ganancia para el cultivador o procesador.

presencia de tierras baldías o de reserva forestal; más tarde estas mismas condiciones facilitarían la aparición de cultivos ilícitos. A esto hay que agregar la situación de marginalidad espacial y política que predominó y aún prevalece en algunas áreas de la subregión que llevaron a constituir lo que un sociólogo llamó “zonas de exclusión”⁶⁴.

Esta es sin duda la situación del Medio y Bajo Ariari hasta los años ochenta cuando comienza a ser considerada un lugar de importancia geopolítica por algunos sectores dominantes. También se reconoce su importancia económica por la relación especial que mantiene con Guaviare. Al menos en su formulación legal, el impulso al reordenamiento territorial y a la descentralización en regiones anteriormente marginadas como el Ariari procedió de una élite política nacional y regional que entendió y se propuso seguir el camino de transformaciones internacionales en boga durante los años noventa; sin embargo, la necesidad de adoptar estos cambios no fue bien entendida por algunos sectores de la clase política departamental y local que siguió anclada en viejos estereotipos clientelistas. Este proceder se vio materializado en las reacciones políticas de organismos como la Asamblea Departamental o la Gobernación, que, deliberadamente, mantuvieron el aislamiento de algunos municipios del Ariari considerados de violencia crónica o presencia guerrillera y donde las lealtades partidistas no eran tan fuertes como para ofrecer un respaldo indiscutible en época de elecciones.

Esto explica, en parte, la pugna que se observó entre los municipios del área especial de manejo de la Macarena⁶⁵ y los de la subregión más integrada a Villavicencio que recibían los mayores recursos de inversión del departamento y estaban claramente adheridos a alguna corriente política liberal o conservadora. Tal vez por esta razón la concentración espacial de las actividades económicas y políticas del departamento se daba en áreas limitadas, cercanas a Villavicencio. Por esto también las políticas de descentralización y de ordenamiento territorial beneficiaron especialmente a municipios como Acacias, San Martín, Puerto López y Granada. Además de suministrar lealtades políticas, estos municipios tenían mayor capacidad institucional, más recursos financieros y mejor dotación de servicios públicos.

Estas circunstancias se corroboran señalando algunas características de los “macro-proyectos” de la subregión, como fueron definidos, por ejemplo, el diseño y montaje del Distrito de Riego y Drenaje; la pavimentación de la carretera troncal que llega a San Juan de Arama y se extiende luego hasta Vista Hermosa; la terminación y pavimentación de la carretera Granada –

⁶⁴ GONZÁLEZ, José J (1992: 29-35 , 80-97).

⁶⁵ Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa, La Uribe, La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia.

San José del Guaviare, que integraría todo el bajo Ariari al Departamento; la conversión de Granada en el centro urbano y proveedor de servicios más importante; la construcción de la carretera Colombia-La Uribe, inexistente hoy en día⁶⁶, etc. Como puede verse, una visión basada en la integración urbana, del centro (Villavicencio) hacia la periferia (zonas de colonización), pero muy poco en términos de conservación ambiental o de recuperación de zonas productoras de coca, particularmente en el Oriente del Departamento (Mapiripán) o en el Área de Manejo Especial de la Macarena que, en otro sentido, constituyen aspectos estratégicos para el desarrollo de todo el Departamento y beneficiarían, en primer lugar, a los municipios más deprimidos del Bajo Ariari y el Güayabero.

Un breve balance de la planeación y/o ejecución de los “macro-proyectos” más sonados durante la década de los noventa muestra claramente los sectores sociales y los municipios que se beneficiarían de su ejecución. Se puede sostener que la intervención social del Estado en el departamento del Meta se dirigía a los municipios más integrados a nivel espacial y político y, de esta forma, podía favorecer o alentar viejos patrones de lealtades partidistas, aún en un periodo de pleno impulso al proceso de descentralización y supuesta corrección de los desequilibrios espaciales.

Así, por ejemplo, transcurridos ocho años de la realización de los estudios de factibilidad, a cargo de una misión japonesa, en 1997, comenzó la ejecución del “Proyecto de Desarrollo Agrícola Integrado para la Cuenca del Río Ariari” (más conocido como el Distrito de Riego y Drenaje) que, pese a su nombre, sólo beneficiaría a tres de los trece municipios del área: Granada, Lejanías y Fuente de Oro⁶⁷, es decir al Medio y Alto Ariari. El objetivo técnico de este plan, que llevaba tres años de preparativos, era incrementar la productividad agrícola de la tierra en un 106 por ciento, con la construcción de canales de riego y drenaje que captaran el agua del río Guape⁶⁸. En lo social contemplaba el mejoramiento y la construcción de vías de

⁶⁶ En teoría, la construcción de la Carretera entre Meta y Huila permitía ampliar los márgenes de integración de esta sección del Ariari pero los efectos ambientales sobre la zona especial de manejo de la Macarena eran muy negativos. Ver “La otra Granada”, en Oriente 2000, diciembre-enero de 1994, Pág. 29 - 33.

⁶⁷ “La obra comprendía 41.100 hectáreas de las cuales 9100 corresponden al municipio de Lejanías, 15.400 a Granada y 16.600 a Fuente de Oro”. Llano 7 Días, Diciembre 21 de 1993, pág. 9.

⁶⁸ El proyecto involucraba aspectos como la utilización de semillas certificadas, la asistencia y transferencia técnica y agronómica apropiada, la conservación de los bosques sobre la cuenca del río Guape y la reforestación obligatoria de los sitios cercanos a los caños y ríos que pertenecen a la vega del Ariari. El énfasis en la variable ecológica se debía a la importante disminución de los niveles de agua en las fuentes desde cuando fueron hechos los estudios de factibilidad.

comunicación, programas de energía, levantamiento de puentes y la creación de organismos cooperativos y de mercadeo⁶⁹.

De esta forma se quería estimular los cultivos agrocomerciales como sorgo, soya arroz maíz, cacao, palma africana, girasol, papaya y frijol; algunos de los cuales afrontaban problemas debido a la fuerte competencia de las importaciones. No obstante, para algunos críticos, el proyecto amenazaba con alterar de forma sustancial la propiedad agraria y fortalecer la acumulación de tierra en tres municipios en los cuales este fenómeno no estaba muy acentuado⁷⁰. Durante los cinco años que tardaría (1997-2002) su ejecución, esta posibilidad debería ser constantemente descartada por las medidas que adoptara el Estado y la organización de usuarios campesinos creada para tal fin.

En previsión de este hecho se estableció un criterio para determinar las dimensiones de las Unidades Agrícolas Familiares en el Ariari (UAF) que arrojó un promedio de 15 hectáreas por unidad productiva. Sobre esta base, una propiedad campesina podía obtener algún excedente económico acumulable. En 1995, el INCORA nuevamente adelantó estudios para determinar el número de hectáreas máximas que podrá tener cada propietario. La pauta utilizada esta vez tuvo como base el índice de productividad de los suelos, la cercanía a vías, el acceso a servicios de acueducto, salud, educación y electrificación. Además se intentó prohibir a los notarios y a las oficinas de registro de instrumentos públicos inscribir documentos de compra-venta de terrenos que superarán el límite fijado. De esta manera se buscaba detener el fenómeno de compra de predios que ya se venía observando y favorecer, de alguna forma, a los pequeños agricultores de la zona⁷¹.

Sin embargo, la decisión política complementaria más importante era declarar *zona de reserva campesina* las tierras sobre las cuales se construirá el distrito de riego. Por este medio se pretendía evitar la concentración de la propiedad, especialmente sobre la margen derecha del río Ariari donde la mayoría de los agricultores eran medianos y pequeños propietarios. Así lo

⁶⁹ Los recursos procedían de un crédito del gobierno japonés; el proyecto tenía, en 1994, un costo de 93 millones de dólares de los cuales el gobierno japonés aportaba setenta y el Gobierno nacional la diferencia. El órgano ejecutor era el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar (OECF) y la contratación se gestionó a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda. Llano Siete Días, *ibid.*, pág. 9.

⁷⁰ En 1995, el coeficiente Gini de concentración de la propiedad de la tierra en estos municipios era la siguiente: Granada: 0.49; Lejanías: 0.62; Fuente de Oro: 0.68.

⁷¹ Otras medidas que se consideraron necesarias para asegurar el éxito del proyecto fueron la instalación de una sede del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) en Granada, que se encargó de gerenciar las obras y crear la Asociación de Usuarios del Distrito de adecuación de Tierras del Ariari (ASOARIARI), como ente fiscalizador y participante en todo el proceso. Ver: Llano Siete Días, diciembre 5 de 1995, pág. 12.

entendió en su momento el director regional del INCORA quien promovió esta idea con poco éxito⁷². Se consideraba que sin disposiciones de esta magnitud, el proyecto sería aprovechado por los “empresarios” agrícolas, quienes usufructuarían la inversión realizada por el Estado y el Gobierno japonés a través de las obras directas o los subsidios⁷³, desplazando, una vez más, a los originales propietarios de las tierras mejoradas.

Como puede apreciarse, el proyecto de fortalecer la producción agrícola en el Ariari beneficiaría a municipios donde predominaba la moderna propiedad agrocomercial, donde se instalaron algunas pequeñas agroindustrias o, como en el caso de Lejanías, que tiene una localización privilegiada y una economía campesina importante que mejoraría sus posibilidades de crecimiento e integración. Con todo, hasta hoy, en el Ariari no se ha ejecutado este gran proyecto de ordenamiento territorial; en la mayoría de las situaciones, las decisiones políticas adoptadas por el Departamento o el Estado central han estado mediadas por intereses particulares o se han dejado en manos de la iniciativa privada, lo que ha agudizado los desequilibrios en la repartición de los recursos para su desarrollo. Todavía en 1999 este proyecto era presentado por la Gobernación como uno de los pilares para el desarrollo agroindustrial del Meta y se pedía que el Gobierno Nacional asumiera, con recursos del Plan Colombia, el 25% de contrapartida necesario para financiar el costo total de 93 millones de dólares⁷⁴.

Por este camino, el Medio y Bajo Ariari confirmaba su tendencia a ser una zona de frontera y de proliferación de fenómenos ilegales o paraestatales; es decir, a reforzar las condiciones de marginalidad y de pobreza que no era tanto un determinismo geográfico como la consecuencia del actuar abierto del liberalismo económico⁷⁵. En este contexto, esta parte de la subregión presentaba una condición especial: a pesar de ser una zona de antigua ocupación y de hallarse en el centro del país, estaba marginada por la inexistencia o mal estado de la infraestructura pública y social y de la red de vías.

⁷² “El área se vuelve atractiva para inversionistas y grandes agricultores quienes terminarán beneficiándose con la adecuación de las tierras”. Declaraciones de Alberto Castro Sandoval, Director Regional del INCORA, agosto de 1995.

⁷³ “El Estado colombiano se hace responsable de una parte del costo de acuerdo con los tipos de obras. Si éstas son consideradas como principales y de uso público, el Gobierno asumirá el cien por ciento de los costos [...] los pequeños productores, los que tienen menos de una UAF, recibirán subsidios hasta del 80% con lo cual el productor pagará en promedio del 20 por ciento [...] los medianos productores, quienes tienen entre una y cinco UAF, podrían asumir en promedio el 45 por ciento del valor de las obras. A medida que aumente el tamaño de los predios los estímulos bajarán” Llano Siete Días, agosto 29 de 1995, pág. 7.

⁷⁴ Ver: Llano 7 Días, junio 29 de 1999, pág.17.

⁷⁵ Delmas, 1963, *L'aménagement du territoire*, paris, PUF. Citado por BAILLY, Antoine (1988: 80).

Ciertamente, la construcción de vías ha sido el fundamento de las medidas de ordenamiento territorial en el Meta. Así, las primeras disposiciones que se tomaron sobre ordenamiento territorial para el Ariari y el Duda correspondieron al mejoramiento y pavimentación de las carreteras que conducen desde Villavicencio a San Juan de Arama, de Mesetas a La Uribe o de Puerto Lleras a Puerto Rico y Puerto Concordia⁷⁶. En opinión de la clase política del departamento, la ausencia de una infraestructura de transportes suficientes constituía un gran obstáculo a la expansión económica. En los últimos veinticinco años han sido notorias las peticiones de las comunidades apartadas o el interés de los gobiernos departamentales por impulsar la instalación de un moderno sistema vial⁷⁷.

Por consiguiente, la programación de la construcción o mejoramiento de las comunicaciones viales se convirtió en la base de la inversión estatal en las zonas elegidas para el desarrollo. Con frecuencia se incurrió en el error de confundir la instalación de un “viaducto” con el mismísimo desarrollo económico y social. Curiosamente este actuar descuidó el impulso a la navegación fluvial en el Ariari a partir de Puerto Lleras o en el Güejar, desde Piñalito. De hecho, estos ríos han servido de ejes de la colonización y en la fundación de localidades desde la época de la RUBBER DEVELOPMENT COMPANY y continúan siendo un acceso terrestre de importancia a ciudades como San José del Guaviare o municipios como la Macarena sobre el Guayabero.

Se argumenta que la pavimentación de la carretera que conduce de Granada a San Juan de Arama, por ejemplo, había dado un importante impulso a las actividades económicas de las subregiones y había sido un incentivo para la migración. No obstante, el proceso de integración económica con el resto del departamento, facilitado por el mejoramiento de esta vía, ha funcionado especialmente para el Alto y el Medio Ariari. Gracias a esto, poblaciones como Granada, San Juan de Arama, Fuente de Oro, Cubarral, El Dorado, Mesetas y Lejanías, han conocido un relativo impulso económico en los últimos años. Aún así, para citar un caso, el derrumbe del antiguo puente Guillermo León Valencia, en mayo de 1994, trajo consigo el

⁷⁶ El Ariari y el Duda cuentan con dos vías terrestres para su comunicación con el centro del país: una troncal que une a Villavicencio con La Uribe y otra transversal que se extiende desde aquella ciudad hasta San José del Guaviare. En proximidades a la primera se encuentran Vistahermosa, Mesetas, Lejanías y San Juan de Arama; en la segunda, Puerto Concordia, Puerto Rico y Puerto Lleras a todo lo largo del río Ariari. Granada sirve como punto de intersección.

⁷⁷ Se puede citar un gran número de noticias relacionadas con el tema, aparecidas a lo largo de años en los periódicos regionales.

aislamiento de siete municipios de buena parte de la subregión y mostró la fragilidad de su economía⁷⁸.

En la década de los noventa, las continuas adecuaciones y la pavimentación de la vía Granada – San José del Guaviare dieron lugar a polémicas regionales entorno al tipo de respuesta que daba el Estado a las necesidades de integración económica en los municipios del Bajo Ariari. Se discutió sobre los presupuestos exigüos, la falta de planificación vial, la escasa dotación de maquinaria y el limitado personal para el mantenimiento y, sobretodo, se denunció la corrupción en el otorgamiento de los contratos para la realización de obras de arte y la pavimentación de la carretera. Todos estos eran factores que repercutían en la calidad de los trabajos y eran señaladas como las razones para que no existiera una comunicación terrestre estable entre Meta y Guaviare⁷⁹.

Esta situación crónica fue motivo para que las FARC presionaran, con cierta frecuencia, la realización de paros de transporte y para que los campesinos se ocuparan, preferentemente en el cultivo de la coca, que “tenía mejor precio y menos dificultades de transporte” en relación con cualquier otro producto agrícola⁸⁰. En junio de 1995, la situación de la carretera Puerto Lleras- San José del Guaviare hizo crisis y la comunidad de las cinco localidades afectadas⁸¹ exigió soluciones de fondo. Esta vez los mismos alcaldes realizaron concentraciones en diferentes lugares y amenazaron con la realización de un paro cívico o con el cierre definitivo del tránsito por la vía. La petición generalizada de los habitantes fue la pavimentación definitiva de la carretera con la ejecución de los recursos destinados para tal fin por el Plan Nacional de Inversión para el Carreteable⁸².

No obstante, la caída del puente Guillermo León Valencia y la situación de las vías, develaron una realidad económica aún más dura para la subregion del Ariari: la postración de la producción agrícola en esos años. Entre 1992 y 1995 se presentó una constante reducción del área sembrada o una disminución del rendimiento por hectárea en productos como sorgo, soya, algodón y arroz. La competitividad de estos productos también

⁷⁸ Ver: Llano Siete Días, junio 7 de 1994. Pág. 23.

⁷⁹ Ver: Llano Siete Días, junio 13 de 1995, pág.22.

⁸⁰ “En esa época (1995) la mala condición de la carretera elevaba el valor de los fletes y aumentaba el costo de la vida; por esta razón los campesinos preferían sembrar coca”. Testimonio oral, Puerto Concordia, octubre de 2004.

⁸¹ Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, en el Meta y Puerto Arturo y San José en el Guaviare.

⁸² En mayo de 1995, el Gobierno había anunciado la destinación de 20 mil millones de pesos para el mejoramiento de la comunicación entre San José y el centro del país y la construcción de un puente sobre el río Guaviare en el sitio conocido como Puerto Arturo. Ver: Llano Siete Días, mayo 30 de 1995, Pág. 5.

disminuyó al presentar, en el mismo periodo, precios mas altos que los registrado en otros países suramericanos.

Los descensos en la producción y en los rendimientos de los cultivos semestrales incidieron negativamente en el empleo rural y en la participación del sector agrícola en el PIB regional⁸³. Aunque se presentó una reducción del área sembrada entre 1994 y 1995, adjudicada a la crisis que provocó la caída del puente, los rendimientos y la producción venían deteriorándose desde 1993. Cultivos tradicionales como el arroz y la soya habían tenido fuertes fluctuaciones (reducciones hasta del 28% en la producción de arroz y del 48% en soya) en esos años. Además, los problemas de comercialización se hicieron evidentes al estar, por ejemplo, los cultivos de sorgo en zonas de difícil acceso en municipios como Lejanías, Vistahermosa y Puerto Lleras⁸⁴.

Con todo, la situación fue percibida como crítica por los cultivadores del Ariari y el Duda. Las cifras totales evidenciaron un deterioro progresivo de la actividad agrícola en todo el departamento; los afectados eran tanto los “empresarios” como los pequeños cultivadores y los colonos. En opinión de los gremios (FENALCE Y FEDEARROZ), este hecho se debía a la falta de créditos, las altas tasas de interés, el alto valor de los insumos, la ausencia de políticas agrícolas y sobre todo, a los efectos de la apertura económica que posibilitaron la importación de arroz de Venezuela, Ecuador y Perú; maíz, soya y sorgo de Bolivia o Argentina a precios más bajos⁸⁵.

La terminación de los puentes “El Alcaravan” y la “Cubillera”, que reemplazaron al antiguo Guillermo León Valencia, en febrero de 1996, no disipó los temores de aislamiento económico de buena parte del Ariari. Los desbordamientos periódicos del río Ariari fueron percibidos como la principal “amenaza” natural para la economía de la subregión. Por esta razón, a finales de la década, el Corpes de la Orinoquia promovió la idea de construir una variante que comunicara el Ariari con el centro del país a través de La Uribe (Meta) y Colombia (Huila)⁸⁶. Esta idea hacia parte de otro “macro-proyecto” que intentaría comunicar los Llanos Orientales con el Océano Pacífico. No obstante, el Ministerio del Medio Ambiente señaló, en su momento, que los efectos ecológicos del “macro-proyecto” serían desastrosos porque atravesaría

⁸³ Cámara de Comercio de Villavicencio, *Indicadores Económicos Regionales*, 1993. Pág. 7.

⁸⁴ En el caso de los cultivos permanentes fue más apreciable la reducción en el área sembrada, que en la disminución de la producción o los rendimientos; con excepción de la caña de azúcar y el cacao. Incluso algunos productos campesinos como la papaya y el café presentaron tendencias al ascenso en la producción y en el rendimiento.

⁸⁵ La competencia extranjera favoreció una tendencia a la baja de precios de la producción agro-comercial en los Llanos Orientales. Ver: Cámara de Comercio de Villavicencio, op. cit., 1993-1995.

⁸⁶ En realidad, desde mediados del siglo XIX se construyó una trocha que comunica estos municipios aprovechando un paso natural en la cordillera.

una franja densa de bosque primario en el límite departamental y estimularía la colonización campesina⁸⁷.

Todavía hoy el comercio de la subregión del Ariari con el resto del país se encuentra limitado. A los obstáculos naturales y a la crisis del agro se agregaron poco después los factores de recrudescimiento del conflicto. Ciertamente, desde 1997, la lucha por el “dominio” territorial y económico de la subregión ha enfrentado a las FARC y al Frente Centauros de las AUC. En esta lucha, el control del acceso por la Troncal que comunica a Granada con San José se ha vuelto fundamental dado que por ella no solo transitan mercancías legales sino que es ruta obligada de entrada de insumos agrícolas y precursores químicos para el procesamiento de coca; no importa que sobre la misma vía se hayan intensificado los controles de la fuerzas militares luego del establecimiento de la “zona de distensión” y, recientemente, con la ejecución del Plan Colombia.

Para concluir se podría decir que los “macro-proyectos” mencionados evidencian en su planeación y ejecución un conjunto de conflictos por la construcción social del espacio en esta parte del Meta. A lo largo de décadas estos conflictos se pueden relacionar con otros definidos, en primer lugar, como relacionados con el proceso de ocupación y colonización (lucha por la tierra y los recursos naturales) y, segundo, como inherentes al control político del Estado y al enfrentamiento entre facciones partidistas en los niveles locales y regional⁸⁸. Sin embargo, en los años ochenta y noventa se intentó sobreponer a estos conflictos, primero, los planes de colonización dirigida en los años cincuenta y sesenta⁸⁹ y, segundo, la normatividad y las acciones de descentralización, planificación y ordenamiento del espacio desde una óptica modernizante y, hasta cierto, punto tecnocrática. Aún así, en los últimos años, la lógica del enfrentamiento armado y el auge de la economía ilícita en las zonas más apartadas terminaron por subordinar o rearticular los anteriores u otros conflictos, en buena parte del Departamento y en la Orinoquia. Sobre estos dos últimos temas se intentará hacer una explicación en lo que resta de este documento.

DIMENSIÓN Y PROBLEMÁTICA REGIONAL DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS

Desde el punto de vista espacial, los cultivos de coca en el departamento del Meta hacen parte de un continuum que se extiende desde el sur del país y se localiza, fundamentalmente, a lo largo de los ríos Guayabero, Duda, Ariari y

⁸⁷ Ver: Corpes Orinoquia, *Proyecto Carretera Uribe-Colombia*.

⁸⁸ González, José J. (1998b: 22-23).

⁸⁹ González, José J. (1992: 80-91).

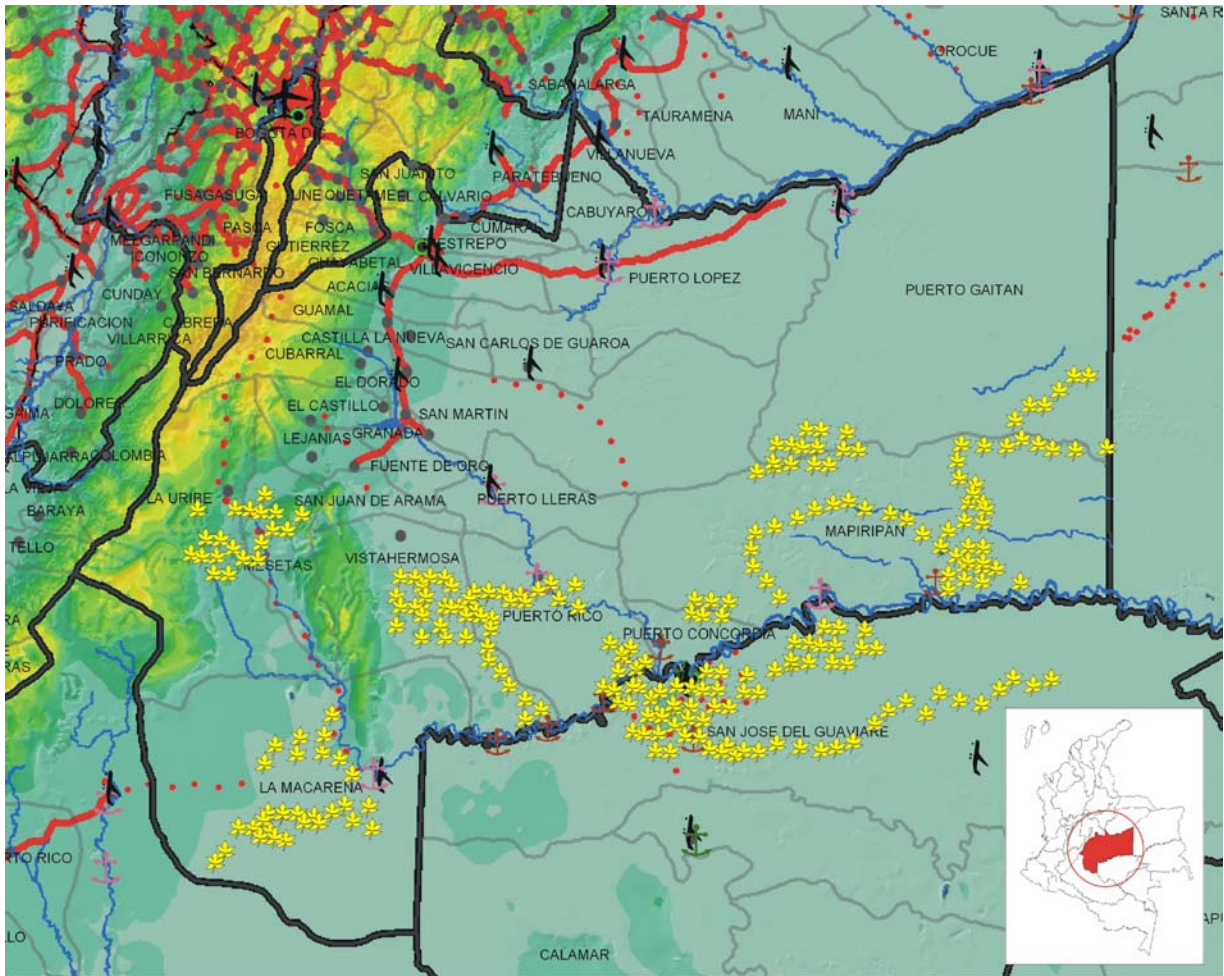
Guaviare. Según los datos suministrados por la UNODC⁹⁰ los núcleos fundamentales de los cultivos en esta zona están en el norte y el centro del departamento del Guaviare (ver mapa 3). Así, los municipios con mayor extensión de cultivos ilícitos en el Meta están en la franja fronteriza con Guaviare (Mapiripán, Concordia) en el Bajo Ariari (Puerto Rico, Puerto Lleras) y en los municipios de la antigua zona de distensión (Vista Hermosa, La Macarena, Uribe y Mesetas)⁹¹. Es este un amplio territorio de colonización y economía campesina en proceso de expansión y consolidación desde hace más de cincuenta años y donde, como se mencionó, se registra una fuerte disputa territorial entre el Bloque Centauros de las Autodefensas y los FARC (Frentes 1, 7, 27,40 y 43).

Lo primero que se debe decir es que la subregión del Ariari es una de las zonas más antiguas de producción de cultivos ilícitos en el país. En los municipios de Vista Hermosa y La Macarena se sembró marihuana en los años setenta y allí mismo comenzó el cultivo de coca en la década siguiente, en un proceso muy ligado, fundamentalmente, a la economía ilícita que comenzaba a extenderse en Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare⁹². Al parecer, quienes comenzaron el comercio e incentivaron la siembra de estos productos ilegales fueron traficantes y esmeralderos interesados en exportar el alcaloide; sin embargo, muy pronto los colonos y campesinos aprendieron los secretos del oficio lo que les permitió vender, con cierta autonomía, la base de coca en los mercados locales (Piñalito, La Carpa, Nueva Colombia, Cachicamo, Jardín de Peñas, Barranco Colorado, Puerto Toledo) y regionales (San José del Guaviare, Vista Hermosa, Granada, La Macarena). Esta economía trajo un notorio dinamismo al comercio local, al transporte (fluvial y terrestre) y al mercado de tierras (en algunos lugares aparecen medianas y grandes propiedades ganaderas) en los municipios del Ariari y en las zonas limítrofes con San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. Con todo, el rasgo característico de este auge ilegal fue la permanencia e incluso el fortalecimiento de la economía campesina en las zonas rurales de los municipios productores de coca.

⁹⁰ En menor proporción se han localizado cultivos en Centro y Sur del departamento de Vichada. Ver: Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito (2004).

⁹¹ San Vicente del Caguán (Caquetá) fue el quinto municipio de la zona de despeje y sede de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional. Este municipio limita con La Macarena (Meta) y conforma una unidad espacial (demográfica, económica y política) ligada a la colonización del territorio de las riberas del Guayabero, el Caguán y el Pato.

⁹² MOLANO B., Alfredo (1989a: 300-304).



<ul style="list-style-type: none"> Límite departamental Límite municipal Cabecera municipal Cacerío Río Carretera pavimentada Carreterable 	<p>Mapa Indicativo Cultivos de coca año 2003</p> <p>Análisis de la economía política de la coca en el departamento del Meta 1982-2004 Recolección de información: Omar Gutiérrez</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cultivos de uso ilícito <p>Fuente: Cordepaz, Red de Solidaridad Social y Naciones Unidas</p>
--	--	---

A pesar de la tendencia oscilante del precio del gramo de base de coca durante la década del ochenta (ver gráfica), la economía campesina en esta zona conoció un periodo de relativa prosperidad que permitió procesos de *reconstitución y recomposición* para distintos grupos de migrantes y colonos⁹³ y retardó o limitó la expansión de la gran propiedad rural. Luego de un rápido aprendizaje en las técnicas básicas del cultivo y el procesamiento del alcaloide los pobladores rurales lograron poner en los mercados locales un producto que representaba un ingreso relativamente constante a partir de segundo año de siembra⁹⁴. Este ingreso “liberó” a los campesinos de su dependencia de los cultivos de pancoger y les permitió aumentar su consumo de bienes y servicios comprados en los mercados locales; además, afianzó su relación de pertenencia con la tierra y, de cierta forma, modificó el conocido proceso de endeude con el comerciante y la venta de mejoras a grandes propietarios⁹⁵.

Otros hechos que sin duda contribuyeron a sostener esta economía fueron el aislamiento geográfico de un territorio selvático; la enorme disponibilidad de tierras baldías, en términos legales esta es una zona de reserva forestal; la facilidad de ocupar una creciente oferta de mano de obra campesina; la limitada fertilidad de la tierra para mantener grandes hatos de ganado bovino; la existencia de Juntas de Acción Comunal y “Sindicatos Agrarios” que mantuvieron relativamente organizada a la población (regularizando la ocupación y la posesión de la tierra) y la presencia de la guerrilla que de forma reiterada obligó a los campesinos a sembrar alimentos⁹⁶.

⁹³ “[...] la colonización se manifiesta como un proceso social diferenciado en dos sentidos: de un lado, como proceso de reconstitución para el grupo de migrantes que previamente poseían tierra y el cual los sitúa en el mismo lugar de la estructura social en la nueva región; por otro lado, como proceso de recomposición para el grupo de migrantes que no tenían tierra (jornaleros, semiproletarios, asalariados, etc.), para los que el proceso abrió la posibilidad de convertirse en propietarios o por lo menos en poseedores de tierra”. GONZÁLEZ A., José Jairo, 1998a , pág. 20.

⁹⁴ A partir de los 18 meses la producción de una hectárea de coca tiende a estabilizarse entre 90 y 100 arrobas de hoja. Con esta producción y habida cuenta de las variedades cultivadas (Amarga, Tingo María o Peruana), al finalizar la década de los ochenta, el ingreso neto del pequeño cultivador (menos de 2 hectáreas) podía bordear los novecientos mil pesos, cada 45 días. Esta información fue recogida durante el trabajo de campo y es corroborada por el estudio de Arcila N., Oscar (1989).

⁹⁵ Este ciclo ha sido analizado por distintos autores; consiste básicamente en que, en el proceso de establecimiento, el colono se endeuda con el comerciante, vende su tierra para cubrir estos compromisos y continua talando la selva para volver a “fundarse” y endeudarse. Ver FAJARDO M., Dario y MOLANO B., Alfredo (1987).

⁹⁶ Debían ser tres hectáreas de alimentos por cada hectárea de coca. MOLANO B., Alfredo (1987: 302-303).

Durante mucho tiempo se especuló sobre la dimensión de la producción de base de coca y la extensión de los cultivos ilícitos en el departamento del Meta. Antes de 1999 resultaba muy difícil estimar algunas cifras al respecto, la posibilidad de realizar un censo o cualquier trabajo de campo resultaba demasiado costosa, demorada y poco factible, por la situación de violencia⁹⁷. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Agricultura y lo expresado por algunos habitantes de los municipios productores, se consideraba que, en 1995, el área total sembrada de coca en la zona del Ariari y el Duda-Guayabero podía ascender a las 19.000 has., mientras que en los municipios del Oriente superaría las 5.000 has. (ver tablas 2 y 3). De esta forma, los municipios con mayor producción de coca serían Mapiripán y La Macarena; además, calculando que en esa época se obtenían rendimientos medios por hectárea entre 2.5 y 5.1 kilogramos de base -por cada recolección de hoja y, en promedio, ocurrían seis cosechas al año-; se consideraba que en el Ariari - Guayabero la producción anual de base oscilaba entre 288 y 587 toneladas métricas y en el Oriente del departamento podía alcanzar 157 toneladas. En este orden de ideas, cada año, la producción podía representar un valor entre 1.835 y 3.742 millones de dólares en el Ariari - Guayabero y entre 491 y 1.002 millones de dólares en el Oriente. Con todo, es muy probable que existiera una importante sobrestimación de la extensión de los cultivos ilícitos y de la producción de base de coca en el Meta porque datos más recientes (UNODC, SIMCI) mostrarían que la magnitud, tanto de los cultivos (oscilan entre 11.000 y 20.000 has) como de la producción de cocaína (440 toneladas métricas para todo el país en 2003) son sensiblemente inferiores (ver tabla 8).

Aún así, la tendencia detectada a la concentración de cultivos ilícitos fue correcta. Como puede apreciarse en las tablas siguientes, los mayores productores de hoja de coca eran ya los municipios que tienen jurisdicción sobre el Área de Manejo Especial de la Macarena y esto era cierto para el conjunto del departamento. En el bajo Ariari, Vistahermosa era el sitio más importante de comercialización de pasta de coca debido a su localización central y la cercanía a grandes ríos. Además, como se mencionó, la producción de municipios como La Macarena y Puerto Concordia podía comercializarse directamente en San Vicente del Caguán o en San José del Guaviare por su proximidad y facilidad de acceso.

⁹⁷ Para los años ochenta, Oscar Arcila N. hace importantes estimativos y análisis de la economía de la coca en el Ariari. Ver Arcila Oscar, SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL, págs. 164-192.

Tabla 2
 CULTIVO DE COCA EN EL ARIARI-DUDA – GUAYABERO

MUNICIPIOS	HECTÁREAS CULTIVADAS
<i>La Macarena</i>	3.300
<i>San Juan de Arama</i>	3.000
<i>Vistahermosa</i>	2.800
<i>Puerto Rico</i>	2.800
<i>Puerto Concordia</i>	2.300
<i>Puerto Lleras</i>	2.200
<i>Uribe</i>	1.800
<i>Mesetas</i>	1.000
<i>Total</i>	19.200

Fuente: Secretaría de Agricultura del Meta. 1995

Tabla 3
 CULTIVO DE COCA EN ORIENTE DEL META
 (Subregiones Río Meta y San Martín-Mapiripán)

MUNICIPIOS	HECTÁREAS CULTIVADAS
<i>Mapiripan</i>	3.100
<i>Puerto Gaitán</i>	1.800
<i>Puerto López</i>	140
<i>San Martín</i>	100
<i>Total (aproximado)</i>	5.140

Fuente: Secretaría de Agricultura del Meta. 1995

En el oriente del Meta el cultivo de coca se concentraba en los municipios más alejados de Villavicencio, el primero de ellos, Mapiripan, sobre el río Guaviare cerca de San José, y el segundo, Puerto López en límites con Vichada. En ellos se habían detectado plantaciones comerciales y grandes laboratorios de procesamiento donde los rendimientos de base de coca por hectárea sembrada podían ser significativamente mayores a los obtenidos en cultivos de colonos campesinos (4.0 kg/ha). Cabe anotar que a raíz de la persecución al Cartel de Cali, en 1995 los precios de la coca se desplomaron. Sin embargo, la acción de las autoridades antinarcoóticos se centró en el departamento de Guaviare, este hecho pudo provocar que algunos medianos “empresarios” de la droga se trasladaran al departamento del Meta, posiblemente al Ariari o a municipios del Oriente como Mapiripan o Puerto Gaitán.

Por la misma época se empezó a especular entorno a la presencia de cultivos de amapola en el departamento. Se decía, por ejemplo, que este cultivo ilícito comenzaba a ser importante en los municipios del pie de monte o de la vertiente de cordillera; lugares hacia los cuales los frentes de las FARC habían desplazado sus acciones en años recientes (Acacias, Restrepo,

Cumaral, San Juanito, etc.). El Ariari ocuparía también un lugar destacado en la producción de amapola, aunque esta problemática no tuviera la notoriedad y nivel alcanzado por la coca (ver tabla 4). Según la Secretaría de Agricultura, en los municipios del Alto y Medio Ariari estaban cultivadas aproximadamente 950 hectáreas y en La Uribe se encontrarían los dos cultivos ilícitos. Por condiciones naturales, en el Alto Ariari y el Duda se concentraban los cultivos de la amapola; mientras en el Bajo Ariari predominaba la producción y procesamiento de coca. Una vez más aquí se pudo sobre estimar la dimensión de la problemática de la amapola o, por razones que es necesario explorar, perdió importancia frente a la coca.

Tabla 4
 CULTIVO DE AMAPOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
 (Año 1995)

MUNICIPIOS	HECTÁREAS CULTIVADAS
<i>Uribe</i>	260
<i>Mesetas</i>	220
<i>Lejanías</i>	220
<i>El Castillo</i>	130
<i>San Juanito</i>	80
<i>El Calvario</i>	80
<i>El Dorado</i>	60
<i>Cubarral</i>	60
<i>Barranca de Upia</i>	60
<i>Guamal</i>	40
<i>Acacias</i>	40
<i>Restrepo</i>	30
<i>Cumaral</i>	30
<i>Total (aproximado)</i>	1.310

Fuente: Secretaria de Agricultura del Meta. 1995

A diferencia de otras zonas de la Orinoquia donde prevalecía el procesamiento de grandes volúmenes de base de coca en laboratorios sofisticados, en el Ariari, con excepción de algunos sectores rurales de Mapiripan y Puerto Concordia, predominaban la producción y el procesamiento artesanal de coca a cargo de campesinos y colonos. Este hecho imprimió una dinámica especial a la economía ilegal que necesitaba, para su sostenimiento, del abastecimiento de insumos y precursores en menor escala y ocupaba mano de obra migrante llegada por sus propios medios.

En la Orinoquia, las “empresas agroindustriales” de producción y procesamiento de pasta de coca se habían localizado en Guaviare y en Vichada donde las distancias y las condiciones naturales favorecían aún más el establecimiento de grandes laboratorios. Siguiendo una tendencia similar, en el Bajo Ariari los laboratorios se localizaban en los lugares más lejanos de

municipios como Mapiripán o Puerto Concordia; pero en el resto de municipios productores (Vistahermosa y La Macarena) predominaba la pequeña producción a cargo de colonos⁹⁸.

En efecto, un gran laboratorio de procesamiento de cocaína, “El Monasterio”, fue descubierto por el ejército en junio de 1995, durante un operativo en Mapiripán. Este era uno de los más sofisticados “complejos coqueros” descubierto hasta entonces en el país. Avaluado en cerca de ocho millones de dólares y propiedad del cartel de Cali, “El Monasterio” ocupaba un espacio de tres hectáreas en una zona selvática cercana al río Guaviare, empleaba 31 trabajadores y producía alrededor de 300 kilos diarios de cocaína⁹⁹. Luego de la destrucción del cartel de Medellín que controlaba el mercado de la coca en el Ariari, hacen su entrada algunas facciones del cartel de Cali, compran tierras al Oriente del Departamento¹⁰⁰ y se convierten en los nuevos dueños del negocio.

La situación de “bonanza” de la economía de la coca en zonas campesinas y de colonización se mantiene hasta 1995, año en que se intensifica la política contra las drogas en todo el país, cae el precio de la base y comienza un periodo de marchas campesinas en Guaviare, Caquetá y Putumayo¹⁰¹. Ciertamente, el gobierno de Ernesto Samper dio un fuerte impulso a las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada de plantaciones de coca y amapola, hecho que determinó el inicio de la persecución de esta economía en el departamento del Meta¹⁰². Al mismo tiempo, como se mencionó, el desmantelamiento definitivo del Cartel de Medellín y la captura de los principales jefes del Cartel de Cali, afectaron negativamente el precio del gramo de base de coca en las zonas productoras; este precio fluctuó en alrededor de un dólar entre enero de 1994 y diciembre de 1995, para luego caer bajo este umbral.

⁹⁸ Aún así la producción de base de coca era importante. En 1996, en los puertos sobre el río Güejar (Piñalito, Puerto Alonso, Caño Amarillo, Puerto Toledo o Puerto Lucas), por ejemplo, se comercializaba este producto. Era normal que en esos sitios se vendieran seiscientos millones de pesos en coca de los cuales más de cien millones le corresponden a la guerrilla. Esta fuente de ingresos, solamente en Vistahermosa, significaba cerca de quinientos millones mensuales para las FARC. Entrevista con habitante de Vista Hermosa.

⁹⁹ Ver: llano Siete Días, junio 20 de 1995, págs. 10-11.

¹⁰⁰ Los rastros de la llegada del cartel de Cali se hallaron en el aumento de las ventas de automotores, en el incremento de los precios de la finca raíz en Villavicencio y la compra de tierras en Puerto Gaitán y Puerto López donde el precio por hectárea subió de 300 mil a 600 mil pesos en 1994 (de aproximadamente 329 a 657 dólares de ese año).

¹⁰¹ Sin que los medios de comunicación lo registraran, Colombia se había convertido en gran procesador y productor de coca en la primera mitad de la década de los noventa. Ver : RAMÍREZ María C., (2001: 90-128) y TOKATLIAN (2000: 122-125).

¹⁰² De acuerdo con la Dirección Nacional de Estupefacientes entre 1994 y 1995 fueron fumigadas 3200 hectáreas de coca en este departamento.

Las fumigaciones con glifosato (ver tabla 5) fueron mal recibidas por los habitantes de los departamentos del sur del país porque tendían a quebrar la economía de las zonas productoras de coca y a profundizar el escenario de crisis agraria vivido desde 1992, a raíz de la aceleración de la apertura económica¹⁰³. Al iniciarse la ejecución de las fumigaciones se organizaron las primeras movilizaciones y paros en Putumayo y Caquetá; hechos en los que participaron diferentes sectores sociales y políticos (cultivadores y recolectores de coca, comerciantes, transportadores, pequeños y grandes “empresarios” ilegales, líderes políticos, autoridades locales, etc.). Esto sucedió a pesar de que el Gobierno Nacional puso en marcha el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo – PLANTE- para la misma época (1995), como política que buscaba complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante inversiones de carácter social para prevenir, frenar y eliminar la producción de cultivos ilícitos¹⁰⁴.

Tabla 5
 ASPERSIÓN AÉREA DE COCA EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS DEL SUR DEL PAÍS
 (por año y en hectáreas)

DEPARTAMENTO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Guaviare	3142	21394	14425	30192	37081	17376	8241	7477	7207	37493
Meta	729	2471	2524	6725	5920	2296	1345	3251	1496	6973
Caquetá			537	4370	18433	15656	9172	17252	18567	1059
Putumayo				574	3949	4980	13508	32506	71891	8342
Vichada		50	85		297	91		2820		
Total	3871	23915	17571	41861	65680	40399	32266	63306	99161	53867

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes y Policía Antinarcoóticos

Sin embargo, el Meta estuvo durante algún tiempo (1996-1998) por fuera de los programas nacionales para la erradicación de cultivos ilícitos. Esto se debió a una confrontación institucional de cifras en esa época; mientras el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo había estimado en el Departamento un área sembrada de cultivos ilícitos de 1.350 hectáreas, la Secretaría de Agricultura del Meta consideraba en cerca de 26.000 hectáreas el área total de cultivos ilícitos, principalmente coca (ver tablas 2 y 3)¹⁰⁵. Por

¹⁰³ La apertura se aceleró con la adopción de medidas como la desgravación alancelaria; la eliminación del monopolio de importación de alimentos para el Idema, con lo que desaparecía una protección importante al sector agropecuario; el aumento gradual de las tasas de interés que debían pagar los agricultores; la caída de PIB agropecuario; la disminución gradual de la rentabilidad en la actividad agrícola; la reducción de los rendimientos físicos por hectárea para los productos agrícolas comerciales y campesinos y la consecuente reducción del área sembrada para los mismos.

¹⁰⁴ Documento Conpes 2734, 1994; citado por RAMÍREZ María C., (2001:105).

¹⁰⁵ Llano 7 Días, junio 16 de 1998, pág. 14.

esta razón buena parte de los recursos PLANTE se concentraron en la zona de influencia de San José del Guaviare (El Retorno, Calamar, Mira Flores)¹⁰⁶.

En el departamento del Meta, el PLANTE promovió, desde 1998, alternativas de ingreso y liquidez a corto plazo para campesinos, dentro de un contexto que permitiera la acumulación de capital y la sostenibilidad de los factores físicos de producción (suelos, bosques, rastrojos, agua y fauna). Puesto que el programa estaba dirigido a pequeños productores campesinos con o sin cultivos ilícitos, se promovieron cultivos de tradición en la zona, se buscó el equilibrio ambiental y, en un comienzo, se exigía la normalización jurídica de la tenencia de la tierra. Concretamente, el PLANTE ofreció créditos con bajas tasas de interés, apoyo a procesos productivos agropecuarios (ganadería bovina, piscicultura¹⁰⁷, plátano, sorgo), de comercialización, de servicios y generación de empleo. Preveía el fortalecimiento de las organizaciones gremiales, asistencia técnica, apoyo institucional¹⁰⁸ y créditos para vivienda rural. Todos los proyectos productivos debían garantizar la acumulación de excedentes. El área de intervención del PLANTE en el Departamento se definió en diez municipios con base en los registros satelitales sobre cultivos ilícitos¹⁰⁹.

Un poco más tarde, durante la vigencia de la zona de distensión, se puso en marcha un proyecto de desarrollo alternativo en cinco municipios¹¹⁰ financiado y ejecutado por Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI). Este proyecto tuvo vigencia por tres años (junio 1999 – junio 2002) y la inversión total inicialmente aprobada fue de US \$3.300.000. Por la importancia de este proceso para el caso que nos ocupa, en la siguiente sección se detallarán algunos de sus pormenores.

¹⁰⁶ “Entre los años 1996 y 1998, el renglón de la ganadería bovina superó las proyecciones realizadas para el sector en el Guaviare. Este incremento es el resultado de la destinación del 95 por ciento de los créditos del programa PLANTE a la actividad ganadera. En los últimos tres años, sin contar 1999, el programa de sustitución de cultivos ilícitos entregó 1.093 millones de pesos para todo el sector agropecuario del departamento del Guaviare”. Llano 7 Días, septiembre 24 de 1999, pág. 12.

¹⁰⁷ Llano 7 Días, junio 19 de 1999, pág. 16.

¹⁰⁸ AMEVEZLLANOS, el Fondo Ganadero del Meta, la Caja Agraria, la Secretaría de Agricultura, CORMACARENA, CORPORINOQUIA, ECOPETROL, INPA y las UMATA.

¹⁰⁹ San Juan de Arama, Mesetas, Vistahermosa, Uribe, La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán y Puerto Gaitán. Ver: Llano 7 Días, julio 21 de 1998, pág. 12.

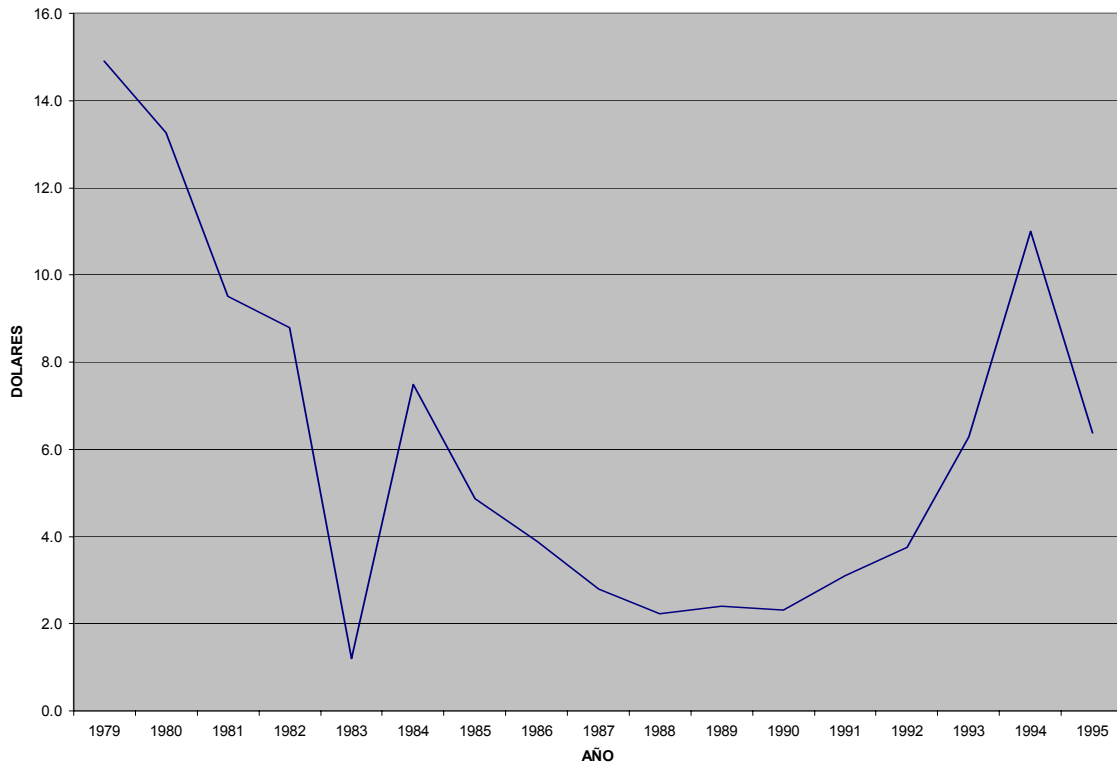
¹¹⁰ Eran los cinco municipios que conformaron dicha zona, cuatro de ellos pertenecientes al departamento del Meta (Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena) y uno del Caquetá (San Vicente Del Caguán).

Tabla 6
 PRECIO DEL GRAMO DE BASE DE COCA EN LOS MUNICIPIOS DEL ARIARI – GUAYABERO
 1979 – 1995
 (Base 100: 1994)

AÑO	PRECIO GRAMO BASE DE COCA. (Pesos Corrientes)	PRECIO REAL GRAMO BASE DE COCA. (Dólares)
1979	1100	14.9
1980	1000	13.3
1981	700	9.5
1982	600	8.8
1983	80	1.2
1984	540	7.5
1985	400	4.9
1986	380	3.9
1987	280	2.8
1988	223	2.2
1989	242	2.4
1990	265	2.3
1991	350	3.1
1992	400	3.8
1993	676	6.3
1994	1100	11.0
1995	650	6.4

Fuente: CES – Universidad Nacional, 1989. Secretaria de Agricultura del Meta. 1995.

Gráfica 1
 PRECIO REAL DE GRAMO DE BASE DE COCA MUNICIPIOS DEL ARIARI - GUAYABERO.
 DÓLARES (Base 100: 1994)



Fuente: CES – Universidad Nacional, 1989. Secretaria de Agricultura del Meta. 1995.

Aún así, en 1998, los principales ríos de esta zona del país continuaban siendo los grandes ejes de producción de coca y de tráfico de insumos y precursores químicos. A lo largo del Guayabero, del Guaviare y del Ariari se mantenía vigente esta economía y los campesinos habían adquirido experiencia en el procesamiento del alcaloide; dinámica que les había posibilitado hacer “innovaciones” tecnológicas en los cultivos y racionalizar ciertos momentos del procesamiento químico. Así, por ejemplo, en el transcurso de diez años, el tiempo de recolección de coca se pudo reducir de 45 a 30 días, con la introducción de nuevas variedades; la densidad de plantas sembradas por hectárea aumentó de 10.000 a 20.000 o 30.000 y, consecuentemente, creció la productividad de arrobas de hoja por hectárea (pasó de 50 a 100 o 150 arrobas, por “raspa”); la producción de alcaloide por arroba de hoja también se incrementó de 10.8 gramos a 15.5 o 17.9, dependiendo de la variedad sembrada y de la destreza del productor¹¹¹. Igualmente se suprimieron o mejoraron algunos pasos del procesamiento (empleo de guadañas y picadoras mecánicas de hoja, reutilización de

¹¹¹ En esta zona del país las variedades más comunes de coca han sido la “dulce”, la “amarga” y la peruana.

gasolina, etc.) y uso de precursores químicos (se suprimió la utilización de urea y, en algunos casos, el permanganato de potasio se sustituyó por hidróxido de sodio)¹¹². Sin embargo, estos cambios no se reflejaron en un mejoramiento real del ingreso de los cultivadores de hoja debido, como se mencionó, a la tendencia hacia abajo de los precios de la base de coca a nivel regional (ver tabla 6)¹¹³; al aumento de los costos de producción, representados fundamentalmente en el alza del precio de los precursores e insumos, y el incremento de los costos de transacción con los grupos armados (“contribución”)¹¹⁴ y las autoridades de control (soborno).

En efecto, para los pequeños productores de coca el costo de la transformación y la extracción del alcaloide representaba, en esa época, alrededor del 70% de los costos totales de producción, frente al 30% restante, integrado por la inversión en la plantación y el trabajo agrícola¹¹⁵. De la misma forma, los productos más utilizados en este proceso de transformación, traídos de afuera, (gasolina, cemento, ácido sulfúrico, Gramoxone, Manzate, etc.), habían conocido un incremento real y permanente de su precio¹¹⁶. Este hecho se revirtió negativamente en el ingreso neto de los productores debido a la tendencia a disminución real del precio del gramo de coca y a las dificultades de abastecimiento de precursores e insumos¹¹⁷. A todo lo anterior se sumó poco después la congelación del precio de la base de la coca, el aumento de los controles al tránsito de insumos, remesas, dinero y la supervisión más estricta de la producción (legal e ilegal) campesina, decretada por los grupos armados ilegales en la mayor parte de este territorio¹¹⁸.

Cabe suponer, entonces, que el ingreso neto de los pequeños productores de base de coca se ha deteriorado aún más desde 1998 por efecto de las “circunstancias” de mercado mencionadas y por la imposición

¹¹² Ver: SABOGAL P., Melquisedec, 1998.

¹¹³ Sabogal atribuye la caída de los precios del gramo de base al aumento de la superficie sembrada en esta región. SABOGAL (1998:37)

¹¹⁴ En 1998, se pagaba a las FARC entre \$30.000 y \$40.000 por cada kilo de base de coca comercializado en estos municipios del Meta.

¹¹⁵ Sabogal calculó que los gastos de producción de base de coca por hectárea, durante cinco años, oscilaban entre 13 y 46 millones de pesos. Así mismo, en igual periodo, los costos de cultivo y cuidado de una hectárea de coca podían moverse entre 4.5 y 17 millones de pesos. ver: SABOGAL (1998).

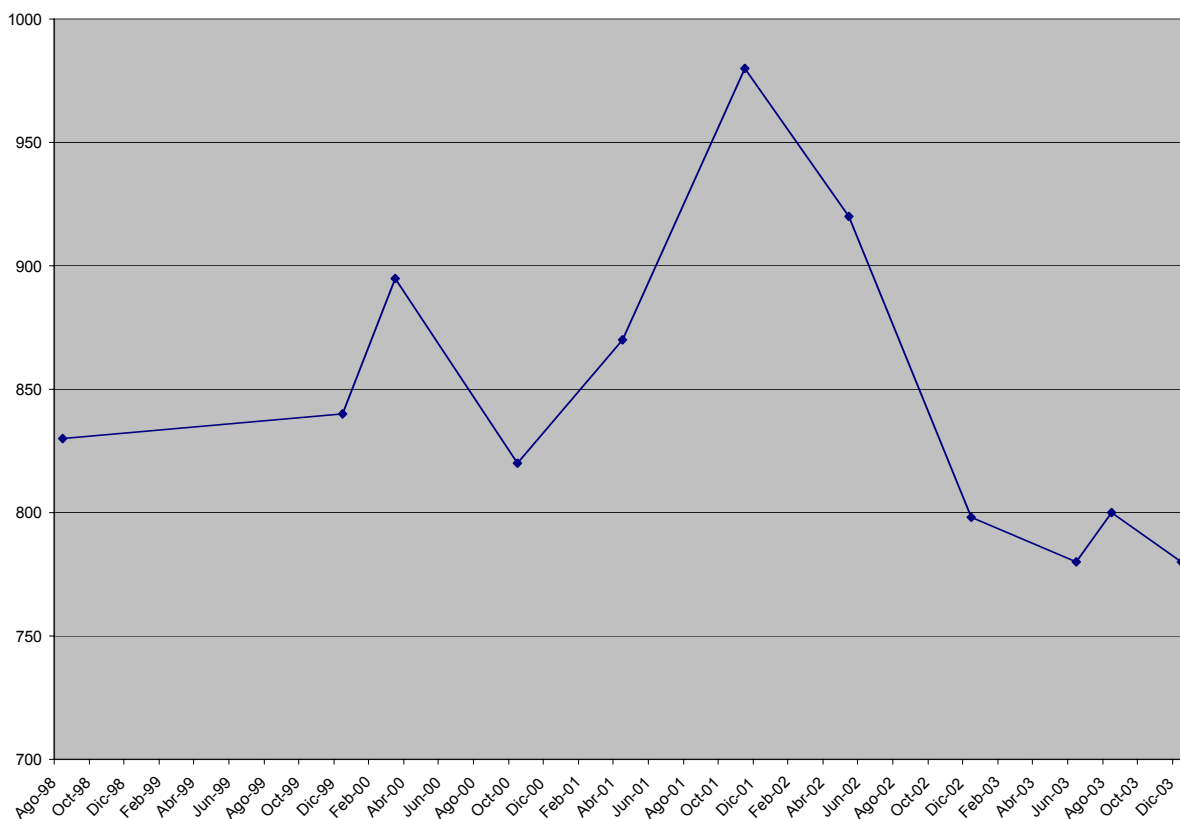
¹¹⁶ Por ejemplo, entre 1994 y 1998, los precios de la gasolina y el cemento tuvieron un incremento real de 21.1% y 35%, respectivamente. Ver: SABOGAL (1998:46).

¹¹⁷ Esto último ocurre como consecuencia de la intermediación comercial en la oferta de productos; el control o, en su defecto, la “contribución” policial y las largas distancias de los recorridos terrestres y fluviales.

¹¹⁸ Las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) y las Autodefensas del Meta y Vichada (AMV) comenzaron a controlar el oriente del departamento (Puerto Gaitán, Puerto López, Mapiripán, San Martín) mientras que las FARC continuaban dominando su zona histórica al suroccidente del Departamento (Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena, etc.)

de sofisticados aparatos de coerción social y control duopsónico de la producción. En un lapso de cinco años, según Sabogal, los ingresos netos de la mayor parte de los productores de coca oscilaba entre 5.3 y 16.8 millones de pesos; sin embargo, los productores que explotaban a baja escala, menos de 2.3 has., en condiciones precarias de productividad, menos de 15 gramos de base por arroba de hoja, terminaban perdiendo importantes recursos propios (calculados entre 1 y 5.7 millones a precios de 1997)¹¹⁹.

Gráfica 2
PRECIOS MENSUALES DE BASE DE COCA EN EL META 1999 -2003
(kg/US\$)



Fuentes: Trabajo de Campo en la Zona

Distintos testimonios muestran que en esta parte del departamento del Meta los campesinos empezaban a absorber los costos económicos y políticos del aumento de los precios de los insumos, a asumir individualmente los efectos de las fumigaciones aéreas y a sufrir la intensificación del control territorial de los grupos armados (FARC y AUC). La ofensiva de las AUC en zonas de presencia de la guerrilla comienza en Mapiripán, en 1997; la

¹¹⁹ Ver: SABOGAL (1998:28-32)

creación de la zona de distensión en 1998 marca la última etapa de auge de los cultivos ilícitos en La Macarena, Vista Hermosa, La Uribe, Concordia y Puerto Rico. Poco después se constata la existencia de un cartel de la droga en el Meta y se mencionan sus nexos con la expansión del paramilitarismo en el área limítrofe con Guaviare. En consecuencia, estos años y los inmediatamente posteriores estuvieron marcados por hechos en apariencia contradictorios como fueron la intensificación de la guerra entre las FARC y las AUC; el mayor involucramiento forzado de la población civil en este conflicto; el inicio y la crisis de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla; el auge y la crisis de la economía de la coca en las zonas productoras; el cumplimiento de actividades de aspersión aérea y la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo; la aguda división territorial e ideológica del Meta y el desencadenamiento de la crisis humanitaria en el mismo territorio.

En particular, según distintos testimonios, la producción de coca y la producción de base conocieron un periodo de bonanza controlada en las zonas de tradición productora y en otras menos acostumbradas del Alto Ariari (Mesetas, Lejanías, La Uribe). Durante el periodo que duró la zona de distensión las zonas rurales de municipios como La Macarena y Vista Hermosa fueron de nuevo escenario de un “boom” de la producción de base de coca, regulada por las disposiciones implantadas por la guerrilla (entrada y salida de comerciantes y raspachines, circulación de precursores e insumos, precios y “contribuciones”, etc.); en términos generales, las FARC aprovecharon estos años para acumular recursos financieros con la producción y comercialización de base coca en el área de los cinco municipios de la zona de distensión. Fue el periodo en que claramente se estableció un monopsonio para la base de coca, se congelaron sus precios (ver tabla 7) y se eliminó la intermediación que en los años y decenios anteriores establecieron los compradores rurales (chichipatos), los acaparadores o recolectores “urbanos” y los compradores mayoristas al servicio de los carteles nacionales de la droga. En parte, esto ocurrió como una medida de “protección” de los territorios controlados por las FARC frente a la ofensiva de los grupos paramilitares.

El análisis más preciso del contexto político reciente y los actores implicados en esta economía se realiza en la siguiente sección; por ahora se resaltan como conclusiones fundamentales de esta parte, primero, el hecho de que pese al influjo prolongado de esta economía ilícita en el departamento, se mantiene una base cultural, social y económica campesina que se ha articulado con relativo éxito a la extensión de las relaciones sociales capitalistas; segundo, que este mismo sector social afronta la peor crisis económica y humanitaria, desde la época de exterminio de la Unión Patriótica, y reclama el apoyo institucional (nacional e internacional) para encontrar opciones perdurables a la economía de la coca, sustentadas tanto

en bases productivas como políticas y medioambientales. Sobre este particular se volverá luego, en las proposiciones.

De otra parte, en el oriente del departamento el panorama es un tanto distinto, allí la tendencia parece ser el establecimiento de grandes propiedades rurales (ganaderas y agroindustriales), tanto en el área de San Martín – Mapiripán como Puerto López – Puerto Gaitán, con la expulsión de población rural y el empobrecimiento de las comunidades indígenas¹²⁰. De especial importancia es el establecimiento reciente de grandes plantaciones de palma africana en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán (El Trincho y el Mielón) y la proyección de otros cultivos con gran demanda nacional e internacional (maíz tecnificado, soya, algodón, pino, etc.) Así mismo, esta tendencia se sustenta en el amplio dominio alcanzado por los grupos paramilitares (AUC y AMV) en los municipios mencionados¹²¹. En consecuencia, en esta zona del departamento, los grandes cultivos de coca (mayores a 10 has.) y la gran propiedad agroindustrial o agrocomercial han restado importancia a la economía campesina.

Para finalizar es necesario hacer una precisión sobre la información suministrada en relación con el área sembrada de coca en el Departamento. Pese a los esfuerzos de las instituciones encargadas de suministrar información oficial sobre este tema, se mantienen algunas diferencias en las estimaciones. A mediados de la década de los noventa, la Secretaría de Agricultura del Meta calculó en alrededor de 2.4340 has., el área total de coca en el Meta; desde 1999, el SIMCI y UNODC han suministrado información periódica con base en la metodología de interpretación de imágenes de satélite y verificación aérea (ver tabla 8). Sin embargo, en la información discriminada por municipios que se pudo consultar (SIMCI, Cordepaz, Red de Solidaridad Social¹²²), el área total hectáreas tiende a ser más alto. En conclusión, aún existen dificultades para calcular con un buen grado de seguridad la real extensión de los cultivos ilícitos en el Meta y esta circunstancia pone en cuestión el indicador fundamental de la lucha antidrogas cual es la reducción del número de hectáreas sembradas de coca.

¹²⁰ Efectivamente, según la Red de Solidaridad Social, los cinco primeros municipios expulsores de población (periodo 1997 – 2004) pertenecen al oriente y suroriente del departamento.

¹²¹ Por ejemplo, el Bloque Centauros de las AUC ha presentado el proyecto de palma como una alternativa de sustitución de cultivos ilícitos y una fuente de empleo para sus combatientes en un eventual proceso de desmovilización.

¹²² GONZÁLEZ José J. (2004: 43-44).

Tabla 7
AREA DE CULTIVOS DE COCA DEPARTAMENTO DEL META
PROYECTO SIMCI
(Censo Diciembre 31 de 2002)

MUNICIPIO	Datos	Lotés Mayores de 3 Has	Lotés Menores o Iguales a 3 Has	Corrección (1)	Total general
Mapiripán	Cantidad de lotes	138	1546		1684
	Area en hectáreas	583	1799	-241	2141
Mesetas	Cantidad de lotes	46	444		490
	Area en hectáreas	184	506	-70	619
Puerto Concordia	Cantidad de lotes	4	347		351
	Area en hectáreas	17	316	-34	299
Puerto Gaitán	Cantidad de lotes	11	87		98
	Area en hectáreas	65	98	-16	147
Puerto Lleras	Cantidad de lotes	5	72		77
	Area en hectáreas	24	90	-12	102
Puerto Rico	Cantidad de lotes	96	2402		2498
	Area en hectáreas	392	2308	-274	2426
San Juan de Arama	Cantidad de lotes	1	24		25
	Area en hectáreas	4	16	-2	17
San Martín	Cantidad de lotes		5		5
	Area en hectáreas		3	0	3
Vista Hermosa	Cantidad de lotes	53	714		767
	Area en hectáreas	221	813	-105	929
Cantidad de lotes META			7220		7819
Area en hectáreas META		2807	7455	-1040	20499

Tabla 8
EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ÁREA SEMBRADA EN COCA
EN EL DEPARTAMENTO DEL META

AÑO	ÁREA (Has)	% VARIACIÓN
1999*	11.384	----
2000*	11.123	-2.29
2001*	11.425	2.71
2002*	9.222	-19.28
2003*	12.814	38.95
2004**	15.600	21.74

Fuentes: *Naciones Unidas; ** Cordepaz

LOS ACTORES REGIONALES IMPLICADOS

Esta sección tiene como objetivo principal contribuir a identificar un conjunto de actores e intereses involucrados en el origen y funcionamiento de la economía de la coca en el departamento del Meta. Este ejercicio servirá para derivar una eventual estrategia que facilite la viabilidad política y la factibilidad técnica de los planes o proyectos que se desarrollen en el intento de superar esta economía con bases de consenso y participación social¹²³. Para caracterizar pormenorizadamente a estos actores y detectar sus intereses y motivación se acudió a la técnica de análisis de Stakeholders¹²⁴, se desarrolló un trabajo de campo (entrevistas selectivas, observación participante) y se consultaron fuentes secundarias. Así mismo, para el análisis se tuvo en cuenta el contexto político y espacial planteado en las secciones precedentes.

En consecuencia, se definen aquí como actores a todos los grupos organizados que controlan recursos (políticos, económicos, de coacción, etc.) clave para el funcionamiento la economía de la coca en la zona de estudio¹²⁵. De la misma forma, para hacer una caracterización de los actores involucrados se integran en el análisis tanto los actores legales como los ilegales¹²⁶ y se establece un escenario de naturaleza política que puede cambiar de acuerdo con los acontecimientos de coyuntura política actuales (negociación Gobierno Uribe con grupos paramilitares; ejecución de política contra las drogas, etc.). Con todo, se espera hacer un análisis consistente con las tendencias históricas evidenciadas en las zonas productoras de coca durante los últimos veinte años.

De entrada se puede decir que el hecho característico del funcionamiento de la economía ilícita en el departamento apunta a la desaparición, por asimilación o exclusión, de algunos tipos de actores involucrados (sobre todo intermediarios) y su sustitución por grandes organizaciones que controlan la compra y el procesamiento de la cocaína, dentro y fuera de las subregiones estudiadas. Es precisamente esta característica la que permite plantear la paulatina transformación organizativa y la posición de actores armados frente a esta economía y la aparición de las tendencias monopsónicas o duopsónicas (dependiendo de la escala territorial que se elija) dentro del circuito económico en cuestión.

¹²³ FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ Omar, RUDQVIST Anders (2004:).

¹²⁴ RUDQVIST Anders (1991).

¹²⁵ Op.cit., FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ Omar, RUDQVIST Anders.

¹²⁶ Ibid, FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ Omar, RUDQVIST Anders.

Actores Sociales

En la década de los ochenta, el auge de la economía ilícita en el Meta fue vivido como una *revancha histórica* por cientos de colonos que habían conocido sufrimientos, privaciones y explotaciones en otras partes del país o que habían sido desplazados a la fuerza de otros municipios de la Orinoquia¹²⁷. Como se mencionó, el “boom” del alcaolide permitió a muchos de estos habitantes acumular excedentes y reconstituir o recomponer su situación de “propietarios” rurales; sin embargo, es conveniente hacer algunas distinciones entre los actores sociales que se beneficiaron con el referido auge económico.

A lo largo de veinticinco años, y de acuerdo con su tiempo de asentamiento, se pueden diferenciar por lo menos tres tipos de pobladores rurales en las zonas productoras de hoja de coca: a.) aquellos que llegaron desde las zonas andinas a mediados de siglo, o incluso antes, como producto de la colonización campesina presionada por razones demográficas o políticas; b.) Aquellos que poblaron los municipios del Ariari, El Duda y el Güayabero durante las décadas del ochenta y el noventa como efecto del auge de los cultivos ilícitos; c.) Una población flotante de recolectores (raspachines) que han llegado a la zona fundamentalmente para trabajar en las plantaciones de coca; d.) Un grupo de inversionistas, propietarios de medianas y grandes plantaciones de coca¹²⁸.

Los Colonos - Campesinos

Para caracterizar las formas organizativas de apropiación del territorio de los primeros pobladores cabe el uso de la noción de *comunidad política*; ciertamente, se puede afirmar que en la zona de estudio existieron, por lo menos hasta la década de los noventa, este tipo de comunidades políticas, que a lo largo muchos años conservaron tres características señaladas por Max Weber: 1.) se establecieron en ámbitos delimitados, 2.) utilizaron la fuerza de las armas para conservarlos y 3.) regulaban las relaciones entre sus habitantes con base en principios de solidaridad partidistas de los cuales dependía, con frecuencia, su misma supervivencia¹²⁹. En un principio estas comunidades estuvieron compuestas por colonos y campesinos pero en la medida que evolucionó el proceso de integración política y diferenciación espacial surgieron también, como parte de ellas, comerciantes, transportadores, empresarios, “políticos de oficio”, etc. Así por ejemplo, en Granada, Cubarral y San Martín surgieron comunidades políticas, liberales y

¹²⁷ MOLANO Alfredo (1989a: 300-301).

¹²⁸ GONZÁLEZ José J. (1998c: 43-54).

¹²⁹ WEBER Max (1977: 661-670).

conservadoras, que se integraron relativamente rápido a un contexto de desarrollo capitalista (ganadero y agro-comercial) y sufrieron un proceso más acelerado de diferenciación interior (jerarquización social); en cambio, en la zona del río Duda (La Uribe), el Alto Ariari (Mesetas, Lejanías) y el Guayabero (La Macarena, Vista Hermosa), se conformaron algunas comunidades políticas *campesinas*, influenciadas por el Partido Comunista y la Unión Patriótica, más aisladas del ámbito económico departamental pero más estables en su organización y menos diferenciadas a nivel interno¹³⁰.

En una dimensión histórica no es arriesgado decir que en las subregiones del Ariari y el Duda-Guayabero se establecieron, hacia los años sesenta y setenta, comunidades políticas campesinas marcadas por el destino común que había sellado la violencia y determinado por periodos de luchas entre ellas. Esta situación, documentada en diferentes estudios sobre la colonización y vigente en algunos espacios hasta 1997, pudo verificarse en la conformación de localidades identificada con un partido político o, más tarde, en el comportamiento de los pobladores frente a la escalada del enfrentamiento armado entre ejército, grupos paramilitares y guerrilla.

En resumen, desde los primeros años de la colonización en el área se marcaron profundas diferencias partidistas, que se mantuvieron con cierta regularidad hasta las incursiones de las AUC en el sur del Meta; a pesar de las notables transformaciones de orden social (aparecieron jerarquías y diferencias de propiedad y fortuna) y los cambios políticos introducidos por la descentralización. Esto es evidente todavía hoy en la forma de administrar el Estado local y en el comportamiento de facciones políticas en municipios como Vista Hermosa o La Macarena y en el hecho de que en otras localidades (Concordia y Puerto Rico) el río Ariari sirve aún de frontera “geo-política” entre los supuestos seguidores y opositores del sistema político legal.

Todo lo anterior sirve para resaltar el carácter *profundamente político y social* del proceso de colonización de las subregiones del Ariari y del Duda Guayabero¹³¹. Carácter político porque, como se ha dicho, está muy ligado a la construcción de espacios partidistas y al nacimiento del Estado local; pero en especial porque, en lo social, los campesinos que poblaron las zonas más alejadas e inhóspitas tenían, de alguna forma, la intención de preservar su identidad y forma de vida. Estas mismas razones dan consistencia al rasgo más notorio de los pequeños cultivadores de coca: su capacidad para sobrevivir en términos culturales, económicos y políticos. En esta misma lógica, la producción de alcaloide y el ingreso que permite captar, sirven al propósito de sobrevivir. Al mismo tiempo, esta capacidad para sobrevivir los hace actores sociales reconocibles.

¹³⁰ GONZÁLEZ José J. (1992: 68-97).

¹³¹ GONZÁLEZ José J. (1998c: 49).

Como producto de la acción social de estos actores podemos identificar una *frontera campesina*, conformada por la economía y el orden comunitario forjados por los primeros colonos. Estos mismos actores componen el espacio del proceso de reconstitución o de recomposición campesina y de origen del narcocultivo en los años ochenta, en zonas como el bajo Ariari, los valles interfluviales del Duda y el Guayabero, en las zonas rurales de La Macarena, San Juan de Losada, Vista Hermosa y Mesetas o las riberas del río Guaviare, en Concordia y Mapiripan¹³². Obviamente, esta frontera campesina, es diferente a otras existentes en espacios alternos, es decir, las fronteras latifundista ganadera, la indígena, la de cultivos comerciales o agroindustriales, la urbana y aún la de los grandes cultivos ilícitos¹³³. De hecho, como se ha mencionado, en esta amplia zona de colonización que constituyó el sur del Meta, se construyeron distintos *espacios sociales* y por lo tanto se pueden identificar aún hoy diferentes *fronteras interiores* de colonización¹³⁴.

Estos *campesinos-colonos* constituyen los núcleos más firmes de pobladores de esta amplia zona y tienen una vieja tradición de organización en las Juntas de Acción Comunal. Así, encontramos organizaciones de este tipo en lugares como Piñalito y Santo Domingo (Vista Hermosa); en Jardín de Peñas y La Julia (Alto Ariari y Duda); en San Juan de Losada y Villa Rica (La Macarena). Son núcleos de pobladores que ensayan en la actualidad, a través de sus organizaciones, distintos tipos de regulaciones de las relaciones comunitarias como son el servir de autoridad frente a las compra-venta de lotes de tierra entre particulares; conceder permiso para la instalación de nuevos habitantes y colonos en las veredas y corregimientos; establecer medidas de protección y aprovechamiento del bosque, las fuentes de agua y la fauna. Es un esfuerzo de creación de un *orden civil* (distinto a los órdenes alternativos de la guerrilla) en el que las organizaciones comunitarias actúan como *instituciones* más o menos legalizadas (reconocidas por las cámaras de comercio) pero con un alto grado de legitimidad frente a los habitantes de veredas y corregimientos. Igualmente, frente a este esfuerzo de organización social, el tema de los cultivos ilícitos no parece el más importante debido a que la unidades campesinas aún actúan como productoras de alimentos para asegurar un nivel de subsistencia básico en un contexto de confinamiento y conflicto armado¹³⁵. En cambio este último sí parece ser un

¹³² GONZÁLEZ José J., *ibid*, 47-51.

¹³³ GONZÁLEZ José J., *ibid*, 51.

¹³⁴ GONZÁLEZ José J., *ibid*, 51.

¹³⁵ Con frecuencia estos campesinos invierten parte del ingreso generado por la coca en la compra y cría de ganado vacuno. Según algunos presidentes de juntas comunales entrevistados, la intención de estas organizaciones es limitar al máximo el área cultivada de coca en cada propiedad campesina; el ideal es que la proporción del área de cultivos ilícitos frente a las demás actividades agrícolas y ganaderas no supere 1/5 parte.

problema fundamental para estos habitantes porque limita sus posibilidades reales de desarrollo comunitario.

Los testimonios recogidos durante el trabajo de campo muestra que existe una fuerte segregación espacial y política en el Ariari-Güejar y el Duda-Guayabero luego del rompimiento de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional en febrero de 2002. Extensas zonas rurales de municipios como Puerto Rico, Vista Hermosa y Mesetas están aisladas de las cabeceras municipales como consecuencia del recrudecimiento de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, los paramilitares y la guerrilla¹³⁶. Frente a esta situación el gobierno civil no actúa como un poder real que permita acercar las zonas aisladas a las instituciones legales y garantizar los derechos constitucionales de sus habitantes; por el contrario, algunas administraciones locales se encuentran inmersas en pugnas partidistas o electorales y en juegos de intrigas o disputas sobre la inversión del presupuesto municipal. La presencia o el nivel operativo de las Fuerzas Armadas parecen insuficientes para cubrir de manera eficiente las exigencias de seguridad de estos mismos habitantes¹³⁷. En la práctica son los grupos armados irregulares (FARC y AUC) quienes ejercen el control sobre la población civil de acuerdo con sus códigos de comportamiento y lealtades.

Aquí hay una situación neurálgica en lo relativo a las acciones que se emprendan, desde un eventual Laboratorio de Paz, con estas comunidades de colonos-campesinos para superar las problemáticas ligadas al conflicto, entre ellas los cultivos ilícitos. De hecho estas comunidades están un tanto aisladas de las actuaciones de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Red de Solidaridad Social; apenas la Iglesia Católica, el Ministerio del Medio Ambiente y, en algunas áreas, las Naciones Unidas (UNODC) y la Unión Europea hacen presencia y mantienen vínculos permanentes con estos habitantes. Los soportes más débiles para afianzar estas relaciones entre instituciones (nacionales e internacionales) y comunidades han sido las Alcaldías municipales y la Gobernación.

¹³⁶ Por ejemplo, en Vista Hermosa una amplia zona comprendida entre el río Guayabero, el caño Cabra, la quebrada Sardinata, el río Güejar y el río Duda se encuentra separada de la zona donde ejercen autoridad la Alcaldía y las Fuerzas Militares. La zona marginada tiene cerca de 48 asentamientos (entre veredas y corregimientos) mientras que la zona controlada por el Estado no alcanza a 22 núcleos poblados, incluida la cabecera municipal (allí también hacen presencia las AUC). Al decir de los funcionarios de la Alcaldía, la autoridad de esta institución apenas cubre el 30% del territorio del municipio.

¹³⁷ Ciertas zonas de estos municipios se encuentran “sembradas” de minas antipersonal, este hecho ha limitado notoriamente el avance de las tropas, sobre todo en la antigua zona de distensión.

Los Recolectores de Hoja de Coca

Al lado de estos campesinos-colonos se encuentran los recolectores de hoja de coca, conocidos como raspachines. Este grupo es el más pobre y heterogéneo de los involucrados en el funcionamiento de la economía ilícita; factores que ameritan un tratamiento especial dentro de una estrategia de desarrollo. Como actores sociales se dieron a conocer en las grandes movilizaciones de 1995 y 1996. Aunque estas movilizaciones fueron muy notorias en Caquetá y Putumayo¹³⁸, en las zonas de producción de coca del Meta fueron menos visibles. Las razones de esta particularidad deben buscarse en la historia reciente del Ariari y el Duda-Guayabero.

Ciertamente, los colonos y raspachines de estos municipios habían sido protagonistas de un periodo intenso de movilización social en los años ochenta y noventa, cuando se dio comienzo a la elección popular de alcaldes y se intensificaron las disputas políticas entre sectores liberales y la Unión Patriótica; en esa época también se realizaron numerosas marchas, pero con motivación distintas, según la coyuntura política más importante. Así, entre 1985 y 1987, cuando el tema de la coca era relativamente secundario, sucedieron algunas movilizaciones de colonos en torno a peticiones como el reconocimiento legal de sus posesiones de tierra dentro de la Reserva de la Macarena; la asignación de créditos y apoyos agrícolas de parte del IDEMA y la Caja Agraria o la construcción de una carretera entre Piñalito y La Macarena, siguiendo el trazado de la “trocha ganadera”. Otras razones de las movilizaciones en estos años fueron de carácter político; entre éstas se destacaron las peticiones de desmilitarización de la Reserva ante la inminencia de los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, en cumplimiento de los acuerdos de la Uribe, celebrados en 1984; o las continuas protestas ante los asesinatos de militantes de la Unión Patriótica. Todos estos eran reclamos dirigidos al Estado Nacional dentro de una estrategia de integración institucional diseñada por las organizaciones campesinas, en mayor o en menor medida permitida o apoyada por las FARC¹³⁹.

En cambio, las marchas realizadas entre 1995 y 1996 tuvieron un énfasis distinto dado que exigían del Estado la realización de obras de beneficio social. Las marchas campesinas de 1996 en el Ariari pudieron ser la reacción a la supuesta corrupción y el despilfarro de una clase política departamental o a la inversión selectiva en municipios cercanos a Villavicencio. En agosto y septiembre de ese año, ocurrieron marchas campesinas y bloqueo de vías de comunicación en varios municipios del Ariari, lo que llevo a que permanecieran varios días incomunicados con

¹³⁸ RAMÍREZ, María C.(2001).

¹³⁹ Ver: CUBIDES Fernando (1989: 319- 323).

Villavicencio. En El Castillo, por ejemplo, los campesinos se tomaron la carretera que comunica con Villavicencio y Cubarral a la altura de Medellín del Ariari; otro grupo de labriegos bloqueó la carretera que comunica con Granada. En Puerto Concordia fue la guerrilla quien impidió el paso de vehículos por la carretera que comunica al Meta con Guaviare. En los mismos días, las FARC se tomaron Lejanías e impidieron todo tránsito por la carretera que comunica con Granada¹⁴⁰.

Pero a diferencia de las marchas que por entonces protagonizaron los cultivadores de coca en Caquetá y Putumayo, los motivos que esgrimieron los campesinos de El Castillo para movilizarse se relacionaban con el cumplimiento de los pactos firmados entre el municipio y el Ministro del Interior en junio de 1995, en materia de construcción de escuelas, puentes y pavimentación de vías o créditos y estímulos para la producción agrícola. También es significativo que en Puerto Concordia y Lejanías fuera la propia guerrilla quien forzara los paros sin una presencia activa de los habitantes. En otros municipios como Mesetas y La Uribe, los campesinos suspendieron las marchas en espera de una respuesta del Ministerio del Interior sobre los pliegos de peticiones que habían enviado a ese despacho en marzo de 1995 y agosto de 1996¹⁴¹.

Algunos testimonios indican que el uso del recurso de las marchas en los años ochenta tuvo enormes costos humanos, fundamentalmente en la persecución y muerte de algunos líderes o en la estigmatización de amplios espacios de colonización; esto agotó la capacidad de los acostumbrados manifestantes, quienes esta vez, en 1996, pusieron fuertes condicionamientos a las FARC para su movilización y solidaridad con las movilizaciones cocaleras de Caquetá y Putumayo. Así por ejemplo, en reuniones efectuadas en los sitios de Caño Amarillo y la Gorgona (Vista Hermosa), la condición que los campesinos pusieron a la guerrilla para la realización de las marchas, con el fin de protestar contra la erradicación de los cultivos ilícitos, fue que éstas estuvieran encabezadas por los grandes cultivadores de coca y terratenientes del municipio¹⁴².

Lo anterior sirve para mostrar por lo menos tres cosas: primero la relativa fortaleza y autonomía de las organizaciones de colonos-campesinos frente a la guerrilla, al menos durante estos periodos; segundo, la estrecha relación organizativa entre estos habitantes y los recolectores de coca y, tercero, la subordinación de la problemática de los cultivos ilícitos a las preocupaciones por los efectos del conflicto armado sobre la población civil y a las necesidades de desarrollo social y económico. Al mismo tiempo estos

¹⁴⁰ Llano 7 Días, Septiembre 3 de 1996, pág. 4.

¹⁴¹ Entrevista con habitantes de Mesetas y El Castillo.

¹⁴² Entrevista con habitantes de Vista Hermosa.

factores ilustran sobre el origen social y los intereses de los raspachines, como actor social, en esta zona del país. Según la información levantada en campo, existen tres tipos de recolectores de coca: primero, aquellas personas de origen campesino que por necesidad económica o solidaridad con sus vecinos, de forma temporal, se emplean como trabajadores en las plantaciones de coca¹⁴³; segundo, los antiguos trabajadores agrícolas estacionales de otras zonas del país o del departamento que obtenían su ingreso básico en las plantaciones agrocomerciales (algodón, arroz, sorgo, etc.) y llegaron a las zonas productoras de coca por la crisis del agro en los años noventa; tercero, los raspachines “profesionales” que deambulan por las zonas rurales en busca de fortuna y de un ingreso un poco más alto del que podrían obtener con el desempeño de actividades “urbanas”. Aún así, el rasgo central de este actor social es su estrecha relación con el *orden comunitario* creado por los campesinos colonos, por los menos en las subregiones del Ariari y el Duda-Guayabero¹⁴⁴.

Con todo, la producción de coca en las parcelas campesinas de estas subregiones ha tendido a mantenerse en proporciones bajas, dada la escasa disponibilidad de capital para incrementar la escala productiva, pero sobre todo debido a la racionalidad misma la economía campesina¹⁴⁵. Con mucha frecuencia se encuentra que estos productores tienden a mantener una superficie sembrada estable e incluso, en los últimos años, han buscado disminuir la dimensión de sus cultivos de coca¹⁴⁶. Ciertamente los campesinos solo siembran la superficie que están seguros de poder atender con su propio trabajo y esfuerzo personal, con la ayuda ocasional de vecinos o, en el mejor de los casos, con algunos trabajadores contratados por temporadas. En la práctica esta es una forma de sortear las circunstancias de parálisis del comercio de base de coca y, en una perspectiva más amplia, una limitación social a la expansión de relaciones de producción capitalista en el interior de los mencionados *ordenes comunitarios*.

¹⁴³ El cuidado de 3 hectáreas de coca requiere dos jornales permanentes de trabajo durante el año; sin embargo, en periodo de recolección de hoja, los requerimientos pueden atender a 30 o 45 jornales en una semana. Esta mano de obra es suministrada por raspachines ocasionales o “expertos”. Entrevistas con habitantes de Vista Hermosa y la Macarena.

¹⁴⁴ Cosa distinta a la registrada en el Sur de Bolívar donde los raspachines están menos vinculados a la vida campesina. Ver: FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ Omar y RUDQVIST Anders (2004).

¹⁴⁵ “La lógica de producción del campesino se fundamenta en la búsqueda de un equilibrio entre el cansancio producido por la realización de largas jornadas de trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de la familia campesina. Por tanto no busca ganancia como tal, sino la posibilidad de mantener este equilibrio como elemento de una estrategia de supervivencia cuya lógica es diferente en comparación con la que caracteriza a una empresa agrícola capitalista.” FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ Omar y RUDQVIST Anders (2004).

¹⁴⁶ Entrevista con habitante de Villa Rica (La Macarena).

Bajo esta misma lógica de la economía campesina, el pequeño productor se abstuvo de intervenir organizadamente en la comercialización de base de coca a nivel local o regional. En realidad fueron agentes o actores externos (chichipatos y traquetos) quienes desde el comienzo (finales de los setenta) impusieron el precio, establecieron el nivel de calidad aceptable y fijaron los volúmenes del producto que comprarían. En un comienzo los campesinos no se organizaron para fijar criterios de negociación (calidad, acopio, precio) y seguridad (riesgos de incautación, robo de la mercancía, asesinato) frente a los actores externos. El pequeño productor enfrentó individualmente al intermediario y comerciante de base de coca. Esta situación se mantuvo durante años y todavía se mantiene hoy, con algunas diferencias por subregiones; además fueron estos los puntos de entrada de los grupos armados al negocio ilícito.

Los “Chichipatos” y “Traquetos”

Entre 1983 y 1984, en la zona se vivió una crisis de la economía ilícita y un repliegue de las actividades de los grupos de narcotraficantes. Esta situación fue aprovechada por la guerrilla que logró articular distintas formas de organización social, funcionales o afines con las causas o intereses de los colonos y campesinos pobres; especialmente en lo que se refiere a mantener ciertas condiciones de estabilidad y de seguridad en el comercio de la base de coca. No obstante, la intromisión de las FARC en el funcionamiento local y regional de esta economía (especialmente el cobro de “impuestos”); el uso y abuso del recurso a las movilizaciones campesinas, apoyadas por la guerrilla, y la posterior represión de que fueron objeto los dirigentes de las mismas; o de la “conversión” ideológica que intentó también la guerrilla a través de la Unión Patriótica, provocaron que, en algunos municipios, campesinos y políticos liberales, grandes propietarios y comerciantes “urbanos”, opusieran fuertes resistencias a la organización social y la movilización política de la izquierda en años posteriores¹⁴⁷.

En este mismo contexto de resistencia de los sectores económicos más pudientes y de reconocimiento voluntario u obligado, en otros sectores, al dominio de la guerrilla, se estableció una relación social de “encuentro de intereses” entre los grandes cultivadores de coca, los pequeños y grandes compradores de base de coca (chichipatos y traquetos)¹⁴⁸ y la guerrilla que en este caso se resumía en garantizar las condiciones de seguridad para el funcionamiento de la economía ilícita. En la práctica estos hechos mostraron

¹⁴⁷ Esta situación se vivió con especial crudeza en Vista Hermosa.

¹⁴⁸ Los “chichipatos” eran una suerte de intermediarios que compraban la base de coca a los productores, la almacenaban y la entregaban luego a los comerciantes de mediana escala, de origen urbano, “traquetos”, y ligados a los carteles de la droga. Estos comerciantes adelantaban dinero a los “Chichipatos” para la compra de base en los puntos de comercio a nivel rural.

cierto fracaso de la guerrilla en su empeño de ganarse la “solidaridad política” mayoritaria de la población, especialmente en las cabeceras municipales; mientras que la movilización de los campesinos en torno a objetivos políticos, de un claro perfil ideológico, cedía paso a las expectativas de obtener ciertas ventajas que mejoraran su nivel de vida; en este caso concreto se evidenció que no existía una exacta “bilateralidad” de objetivos en la relación guerrilla - comunidad.

Esta situación se agudizó a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa cuando la Unión Patriótica ocupó, por votación popular, las alcaldías de Mesetas, Lejanías, Vista Hermosa y El Castillo. Fue en este momento cuando se desató una fuerte reacción de sectores vinculados al narcotráfico, por cuestiones de negocio, facciones políticas regionales (liberales y conservadoras) y sectores contra-insurgentes (incluidos miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas) contra el proyecto de la Unión Patriótica en el Ariari¹⁴⁹. Fue también por esa época cuando el narcotráfico intentó convertirse en una fuerza con expresión política, a través de la lucha contra la guerrilla y la conformaron de grupos paramilitares en esta zona del país. Las contradicciones internas entre las FARC e integrantes civiles de la Unión Patriótica y el Partido Comunista sobre la validez de la “combinación de todas las formas de lucha”; las resistencias que opusieron distintos sectores sociales y políticos a la hegemonía de las FARC en las zonas productoras de coca y a su intervención en la regulación de su comercio; agregado a los grandes intereses electorales que se movían entorno a la descentralización, fueron los soportes que directa o indirectamente confirieron poder a los grupos de narcotraficantes en el Meta y les dieron la posibilidad de injerir en decisiones políticas de importancia. A la postre esta conjunción de hechos deshizo los esfuerzos por construir una gobernabilidad civil (participativa y moderna) en los municipios del Ariari y en el Duda-Guayabero.

Así mismo, en este contexto de crisis institucional pudieron actuar con cierta libertad traquetos y chichipatos, subordinados a las exigencias de los carteles de la droga. Se crearon o fortalecieron entonces las redes de tráfico de precursores químicos por las grandes vías de acceso a esta extensa zona (terrestres, aéreas y fluviales) y la droga se comercializó y “exportó” sin demasiadas exigencias de clandestinidad frente a los controles de la policía antinarcóticos. En general un contexto de violencia, corrupción, intimidación y soborno (en el que fueron víctimas, pero también beneficiados, muchas figuras políticas y funcionarios públicos) mantuvo las condiciones necesarias para la protección y el funcionamiento de la economía ilícita en el Meta, a pesar del endurecimiento de la política contra las drogas a nivel nacional, durante toda la década del noventa.

¹⁴⁹ URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo. (1995:49-63).

Este mismo contexto explica la permanencia y la lógica de actuación de los pequeños y grandes intermediarios de la comercialización del alcaloide. Así, los Chichipatos eran, en general, personas conocidas e involucradas en relaciones sociales locales, que se encargaban de ofrecer el precio de compra, garantizaban la calidad y almacenaban cantidades apreciables de base de coca; sin embargo, eran al mismo tiempo el eslabón de enlace entre la producción de hoja en un contexto de economía campesina, controlado en especial por la guerrilla, y el funcionamiento del narcotráfico propiamente dicho. En cambio los Traquetos incursionaban de forma directa en la comercialización de base de coca y cocaína, su intermediación involucraba mayores volúmenes, estaba centrada en las medianas y grandes ciudades (Villavicencio, San José del Guaviare, Florencia, Cali, etc.) y su código de lealtades estaba ligado a las organizaciones paramilitares y los carteles de la droga¹⁵⁰. Con todo, este panorama cambia con el fortalecimiento militar de la guerrilla en los noventa, la unificación de los grupos paramilitares en las AUC y las negociaciones de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC y el ELN.

Actores Armados Ilegales

Como se mencionó, el involucramiento de estos grupos en la economía ilícita data de finales de la década del setenta. Desde 1975 hasta su muerte, en 1990, Gonzalo Rodríguez Gacha fue el principal comprador, primero, de marihuana y, después de base de coca y a través de sus testaferros controló en estos años el mercado ilegal en municipios como Vistahermosa y La Macarena. De la misma forma, fue el “mexicano” quien asumió en su totalidad los costos de la organización y dotación de los primeros grupos paramilitares frente a la amenaza que representaba la regularización del mercado local que establecieron las FARC¹⁵¹. Además, el dominio de este narcotraficante sobre la comercialización de base de coca (1985-1990) coincidió con el periodo de exterminio de la Unión Patriótica.

Luego de la muerte de Rodríguez Gacha, los grupos paramilitares que operaban en el Ariari pierden su fortaleza y son duramente golpeados por la guerrilla que llega a reducirlos a una presencia esporádica en algunos “cascos urbanos”¹⁵². Desde entonces su financiamiento corrió a cargo de algunos ganaderos y esmeralderos de San Martín o el Cartel de Cali que, sin embargo, no tuvieron el poder que en el pasado tuvo el “mexicano” para sostener una guerra contra la subversión. Con todo, el hecho más

¹⁵⁰ GONZÁLEZ José J. (1998c: 43-54).

¹⁵¹ Entrevista con habitantes de Vista Hermosa.

¹⁵² Entrevista con habitantes de Vista Hermosa.

significativo de estos años, con referencia al fenómeno paramilitar, fue que si bien éste nació vinculado a las actividades de los grupos de narcotraficantes, poco a poco fue asumiendo un papel de instrumento de lucha política y armada (en manos de sectores económicos emergentes) contra las FARC y la Unión Patriótica¹⁵³.

De otra parte, la presencia extendida de las FARC en este territorio data de comienzos de los años ochenta aunque en los setenta¹⁵⁴ ya existían núcleos de este grupo sobre los ríos Duda y Guayabero. Desde su aparición en el Ariari, el proceso de fortalecimiento organizativo y militar de las FARC fue lento pero continuo; como parte del seguimiento a la estrategia de despliegue aprobada en su Séptima Conferencia¹⁵⁵. La existencia de comunidades políticas, el aislamiento geográfico, la débil estructuración del Estado local y los recursos provenientes de las “contribuciones” a la comercialización de base de coca fueron los sustentos básicos de este fortalecimiento. Con todo, el periodo de mayor ascenso de esta guerrilla se dio luego de la interrupción del proceso de paz con el Estado, en 1987, y el ataque del ejército a los campamentos del Secretariado, en 1990. Al finalizar esta última década, las FARC contaban con por lo menos diez Frentes y Compañías Móviles en esta amplia zona (1, 7, 26, 27, 39, 40, 43, 44, 51, Compañía Móvil Juan José Rendón)¹⁵⁶. Esta presencia predominante y numerosa se concentró en el Bloque Oriental de las FARC.

La fortaleza de la guerrilla y la dispersión de los grupos paramilitares se mantuvieron hasta 1997, año en el cual comienza un proceso de reestructuración de estos últimos, liderados por Carlos Castaño¹⁵⁷. Fue entonces cuando las AUC hicieron aparición en los alrededores de San José del Guaviare y Mapiripán y paulatinamente fueron extendiendo su presencia en los sectores “urbanos” de Puerto Concordia, Puerto Rico y Puerto Lleras; es decir, de Sur a Norte, a lo largo del río Ariari. Este proceso de extensión paramilitar ha sido protagonizado por el Frente Centauros; en menor proporción otros grupos han ampliado su presencia en algunos municipios de las subregiones del Ariari y el Río Meta: las Autodefensas del Meta y Vichada y las Autodefensas Campesinas de Casanare. En todo caso, poco tiempo (5 años) fue suficiente para que las AUC se convirtieran en un actor clave del conflicto en zonas que se consideraban de influencia neta de la guerrilla.

¹⁵³ URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo (1995: 55-56).

¹⁵⁴ MOLANO Alfredo (1989a).

¹⁵⁵ URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo (1995: 53).

¹⁵⁶ GONZÁLEZ José J. (2004: 30-31).

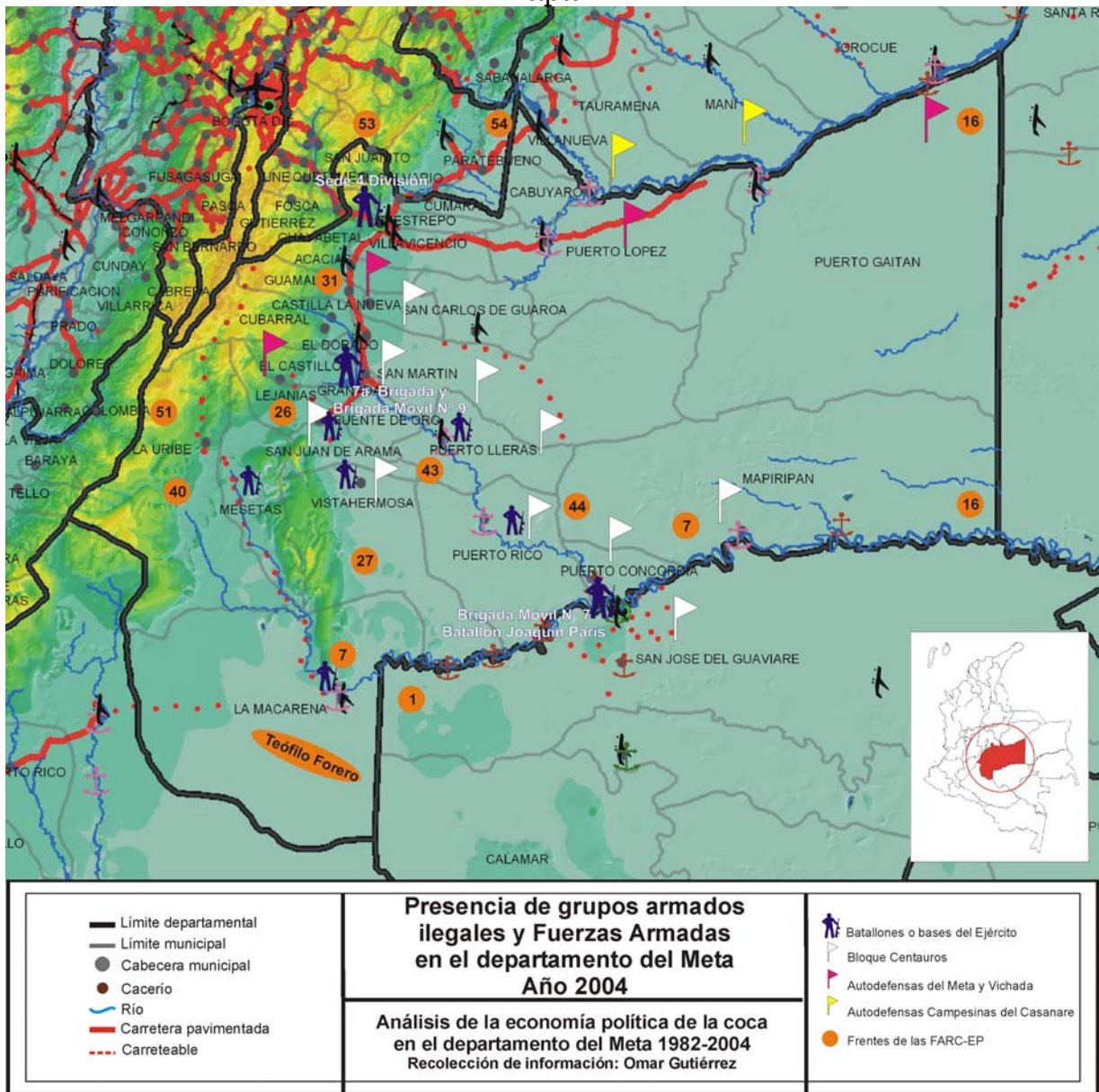
¹⁵⁷ ROMERO Mauricio. (2003).

Hoy en día los enfrentamientos más duros entre paramilitares y guerrilleros ocurren precisamente en las zonas donde se han detectado las mayores áreas de cultivos ilícitos en el Meta, esto es, en Mapiripán, Vista Hermosa, Puerto Concordia, Puerto Rico y Puerto Lleras. Las únicas excepciones son La Macarena, La Uribe y Mesetas donde el conflicto enfrenta básicamente al Ejército, la Policía y las FARC. Este hecho, sin embargo, parece estar más relacionado con la historia política del Departamento que con una reciente disputa por las áreas donde existen estos cultivos. Pese a las circunstancias, la guerrilla sigue manteniendo una presencia notable en zonas rurales donde prevalece la economía campesina; en cambio, los paramilitares se han hecho fuertes en antiguos municipios liberales y conservadores (Granada, San Martín, Cubarral, Puerto López). Curiosamente, las zonas de mayor disputa conocieron un proceso de colonización dirigido por el Estado (ocupación de baldíos) y en ellas hubo, hace décadas, enfrentamientos partidistas (Puerto Lleras, Vista Hermosa, El Castillo). En cambio la guerrilla parece haber cedido espacio a los paramilitares en lugares como Medellín del Ariari, y las cabeceras municipales de Puerto Rico y Concordia, pero ha aparecido en zonas de municipios con tradición conservadora como Acacias (ver mapa 4). Todo lo anterior parece confirmar, como ya se dijo, que el conflicto armado se sobrepone y es cruzado por otros de carácter social (colonización, poblamiento, extensión de la frontera agro-industrial) o político (luchas partidistas, intereses electorales) y está impulsado, en la actualidad, por la pugna entre modelos de desarrollo territorial antagónicos y la búsqueda de reconocimiento o inclusión institucional de ciertas “élites” locales o grupos armados ilegales.

A esta misma lógica parecen responder las transformaciones actuales de la economía ilícita de la coca. La comercialización y el financiamiento de la producción de base de coca está en manos de redes de intermediarios vinculados de manera directa o indirecta a los grupos paramilitares o las guerrillas de las FARC (principalmente Frentes 27, 40, 7 y 1). Se aprecia una vinculación estrecha de estos al funcionamiento de la economía ilegal de la coca a nivel regional, lo que ha significado la instauración de un *duopsonio* muy ligado a la materialización, su control territorial y a la defensa o promoción de órdenes políticos y “modelos” de desarrollo económico; situación favorable, de una parte, a los paramilitares en la margen izquierda del Río Ariari, en algunos municipios del Alto Ariari y el Río Meta (Puerto Gaitán) y, de otra parte, a las FARC en las riberas del Guayabero, el Duda, San Juan de Losada y en la margen derecha del Río Ariari¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Una información de prensa da cuenta de esta compleja articulación de factores: “Alrededor de 17 mil millones de pesos fue el último envío de dinero que los frentes 27 y 43 de las FARC mandaron al secretariado de la organización, producto de la droga comercializada en el sur del Meta. [...] La información provocó una ofensiva sin precedentes

Mapa 4



contra los grupos guerrilleros que operan en un área superior a los siete mil kilómetros cuadrados, y aunque tiene su eje en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico, ya terminó su primera etapa en Uribe, fumigando 1.600 hectáreas de cultivos ilícitos [...] Es tan vital esta región para los intereses de las FARC, que el Ejército no ha dudado en desplegar a la VII Brigada, la Brigada Móvil 4 y la Brigada contra el Narcotráfico, para avanzar en medio de la selva y quitarle el dominio que tiene la subversión, en lo que ha denominado la 'Operación Centauro' [...] Una alta fuente militar de la Brigada contra el Narcotráfico dijo [...] que el objetivo es poder fumigar alrededor de 12 mil hectáreas de coca que hay sembradas en el Meta [...] 'Nuestro propósito es acabar con la voluntad de lucha guerrillera que son sus finanzas; con el dinero que tienen en su poder por el negocio de la coca y los cabecillas que podamos capturar o dar de baja. Desde el primero de noviembre llegamos al Meta con esa misión', indicó un oficial de la Brigada". Llano 7 días, diciembre 19 de 2003, pág. 5.

Sin embargo, dada la instauración del duopsonio armado (sujeto a las decisiones tácticas o estratégicas de los actores armados), las condiciones de financiación y comercialización de pasta de coca han cambiado de forma notoria. Estos cambios se evidencian en la desaparición de buena parte de la antigua disposición de recursos (anticipos para la siembra y suministro de insumos o precursores para los cultivos y pagos con dinero en efectivo al momento de la venta del producto); el acaparamiento del suministro de insumos y precursores, en la actualidad en manos de personas de confianza de las organizaciones armadas¹⁵⁹, y el cambio que perciben los pequeños productores en el carácter de “seguridad” de los mercados locales de base de coca¹⁶⁰. Todo esto ha lesionado seriamente las relaciones de “confianza” entre productores y compradores (aspecto fundamental para el funcionamiento del circuito ilegal) y ha conducido a una parálisis de la economía local.

En la actualidad los grupos irregulares controlan los circuitos de comercialización tanto de precursores químicos (encadenamiento hacia atrás) como de la pasta de coca (encadenamiento hacia delante) en zonas bajo su “dominio” militar. Este rasgo configura la tendencia al establecimiento de aparatos armados cada vez más complejos tanto para garantizar las condiciones de seguridad del negocio como para ejercer coacción y violencia para hacer valer acuerdos y compromisos entre los agentes y eslabones involucrados en el circuito. Esta misma situación otorga mayor poder político a nivel regional a estos grupos armados y dificulta enormemente las acciones del Estado en su lucha contra el narcotráfico en los eslabones intermedios de la cadena (transporte de grandes cargamentos de cocaína, provisión de precursores, contrabando de armas, lavado de activos, etc.)¹⁶¹.

En otras palabras, el control ejercido por los grupos armados sobre los eslabones regionales de la producción y comercialización de pasta de base, ha superado notoriamente las limitaciones de el control de la información y el

¹⁵⁹ Luego del rompimiento de las negociaciones de entre las FARC y el Gobierno Nacional y en cumplimiento del Plan Colombia, las fuerzas militares intensificaron su control de entrada de algunos productos al Ariari (combustibles, fertilizantes e insumos agrícolas). Ver: Llano 7 Días, febrero 13 de 2004, pág. 11.

¹⁶⁰ La seguridad de encontrar una oferta de compra en el lugar mismo de producción, o muy cerca de éste, ha sido una consecuencia de la instauración del duopsonio. Los pequeños productores se han visto en la necesidad de enterrar la pasta de coca o aceptar recibos de compra y pagos diferidos sobre la mercancía; la guerrilla demora hasta dos meses el pago de la pasta recogida. En algunas zonas de Vista Hermosa, los pequeños cultivadores han optado recientemente por vender la hoja de coca (sin procesar) a medianos y grandes productores de base de hoja que pueden asumir el incremento del precio de los insumos. Entrevista con habitantes de Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena, noviembre de 2004.

¹⁶¹ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2003:315).

“dilema de la confianza”¹⁶² de los antiguos carteles de la droga y ha reestructurado redes de apoyo social y político (basadas en la coacción, la complicidad ideológica, el deseo de lucro, etc.) con el contexto regional que les permite actuar con mayores grados de seguridad y eficiencia en el negocio de la producción y exportación de cocaína.

Como se anotó, durante mucho tiempo y pese a su carácter de ilegalidad, el cultivo de coca y la venta de coca fueron opciones rentables para los colonos y campesinos. Algunas condiciones prevalecientes en el negocio (la seguridad del mercado, la relativa estabilidad de los precios, el pago de contado, la existencia de redes de financiación y compra etc.) hicieron esto posible; sin embargo, la sustitución de los antiguos representantes de los carteles de la droga, a nivel local y regional, por los grupos armados irregulares ha cambiado de plano estos condicionamientos. Ahora estos grupos ejercen un control directo del negocio que se manifiesta en hechos como la provisión y fijación de precios a los precursores químicos, el congelamiento del precio de la base de coca, la venta obligada del producto a sus frentes, el establecimiento de restricciones a la movilización y residencia de pobladores en la región¹⁶³, etc. A los ojos de los pequeños productores todo esto ha disminuido mucho los atractivos que hasta no hace mucho representaba la coca. Al mismo tiempo la rentabilidad del negocio se ha visto afectada por el aumento de los costos de transacción que se traducen en los tributos o el “gramaje” que éstos deben pagar a los grupos armados¹⁶⁴.

¹⁶² “La empresa ilegal se enfrenta a un dilema especial: por un lado necesita una gran confianza para la regularidad de los negocios y la seguridad de las personas; sin embargo, ni la motivación de las personas ni las estructuras organizacionales ayudan a construir confianza [...] La confianza se convierte, en estas circunstancias, en un bien escaso y costoso [...] ambos dilemas (el de la información y el de la confianza), que generan continuamente riesgos inminentes en torno a las empresas ilegales, pueden ser solucionados sólo de manera inestable: ni la violencia, ni el dinero, ni la configuración organizacional ofrecen protección suficiente contra la represión, la denuncia y la traición. Más bien la empresa ilegal, junto con sus actores, depende mucho más que la legal de los recursos externos, de la incorporación a la sociedad [...]” DOMBOIS, Rainer. (1998:).

¹⁶³ Así, por ejemplo, las FARC tienen proyectado “permitir” la circulación de población desde las zonas rurales a las urbanas, solo para propósitos muy puntuales (obtener servicios médicos, comprar alimentos, etc.), cada cierto tiempo y las AUC, penalizan con la muerte el desplazamiento fortuito de los pobladores de las cabeceras a sectores rurales, dentro del mismo municipio.

¹⁶⁴ “[...] los efectos de los controles del Ejército a los insumos, las ‘vacunas’ que deben pagar, las fumigaciones y el abandono estatal del sector agrícola. Por ejemplo, Javier Ovalle*, un campesino de la vereda El Diamante en Puerto Lleras al que hace seis años la desesperación de la pobreza lo llevó a cultivar la semilla [...] ya no sabe qué hacer con las tres hectáreas sembradas en su finca. ‘Hace un año podía sacarle hasta un millón a cada hectárea, ahora sólo le saco un millón 500 mil pesos a toda la finca y con eso deben sobrevivir mis 10 hijos y yo por dos meses mientras se saca la otra recogida’, dijo Javier. Los campesinos de la región cuentan que el resto se va en pago de ‘vacunas’ y la compra de los elementos para cultivar la hoja cuyos precios se han disparado en un 80 por ciento [...] ‘Entre la coca tenía sembrado

En resumen, se sustenta aquí la idea de que las transformaciones organizacionales y económicas recientes de la compra y comercialización de base de coca, en manos de los grupos armados ilegales, están en relación estrecha con las disputas políticas y electorales de los ochenta y noventa; con la creación y conflicto entre espacios sociales diferenciados (campesinos, de colonización, agroindustriales); con el conflicto armado, en su versión contra insurgente; con el surgimiento de “élites” locales y con las dificultades del Estado central para imponer el monopolio de su poder coercitivo y comprometer sus propios aparatos regionales y locales con las normas del estado de derecho. En esta región la violencia ha sido un medio básico en la construcción de espacios sociales, la imposición de intereses y el manejo de conflictos; a esta lógica no ha escapado tampoco la creación de Estado local y departamental; no es extraño, entonces, que la economía de la coca, con la generación de grandes recursos y su capacidad para engendrar violencia, haya contribuido considerablemente a impulsar estas estructuras y reglas de juego sociales¹⁶⁵. Desde esta óptica, los grupos armados ilegales hacen parte de las mismas estructuras y reglas de juego creadas por la sociedad y el Estado.

Actores Políticos

La descentralización política fue el reto más grande planteado para la clase política en el Meta. En última instancia, este proceso implicaba la redistribución del poder político entre los distintos grupos de la sociedad y era algo completamente inédito en los municipios del Ariari y el Duda Guayabero. Aunque la descentralización fue un proyecto del Estado central y se amparó en instituciones legales, significó también un reacomodo de los factores reales de poder a nivel regional, aunque éstos se encontrarán al margen de las instituciones. Por esta razón, en los años ochenta, la guerrilla se vio indirectamente fortalecida, al tener un contacto más directo con gobiernos elegidos popularmente y al poder “ejercer” presiones y

plátano y yuca para mantenernos, pero las fumigaciones han acabado con eso también. No me voy para la ciudad porque sé que ser desplazado es una maldición', explicó otro campesino. Un líder cívico de la región dijo que 'si el Gobierno nos pide que hagamos sustitución, la hacemos, pero dénos alternativas para cultivar, por favor' [...]. Llano 7 días, mayo 30 de 2003, pág. 6.

¹⁶⁵ “El tipo de estructura y funciones de las economías ilegales –es lo que se puede deducir del ejemplo de la economía cocalera colombiana– depende no solo de las condiciones específicas de los productos, de las tecnologías y de los mercados; las formas de su economía ilegal, su difusión y su incorporación se explican más bien en cada caso por las condiciones específicas de desarrollo, las estructuras socioeconómicas y el sistema normativo institucional [...]”. DOMBOIS, Rainer. (1998:)

“fiscalización” de sus acciones¹⁶⁶. Algunos años más tarde, los paramilitares intentaron hacer algo similar. De esta manera, el espacio político del municipio se convirtió en escenario de disputa, no solamente militar, entre los actores armados.

Para algunos políticos esto constituyó una “perversión” del proceso de descentralización ya que fortalecía a los enemigos del Estado y, aparentemente, limitaba los intentos de éste por relegitimar su dominio. En efecto, cuando se abrió el espacio para la reorganización política del municipio, que tuvo su punto de partida en la elección popular de alcaldes, comenzó una nueva etapa de enfrentamientos entre facciones partidistas en los municipios del Ariari. En un importante número de estos municipios los comunistas contaban con una fuerza significativa. En opinión de un sector de la vieja clase política, esto constituía una amenaza para la seguridad del departamento. La Unión Patriótica no era otro grupo de izquierda, tenía profundas raíces históricas en el Ariari y contaba con el apoyo de una estructura armada¹⁶⁷. Durante los años 1986 y 1987, el temor a las consecuencias que las reformas municipales tuvieran en el fortalecimiento de este grupo de izquierda hizo que integrantes de los gremios económicos, las fuerzas armadas, el narcotráfico y algunos dirigentes políticos idearan y pusieran en marcha un plan de “exterminio”¹⁶⁸.

Sin embargo, quienes pensaron que la desaparición política de la Unión Patriótica, significaría el debilitamiento del poder de las FARC en algunas localidades se equivocaron. La injerencia de esta organización en los asuntos locales era un hecho que se percibía cotidianamente e, incluso, se intensificó con consecuencias significativas para la población civil. Fueron evidentes los esfuerzos realizados por algunos gobiernos municipales por ganar un margen de autonomía frente a las FARC; sin embargo, el poder civil

¹⁶⁶ Según algunos testimonios, estas presiones se refería fundamentalmente a la destinación del presupuesto municipal. No obstante, las FARC hacían otro tipo de controles sociales como establecer horarios nocturnos para transporte de carga y pasajeros o de funcionamiento a las tabernas y sitios de prostitución. Además, realizaban tareas de “limpieza social” ejecutando drogadictos y ladrones. Esto sucedió en Puerto Rico, Puerto Lleras, Vista Hermosa y El Castillo.

¹⁶⁷ De alguna manera la importancia que en años anteriores habían tenido los grupos de izquierda en la colonización de la subregión se revertían ahora a un plano político institucional. Se podía decir que la relación de estas comunidades políticas, por largo tiempo marginadas, tenían un nuevo escenario de relación con el Estado y parecía tener un nuevo contenido de sentido.

¹⁶⁸ De otra parte se puede decir que la ambigüedad en el proceso, dentro de la agrupación de izquierda, fue pagada por las personas que a nombre de la Unión Patriótica ocuparon cargos públicos en municipios como El Castillo. Mientras las FARC acentuaban su posición de guerra, los integrantes civiles de la Unión Patriótica eran eliminados por bandas de paramilitares que los tenían como “objetivo” privilegiado ante la imposibilidad de golpear la cúpula de la guerrilla. URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo (1995).

que representaban los alcaldes se vio limitado por los factores que alimentaban el enfrentamiento armado, entre ellos el relativo dominio territorial que ejerció la guerrilla.

En otros sentidos –técnico, administrativo, presupuestal– los gobiernos locales enfrentaron dificultades para cumplir satisfactoriamente las metas de la descentralización. Hacia 1995 – 1996, algunos municipios habían recibido responsabilidades referidas a la educación, la salud, el saneamiento básico y ciertas obras de infraestructura; sin embargo, la queja principal de las administraciones era que el esfuerzo de asumir estas responsabilidades no había sido acompañado de los recursos económicos suficientes. De otra parte el sistema fiscal de los municipios en zonas de colonización (Vista Hermosa, Lejanías, Puerto Rico) funcionaba mal, no se recaudaban los impuestos suficientes, el catastro estaba desactualizado, no se tenían censados todos los propietarios de predios rurales y no existía una oficina de planeación que tuviera esta información actualizada. Además se argumentaba que la corrupción era uno de los principales obstáculos para la descentralización, aspecto que se hacía patente en el funcionamiento de los llamados “fondos de cofinanciación” que en la práctica no eran tan ágiles como imaginaban los alcaldes y eran “amarrados” a través de presiones indebidas como las recomendaciones hechas para contratar a terceros¹⁶⁹.

En síntesis, la lucha política de estos años no respetó el marco constitucional, los distintos escenarios (legales e ilegales) fueron utilizados por los diferentes actores para enfrentarse. La relación política de los oponentes fue tanto una lucha militar como un enfrentamiento político por los gobiernos locales. Para la U.P. y el partido Comunista, esto encajaba dentro de la fórmula de “la combinación de todas las formas de lucha”, para sus adversarios (partidos políticos, ejército y narcotraficantes) la lógica de la acción era inversa pero, en muchos sentidos, recíproca y bilateral, intentaba sacarlos del juego político a través de el aniquilamiento físico y no distinguía entre los militantes de la U.P.¹⁷⁰ y los miembros de las FARC. En esta lógica, el recurso a la “depuración ideológica” devenía como una constante en la historia de la guerra en el Ariari. Nuevamente se intentó instaurar zonas homogéneas por su filiación ideológica y “unánime” liberal o comunista.

En el marco de esta lucha político-militar dos lógicas se hicieron complementarias: la del ejército contra las FARC, que de alguna forma representa la defensa del Estado contra la subversión; de otra parte, un enfrentamiento mucho más antiguo y fundamental en el plano político (pero de origen social) la del partido liberal y sus representantes en la sociedad

¹⁶⁹ Entrevista con ex-funcionarios municipales.

¹⁷⁰ A pesar de que éstos fueron elegidos legalmente para ocupar cargos en el gobierno local, su alianza con las FARC, los hizo el blanco preferido de violentas retaliaciones.

civil, los terratenientes y comerciantes o los conservadores en su deseo por consolidar su poder económico y político en una zona “re-descubierta”. Luego interviene el Estado con una lógica eminentemente civilista, modernizadora y auspicia la participación ciudadana. Con todo, el Ariari y el Duda-Guayabero cambian de significado para el resto del departamento, se les considera ahora zona de importancia política y económica¹⁷¹ estratégica. En esto coinciden los actores enfrentados; por distintas razones, es esta la nueva realidad.

En este complejo escenario, la problemática de los cultivos ilícitos fue subsidiaria de los intereses políticos existentes, las transformaciones en la ocupación económica del espacio y del desarrollo del conflicto armado. Solamente cuando esta problemática se asoció a las implicaciones sociales de las eventuales fumigaciones (desplazamiento, escasez de alimentos, movilizaciones) y al uso coactivo que hacía la guerrilla de su control sobre las zonas productoras de coca para deteriorar o quebrar el comercio local y el transporte, como medida de debilitamiento de los supuestos auxiliares de los paramilitares, las cosas empezaron a cambiar. A esto se sumaron la intensificación de las acciones de la política contra las drogas a nivel regional y nacional (captura de narcotraficantes, destrucción de laboratorios, control al tránsito de combustibles e insumos, fumigación de cultivos ilícitos, etc.)¹⁷² y la importancia política que fue adquiriendo la ejecución de los proyectos de desarrollo alternativo en la zona de influencia de San José del Guaviare.

Actores Institucionales

Como se mencionó, las fumigaciones con glifosato en Guaviare, Putumayo, Caquetá y Meta fueron ocasión para que se desarrollaran marchas de colonos - campesinos y raspachines en el sur del país, entre 1994 y 1996. Fue esa una época crucial para conseguir un cambio en el fenómeno de la expansión de los cultivos ilícitos porque las organizaciones que representaban a estos actores sociales conservan un amplio margen de autonomía para tomar decisiones y compromisos frente al Estado, en torno a la sustitución voluntaria de estos cultivos. Esta oportunidad se malogró y después, bajo el control de los grupos armados y el recrudecimiento de la

¹⁷¹ En este sentido la disputa legal y política por la creación del municipio de EL Dorado, en 1993, es muy significativa. Ciertamente, en aquel año la Gobernación crea este municipio, lo cual genera un fuerte enfrentamiento entre Cubarral, El Castillo y Medellín del Ariari; enfrentamiento que tiene una dimensión legal pero que se expresa también en el plano del enfrentamiento armado entre paramilitares y guerrilleros.

¹⁷² En el marco del Plan Colombia (desde 2000) se volvieron a establecer controles estrictos al tránsito de precursores y al transporte de base de coca en algunos puntos de la geografía del Ariari (Granada) como parte del componente de interdicción. Los restantes componentes de este Plan son la erradicación forzada y la erradicación voluntaria.

guerra, las posibilidades de erradicación concertada se han hecho más difíciles. Hoy en día, las posibilidades de realizar acciones reales de desarrollo en estas zonas adolecen de interlocutores y gestores con un grado apreciable de movilidad espacial y relacionamiento institucional para desarrollar programas y proyectos de impacto regional¹⁷³.

En la perspectiva de los campesinos y los recolectores de coca, las fumigaciones químicas son una medida de presión y de intimidación del Estado que afecta no solamente a las plantaciones de coca sino que amenaza también con desestabilizar sus precarias economías domésticas y puede llevarlos a situaciones extremas de pobreza. Así mismo, opinan que la política antidrogas busca resultados inmediatos (su objetivo primordial es el número de hectáreas sembradas de coca) o a mediano plazo (desde una visión productivista) sin reconocer las circunstancias específicas que han dado origen a la economía ilegal y eludiendo la necesidad de poner en marcha modelos de desarrollo rural y ordenamiento espacial a largo plazo. La experiencia les ha mostrado que los proyectos de desarrollo alternativo han sido un tanto dispersos en el territorio y entre las comunidades; con un énfasis fundamental en aspectos productivos (aunque en teoría contemplen aspectos como el fortalecimiento institucional), con dificultades de sostenibilidad en términos económicos y ambientales (sobre todo los proyectos ganaderos con bovinos); aislados en el espacio y del apoyo institucional para intervenir en los mercados urbanos y sin condiciones básicas de competitividad frente a los productos importados u ofrecidos por algunas grandes empresas¹⁷⁴. Todo esto hace pensar a los pobladores de las zonas productoras de coca del sur de Meta y del Caquetá que no ha existido una política estatal clara en materia de desarrollo alternativo.

A los anteriores obstáculos se agrega hoy que los proyectos de desarrollo alternativo se ejecutan en un escenario de guerra¹⁷⁵. Este hecho puede menoscabar su caracterización como acciones de emergencia o de corrección de los efectos negativos de la aplicación de la política anti-drogas (en términos de legitimidad del Estado) en las zonas productoras de hoja de coca, tal como fue concebido e implementado en las administraciones

¹⁷³ En las actuales circunstancias, los grupos armados identifican los planes o proyectos de desarrollo alternativo como parte de la estrategia de guerra del Estado, prevista en el Plan Colombia; por esta razón limitan fuertemente el acercamiento de los habitantes de las zonas que “controlan” a dichos planes o programas..

¹⁷⁴ Entrevistas con campesinos, raspachines y funcionarios o exfuncionarios públicos de Vista Hermosa, Mesetas, Puerto Rico, Concordia, La Macarena, Mapiripán y San Vicente del Caguan.

¹⁷⁵ A finales de 2000 comenzó a nivel nacional un ciclo de fumigaciones de cultivos ilícitos, bajo el marco de la aplicación del Plan Colombia; este Plan vinculó de hecho la política antidrogas a la lucha contrainsurgente (antiterrorista) y se convirtió en un aspecto básico de la relación bilateral Estado Unidos-Colombia.

Samper Pizano y Pastrana Arango¹⁷⁶. Otros factores como la situación de confinamiento o emplazamiento de comunidades enteras; el desplazamiento forzado (masivo o “gota a gota”) de habitantes rurales o urbanos; la destrucción de cultivos de pancoger como consecuencia no prevista de las fumigaciones; la existencia de áreas habitadas “sembradas” de minas antipersonas; las dificultades de las fuerzas armadas para recobrar el control de amplias zonas rurales; las amenazas de muerte proferidas por la guerrilla a los alcaldes y la parálisis de las administraciones municipales, etc., configuran a nivel local y regional este escenario de guerra. Por esta razón, al lado de la preocupación por los resultados económicos (productivos, comerciales, técnicos, financieros, etc.) de los proyectos de desarrollo alternativo o la disminución de la presencia y de los recursos económicos de la guerrilla (como componentes de la política anti-drogas)¹⁷⁷, toma importancia, también, la búsqueda de condiciones para el respeto de la vida y la libertad de las personas eventualmente comprometidas con los mismos proyectos de desarrollo, así como la pregunta por el grado de protagonismo que alcanzan los gobiernos municipales y de participación organizada de las comunidades en la construcción de una economía alternativa y legal¹⁷⁸. En otras palabras, en toda esta labor están implicados, del lado político, el grado de *legitimidad* y la forma cómo el Estado alcanza el control directo de territorios que han estado sometidos a la voluntad de “grupos privados” o bajo la tutela de los *órdenes alternativos*.

Así mismo, desde el ámbito local se reclama el establecimiento de instancias de concertación y de seguimiento a los proyectos de desarrollo alternativo. Esta concertación debería involucrar tanto a las autoridades de orden nacional (PLANTE, Fondo de Inversiones para la Paz – FIP- Ministerio del Medio Ambiente, etc.) como a la Gobernación, a las Alcaldías Municipales y a las Organizaciones Sociales¹⁷⁹. El seguimiento daría cuenta tanto de los obstáculos, los resultados y las necesidades de redireccionamiento de los proyectos como de la eficacia técnica y los efectos sociales de la aplicación de otros componentes de la política anti-drogas, en especial lo concerniente a las fumigaciones de las plantaciones de coca. De parte de las administraciones locales existe la preocupación por contar con el apoyo

¹⁷⁶ En el transcurso de este gobierno surge el Plan Colombia que combina aspectos de complejidad como la lucha contra el narcotráfico, la negociación con grupos armados la recuperación económica y social y el desarrollo institucional en de el áreas de cultivos ilícitos. Transnational Institute (2003: 3- 7).

¹⁷⁷ La política antidroga del gobierno Uribe Vélez parece sobrevalorar el poder de los grupos armados (especialmente la guerrilla) como factor causante de la crisis económica, política y social en las zonas productoras de hoja de coca. Transnational Institute, *ibid*, pág. 3-5.

¹⁷⁸ Transnational Institute, *ibid*, pág. 3-5.

¹⁷⁹ Existe una pregunta que inquieta: en caso de existir recursos y apoyo para la rehabilitación de zonas productoras de coca, ¿quiénes serían los gestores locales de los proyectos de desarrollo?

institucional y técnico para gestionar proyectos de desarrollo alternativo frente a instituciones como el FIP¹⁸⁰. En estos reclamos se palpa el deseo de distintos actores regionales y locales por conocer a fondo y de manera pública, las intenciones gubernamentales y los pormenores de la aplicación de esta política que puede afectar de manera determinante a la economía y la vida política de los municipios del sur del Meta.

En resumen, desde la región se identifican algunos limitantes de la política antidrogas del Estado, en particular en lo referente a la implementación de proyectos de desarrollo alternativo. En primer lugar se destaca la aparente falta de claridad de la política debido a que no ofrece, en la práctica, un enfoque de desarrollo rural y territorial a largo plazo y, en medio de la guerra, esto tiende a menoscabar la legitimidad del Estado central¹⁸¹; segundo, la comunicación y la coordinación entre instancias de gobierno nacionales, departamentales y locales tienen numerosos vacíos y parecen subestimar la participación de la población civil en los proyectos de desarrollo¹⁸²; tercero, no han surgido interlocutores y gestores de esta política a nivel municipal debido a la fragilidad o el aislamiento de las organizaciones sociales y a la situación de ingobernabilidad local; cuarto, la situación de incremento de las acciones de guerra y su mezcla con operaciones antinarcóticos (Plan Colombia) obstaculizan o limitan el acercamiento de la población a los proyectos de desarrollo alternativo impulsados por el Estado, este hecho es aprovechado por los grupos armados.

En este complejo panorama se inscribe la labor realizada por UNODC en el departamento del Meta. En concreto, el *Proyecto de Desarrollo Alternativo en la Zona de Distensión de los Departamentos de Caquetá y Meta*, dio continuidad a las acciones de Desarrollo Alternativo cofinanciadas con

¹⁸⁰ “[...] Como respuesta a las necesidades de los municipios (de la antigua zona de distensión), la Consejería de Paz del Meta ha gestionado, a través del Plan Colombia, recursos del gobierno central y se espera obtener inversiones cercanas a los 500 millones de pesos para infraestructura en salud de los cuatro municipios. Por otra parte, José Soriano Peralta, quien coordina la gestión de recursos para los cuatro municipios de la zona de distensión y 7 más del área de influencia, asegura que lo que no se invirtió en estos tres años, no se hará en los cinco meses que quedan de este gobierno. Precisamente, gracias a la gestión de Soriano, estos 11 municipios acaban de obtener la destinación de cerca de 6.000 millones de pesos, un promedio de 500 millones por municipio, provenientes del Fondo de Inversiones para la Paz (FIP). "Pero estos son los primeros recursos significativos que ha obtenido la zona durante todo este lapso", dijo Soriano. Llano 7 Días, marzo 19 de 2002, pág.10.

¹⁸¹ El énfasis en las fumigaciones químicas y las operaciones de control sobre el abastecimiento de combustibles e insumos agrícolas son los hechos que parecen contribuir más a la deslegitimación de la política antidrogas en el Meta.

¹⁸² Elemento que contradice la política oficial que manifiesta su interés en promover proyectos de desarrollo integral.

recursos del Fondo PLANTE, empréstito BID de la vigencia 1998, en los municipios de Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y la Macarena, conocidas como Fase 1; así mismo, en el Caquetá, el proyecto inició un proceso de desarrollo alternativo en San Vicente del Caguán¹⁸³.

Los orígenes del proyecto se remontan al año 1998, cuando comienza un proceso de organización y reconocimiento jurídico para cinco asociaciones de los municipios mencionados (ASOPROAJU, ASOPROADUM, ASOPEPRO, ASOPROAVIH Y ASOPROGUEJAR). Con el estímulo a la producción campesina (frutas, ganadería bovina, plátano, etc.), el PLANTE comenzó un proceso regional que tenía como finalidad la sustitución voluntaria de cultivos de coca y el fortalecimiento de dicha economía en un contexto de producción y comercialización para el mercado. Poco después, en 1999, ONUDC se sumó a estas acciones con el propósito de mejorar el bienestar y calidad de vida de esta población (820 familias de forma directa y aproximadamente 2700 en forma indirecta); para esto apoyó cuatro actividades productivas alternativas (plátano, ganado de doble propósito, piscicultura y caucho) con actividades de fortalecimiento institucional, de asistencia técnica, de facilidades de fondos de capitalización y de comercialización¹⁸⁴. Como resultado, se prevé que estas acciones de desarrollo alternativo permitirán la organización social y productiva de los cultivadores de coca, que gradualmente, abandonarán sus cultivos ilícitos (aproximadamente 2.400 hectáreas) en la zona de alcance del Proyecto, y así, servirán como un modelo para el país en futuras acciones de desarrollo alternativo con una envergadura mayor¹⁸⁵.

Entonces, los puntos de partida de este proyecto apoyado por el PLANTE y ONUDC fueron la organización comunitaria legalizada (con personería jurídica) de colonos-campesinos¹⁸⁶, el interés manifiesto de los mismos pobladores por superar la economía ilícita y el impulso a la economía campesina en un contexto cada vez más integrado de mercado. En estos momentos, la situación más crítica de esta economía parece estar en la baja disponibilidad de capital de los campesinos para emprender nuevos proyectos económicos; de ahí el énfasis en alternativas como los fondos rotatorios. Todo este enfoque parece ofrecer una base firme al proyecto dado que lo lleva a conocer en terreno una problemática y a avanzar con participación de los involucrados, en opciones no solo productivas (también institucionales, técnicas, financieras, etc.) de superación de esta economía. Los resultados del proyecto se evidencian, en opinión de algunos líderes, en

¹⁸³ UNODC, *Informe de Avance Proyecto AD/COL/99/E45*, agosto de 2003, pág. 1.

¹⁸⁴ En 2000 se adicionó el componente de salud con un monto de US\$ 400.000.

¹⁸⁵ UNODC, *ibid*, pág. 1-2.

¹⁸⁶ Sus protagonistas son claros al advertir que este actor es el que tiene mayor arraigo a la tierra y una antigua tradición organizativa en toda la zona.

la persistencia de los integrantes de las asociaciones en dejar a un lado la siembra de coca y en buscar nuevamente en la agricultura legal (de sostenimiento y comercial) la forma de relacionarse con el Estado y la sociedad de sus municipios; es así como por voluntad han dejado de sembrar o de raspar coca y han recobrado un sentido de dignidad y tranquilidad en las relaciones con sus paisanos¹⁸⁷.

Durante el tiempo de ejecución (1999-2003) analizado, el proyecto ha sufrido varios redireccionamientos con los objetivos de afianzar el sostenimiento de los procesos productivos y organizativos; ampliar su base social; hacer competitivos y rentables los proyectos; expandir la red de salud; introducir tecnologías adaptadas al medio; mejorar el nivel de la asistencia técnica; aumentar el nivel de formación y capacitación empresarial de los asociados; reducir el número de hectáreas sembradas de coca; etc.¹⁸⁸. Sin embargo, permanecen algunas dificultades relacionadas con la disponibilidad limitada de recursos financieros; la situación de violencia contra la población civil; la necesidad de ampliar la cobertura poblacional; la superación del aislamiento espacial de los proyectos; la introducción de bienes de capital (maquinaria) para ampliar la escala de producción asociativa; el mejoramiento del nivel de acumulación de excedentes y disponibilidad de capital-dinero entre los asociados; la creación de las condiciones institucionales, organizativas y técnicas para hacer sostenible a largo plazo todo el proyecto, etc. En general, se perciben algunas de las limitaciones a los proyectos de desarrollo alternativo señaladas arriba, en especial las referidas a las dificultades para ampliar el nivel de protagonismo de estas organizaciones debido a la estigmatización de que son víctimas sus integrantes (viven en una zona de “control” de la guerrilla) y al bajo nivel de gobernabilidad y legitimidad del Estado, en sus niveles local y departamental.

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

A continuación se formulan cuatro tipos de líneas estratégicas de acuerdo con las ideas y el análisis sustentados a lo largo del diagnóstico y como producto de la reflexión realizada sobre los resultados del trabajo de campo. De estos cuatro tipos de líneas programática podrían derivarse conjuntos de acciones en el marco del trabajo de un Laboratorio de Paz. Con todo son apenas esbozos que necesitan un trabajo mucho más minucioso de concreción.

¹⁸⁷ Entrevista con líderes de asociaciones del proyecto, noviembre de 2004.

¹⁸⁸ UNODC, *ibid.*,

Desarrollo Alternativo y Desarrollo Rural

Se palpa cierta incoherencia entre los objetivos de los programas de desarrollo alternativo implementados en esta zona del país y la insistencia en las fumigaciones químicas a los cultivos ilícitos. Los primeros son recibidos con expectativa y esperanza por los campesinos; las segundas son asociadas con el deterioro y la quiebra del modo de vida campesino o con la intensificación del conflicto armado. Los pequeños cultivadores insisten en que la erradicación de los cultivos de coca debe ser concertada y gradual conforme otras fuentes de ingreso productivo sustituyan a las actuales; reclaman también que el apoyo institucional en proyectos productivos contenga, además del componente de seguridad alimentaria, cultivos novedosos que les permitan adaptaciones tecnológicas, organizativas y empresariales sin abandonar su cultura y ni la economía campesina¹⁸⁹.

Algunos líderes campesinos piensan que el énfasis en las tareas de interdicción y fumigación, mantenidas por las Fuerzas Armadas en el Ariari y el Duda-Guayabero, obedece más a una lógica política, asociada a las acciones contra-insurgentes, que a una estrategia de concepción técnica tendiente a minar la capacidad de oferta de base de coca y cocaína en los mercados regionales e internacionales. La prueba de todo esto es que incluso ahora existe un mayor nivel de complejidad en el funcionamiento de las redes de producción y comercio del alcaloide y el área de cultivos ha tendido a incrementarse en los últimos años, por lo menos en este departamento¹⁹⁰. Por todo lo anterior se mantiene latente un sentimiento colectivo de insatisfacción frente a las mencionada tareas anti-narcóticos (en especial las fumigaciones) que en el futuro podría manifestarse de una manera imprevista.

Otro factor que afecta a los pequeños cultivadores es la criminalización de su actividad económica; aunque ellos mismos no se perciban como narcotraficantes. Consideran que esta situación de marginalidad legal limita sus posibles contactos con instituciones del Estado para adelantar proyectos de desarrollo. Esto se suma a otros efectos derivados del conflicto armado como el desplazamiento forzado y el confinamiento espacial o las dificultades de índole económica como el acceso (como consumidores y oferentes) a mercados locales y regionales. Así mismo, estos cultivadores recalcan los

¹⁸⁹ Entrevistas con habitantes de Vista Hermosa, Mesetas y Uribe, octubre-noviembre de 2004.

¹⁹⁰ “Mientras el Gobierno Nacional celebraba hace dos semanas la disminución en todo el país del número de hectáreas de cultivos ilegales, en el Meta se respiraba un ambiente distinto. [...] el informe más confiable, basado en un seguimiento satelital hecho por Naciones Unidas, indicó que este departamento fue el único de la Orinoquia que el año pasado presentó un preocupante aumento de sembradíos ilícitos en el sur, especialmente coca, comparativamente con el 2002 [...]”. Llano 7 Días, julio 2 de 2004, pág. 7.

efectos perversos de la economía ilícita en los valores de solidaridad y austeridad campesina que afectan de manera notable a los jóvenes que ven limitadas sus posibilidades de permanencia en el sistema escolar o en el mercado laboral. Este grupo poblacional nutre hoy a los ejércitos irregulares en confrontación.

Frente a este panorama, los líderes consultados esperan que, a pesar de la situación de conflicto armado, la política anti-drogas, se transforme en una política de desarrollo, por lo menos en los temas que más los afectan (fumigaciones y proyectos alternativos). Sustentan la necesidad de avanzar en el establecimiento de plazos razonables de erradicación manual; la creación de programas de empleo y educación rural; proyectos productivos sostenibles y con apoyo institucional de mediano y largo plazo y la participación activa en los programas estatales de desarrollo alternativo. En este conjunto de acciones solicitan el liderazgo de las alcaldías y las organizaciones sociales locales (juntas de acción comunal, asociaciones de productores, organizaciones ambientalistas, etc.). En otras palabras, reclaman ser reconocidos como actores clave en la solución de un problema del que son los primeros afectados y tener acceso, con distintos grados de autonomía interna e institucional, a la ejecución de proyectos de desarrollo.

Al mismo tiempo estos campesinos advierten la necesidad de dirigir la represión de la política antidrogas contra las grandes redes y organizaciones de narcotraficantes que mantienen una gran movilidad en el territorio y concentran buena parte de su poder económico en las ciudades y en circuitos financieros o productivos relativamente ajenos a la vida rural de las zonas productoras de coca. La riqueza ha escapado de estas zonas como consecuencia de la violencia política y la precariedad de la economía y la infraestructura institucional u organizativa de los municipios. Hasta ahora poco o nada se ha dicho sobre las grandes sumas de capital provenientes del narcotráfico que podrían estar financiando “macro-proyectos” en algunos municipios del Ariari. Para estos actores todo lo anterior muestra que en esta subregión el narcotráfico no ha dependido de los cultivos ilícitos, sino más bien a la inversa, éstos han dependido (en su implantación y evolución) de la existencia del enormes cantidades de capital “foráneo” en manos de los enviados de los “patrones” de los carteles.

La actual lucha contra los grupos alzados en armas, impulsada a través del Plan Colombia, y el control más estricto de estos grupos sobre la comercialización y transporte de base a nivel regional, dificultan por igual a los campesinos-colonos y a los recolectores que adquieran el carácter de interlocutores del Estado. No es la misma situación de 1996 cuando las marchas cocaleras del sur del país movilizaron a cerca de 180.000 personas y se firmaron acuerdos básicos de sustitución con el Gobierno de Samper Pizano. Hoy en día esta posibilidad es más difícil. El tipo de alianza que propone el actual gobierno a la sociedad civil enfatiza el uso de la fuerza para

establecer la autoridad del Estado en estas zonas de frontera interna; sin embargo, esta propuesta lleva a las organizaciones sociales y a los gobiernos locales (eventuales aliados del Estado) a una situación crítica porque en los municipios donde se siembra coca, el poder de las guerrillas y los grupos paramilitares es aún muy significativo¹⁹¹. Al mismo tiempo las propuestas del gobierno señalan y definen de entrada qué tipo de participación social es posible en los programas de erradicación voluntaria de coca y mantienen como una medida de presión la amenaza de las fumigaciones químicas.

Todo esto sucede a pesar de que el Plan Colombia (FIP) recoge experiencias de funcionamiento (aciertos y desaciertos) de los proyectos ejecutados por el PLANTE y un conjunto de críticas y sugerencias hechas por organismos internacionales (UNODC, Unión Europea) para mejorar la concepción y ejecución de los proyectos de desarrollo alternativo¹⁹². Así mismo, el gobierno Uribe Vélez insiste en la necesidad de vincular estos proyectos a enfoques de desarrollo regional (empleo, ingresos, fortalecimiento organizativo), con estrategias flexibles (adaptadas a las condiciones de conflicto local), fortalecimiento institucional (legitimación del Estado) y participación comunitaria (planificación concertada, autogestión, etc.). Con todo, esta política no ha conquistado un espacio significativo en las zonas productoras de coca en el Meta debido, en particular, a la debilidad del Estado local (interna y de contexto); la existencia de fuertes disputas partidistas y electorales; el aislamiento de las organizaciones sociales campesinas y el poder que mantiene los grupos armados, en especial la guerrilla (ver diagnóstico)¹⁹³.

En este contexto es mucho lo que hay por hacer; sin embargo, existe un antecedente importante en el *Proyecto de Desarrollo Alternativo en la Zona de Distensión de los Departamentos de Caquetá y Meta*, apoyado por UNODC y en la experiencia articulada alrededor del trabajo de CORMACARENA y el Ministerio del Medio Ambiente con colonos-campesinos en el Área de Manejo

¹⁹¹ La guerrilla interpreta que el componente social del Plan Colombia es parte de una estrategia articulada de guerra, por esta razón proscribiera cualquier intento de realizar los programas claves de la política antidrogas (p.j. Familias Guardabosques).

¹⁹² Existen, por ejemplo, tres clases de proyectos: generadores de empleo e ingresos; de seguridad alimentaria; para viabilizar alternativas productivas, de comercialización y/o tecnológicas. Ver: Transnational Institute (2003: 8).

¹⁹³ [...] La lucha contra los cultivos ilícitos se ve obstaculizada en algunas zonas por la ausencia total del Estado y el dominio territorial que ejercen en ellas algunos grupos armados ilegales, como acontece en gran parte del territorio de Vista Hermosa, denunció un delegado de la alcaldía de Vista Hermosa y quien habló a nombre del alcalde, Ezequiel Velásquez [...] sostuvo que las fuerzas militares y el Estado ejercen control sobre el casco urbano de Vista Hermosa y una de las seis inspecciones de policía que integran el municipio, mientras que el resto del territorio está bajo la influencia de uno de los grupos armados ilegales que es el que imponen el tipo de cultivos que se debe desarrollar en esa zona. Llano 7 Días, julio 16 de 2004, pág. 15.

Espacial de la Macarena. Sería importante articular acciones con estas instituciones con el objetivo de adelantar alianzas y motivar la participación de organizaciones sociales en eventuales proyectos de desarrollo en zonas de alta incidencia de cultivos ilícitos en municipios como Vista Hermosa, La Macarena, Mesetas, Mapiripán, La Uribe, Puerto Rico, Concordia, etc. En todo este trabajo es importante contar también con el apoyo y la participación de la Iglesia Católica (Pastoral Social, Parroquias), una institución con un buen nivel de credibilidad en todo el Ariari y el Duda-Guayabero. Con este conjunto de alianzas se trataría de planear y lograr un apoyo institucional y social más amplio para proyectos de carácter local y regional, participativos, legítimos (a los ojos de los habitantes), que se propongan hallar alternativas sostenibles y novedosas frente a la problemática de los cultivos ilícitos.

Gobernabilidad Local y Participación Ciudadana

Un hecho fundamental y sobresaliente de la vida política actual de los municipios del Meta es la limitación de los gobiernos locales para construir una *gobernabilidad democrática*. Por este concepto se puede entender las posibilidades reales, mediante el consenso civil, de aplicar las leyes y normas del Estado de Derecho en el territorio que legalmente gobiernan las alcaldías y los concejos. Así, razones de índole histórica, cultura política, violencia social y política y efectos sociales de la economía ilegal, han determinado, hasta hoy, esta *dinámica perversa* que abarca la mayor parte de los municipios del Departamento (ver diagnóstico). De tal suerte, los gobiernos elegidos por elección popular son, muchas veces, herederos de esta dinámica que muestra a sus integrantes como representantes de intereses o sectores sociales particulares en la vida cotidiana de los municipios (presuntamente vinculados al conflicto armado) y, por esta vía, son percibidos como poco legítimos¹⁹⁴ por otros sectores de la población que en el pasado han sufrido las consecuencias de la imposición de dichos intereses, a través de la coacción o la violencia.

Por todo lo anterior se puede decir que las limitaciones de gobernabilidad democrática y de legitimidad en estos municipios están fuertemente ligadas, por una parte, a la manera como se han conformado las élites y la clase política locales y, por otra, al nivel de participación comunitaria y ciudadana en la vida pública y en los gobiernos municipales,

¹⁹⁴ De manera elemental, la legitimidad emana de las razones que invocan los gobernantes para ejercer autoridad sobre los gobernados. Estas razones deben aparecer como válidas, aceptables y deseables para la mayor parte de los integrantes de una comunidad y pueden remitirse, en distintas combinaciones, a la tradición histórica, a la legalidad moderna del Estado y el Derecho o a la hegemonía cultural y política de una élite o clase.

en un escenario de profundización de la confrontación armada e importantes cambios económicos (ver diagnóstico). La ausencia de estabilidad en estos ámbitos de la vida civil (convivencia pacífica y economía) se ha convertido en un freno de mucho peso, tanto para la formación y circulación de élites locales como para la construcción de una cultura de la participación en espacios públicos.

Así mismo, las reformas descentralizadoras, emprendidas en los años ochenta, y la reglamentación al contenido de la Constitución Política de 1991, en materia de democratización de la vida política local, se han visto notablemente contrarrestadas por efecto del conflicto armado y la crisis económica que afecta las finanzas del Estado (sobre todo desde 1999) y se extiende a amplias zonas de economía campesina y de colonización en el Departamento (ver diagnóstico). Este fenómeno se muestra con claridad en la fragilidad o inexistencia de espacios de participación civil en los gobiernos municipales, consagrados por la Ley (Consejos de Planeación Territorial, Veedurías Ciudadanas, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Juntas Administradoras Locales, etc.); en las limitaciones de la estructuración de mentalidades colectivas locales, con valores participativos y de respeto por las diferencias (ideológicas, políticas, de género, etc.); en el bajo nivel de apertura a la participación ciudadana de las administraciones municipales y en la tendencia a la corrupción de sus funcionarios. Todo lo cual repercute de forma negativa en la imagen de las instituciones del Estado central, en la gobernabilidad o en la legitimidad de los gobiernos locales y retroalimenta el ambiente de confrontación armada.

En un terreno más práctico, las dificultades de legitimación y gobernabilidad a nivel local se muestran en el dominio territorial y en la influencia poblacional ejercida por los grupos armados Irregulares. Estos fenómenos repercuten en la capacidad de planeación e inversión de las Alcaldías dentro de su territorio y en el confinamiento entero de comunidades en las zonas rurales o urbanas; además resaltan los aprietos que pasan los gobiernos por intentar “encarnar el interés general” e introduce una nueva dinámica en el desplazamiento forzado (masivo y “gota a gota”) debido a que éste es remplazado por la retención obligada de los habitantes en un territorio, muchas veces, en contra de su voluntad, bajo el argumento de fortalecer un proyecto de desarrollo paramilitar o subversivo.

Sobre todos estos ejes temáticos debería actuar un Programa que pretenda contribuir de manera sustancial a revertir la tendencia a la degradación del conflicto y a disminuir los niveles de pobreza en el Departamento. Así por ejemplo, deberían ser objeto de política tanto la formación de élites locales con capacidad de convocatoria y liderazgo democrático, conectoras de sus responsabilidades frente a la sociedad y abiertas a su propia renovación con la aceptación y la promoción de nuevos liderazgos y formas de organización social como la formación de ciudadanos

conocedores de sus deberes y derechos frente al Estado y la sociedad; esto, que parece una verdad de Perogrullo, es todavía una tarea pendiente en amplias zonas del territorio donde sus habitantes no han tenido la oportunidad de forjar una identidad colectiva de ciudadanía ni menos de intervenir propositivamente en el diseño de las políticas públicas que los afectan o ejercer un cogobierno social en los municipios¹⁹⁵.

El primer paso en esta dinámica de construcción de la gobernabilidad y la legitimidad de la legalidad del Estado a nivel local se cifra en la creación de confianza entre los gobernantes y los gobernados y de éstos entre sí. Una identidad colectiva universal, la ciudadanía, debe subsumir y racionalizar otras muchas identidades como las referidas a la pertenencia a determinado partido político, región, género o religión y permitir un reencuentro en la noción de una *comunidad política* nacional; en un sentido complementario e imprescindible, el Estado, en sus distintos niveles, debe ofrecer reconocimiento y legalidad a las distintas expresiones organizativas y de liderazgo civil que nacen en las periferias sociales y espaciales del departamento sin poner, de antemano, en tela de juicio su legitimidad porque, eventualmente, sean independientes de los círculos de poder tradicional o cuestionen algunas acciones y políticas de gobierno; en el terreno político es tan importante el reconocimiento simbólico y la protección institucional de estas manifestaciones civiles como los esfuerzos de inversión del Estado en obras de infraestructura y de desarrollo económico.

Un segundo paso consiste en reconocer la legitimidad y la legalidad de los intereses individuales y colectivos manifestados por los habitantes en las organizaciones civiles. Es inherente a la sociedad civil la existencia de múltiples y diversos intereses económicos, corporativos, sociales y políticos, como es función esencial del Estado mediar en la construcción, tramitación, reconocimiento, limitación y protección en la Ley de estos mismos intereses, cuando no atentan contra el orden democrático y son parte esencial de la vida en colectividad. Si prevalecen los intereses de los más poderosos dentro de esta sociedad, la solución “pacífica” de los conflictos que éstos susciten será cada vez difícil de lograr y se generará resentimiento, exclusión y un sentimiento de injusticia entre quienes representan los intereses más débiles o con menos reconocimiento dentro del orden institucional. No pocas veces ha sido esta la causa de la violencia en la historia política del país e incluso se podría decir que, en parte, el actual conflicto armado continúa alimentándose de los sentimientos de frustración heredados, de generación en generación, por la no resolución de conflictos básicos del campo (p.j. reforma agraria). En consecuencia, cualquier intento de fortalecer y ampliar

¹⁹⁵ Sobre estos particulares se pueden destacar el carácter vertical del diseño de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos y la brecha que separa las acciones y las concepciones de los Gobiernos Locales y las Juntas de Acción Comunal en el espacio de un mismo municipio.

la institucionalidad legal del país pasa por crear o poner en funcionamiento los canales democráticos de reconocimiento y de protección de los intereses y las expectativas de los sectores más débiles de la sociedad; de lo contrario, terminarían por imponerse o consolidarse (creando un nuevo orden) otros canales, otros valores y otros mecanismos ilegales o violentos de resolución de conflictos en las zonas marginales o relativamente integradas del Departamento.

Un tercer paso es reconocer que la participación *per se* no conduce a ningún horizonte democrático si no se sustenta en la construcción de identidades colectivas que, a pesar de su particularismos, advierten en la libre expresión y en el respeto por el derecho ajeno un factor fundamental de la vida en sociedad. En esta dimensión se presenta un juego dialéctico de la reconstrucción y redefinición permanente de las nociones de lo público y de lo privado. Cada vez son nuevas o más complejas las problemáticas (identidad de género, reivindicaciones étnicas, derechos de los menores, etc.) de la vida cotidiana que sufren un cambio del ámbito privado al público y esto supone una información más acertada y actualizada sobre las mismas con el fin de concederles un espacio institucional legal. Es precisamente esta dimensión la que intentan desconocer los grupos armados cuando encasillan los conflictos sociales en la lógica del “amigo o enemigo” y niegan el carácter cada vez más complejo de la sociedad civil que se manifiesta en distintas formas.

A los anteriores pasos podrían sumarse otros muchos en el propósito de construir un marco analítico que permita la definición de una estrategia de redefinición de lo público y de impulso a la paz en el Departamento. Lo importante por ahora es dejar sentado que todos estos procedimientos deben sustentarse en el apoyo y protección a los grupos de habitantes que por iniciativa propia han emprendido esta difícil tarea en el marco de un escenario de conflicto. De manera que la implementación de estos pasos deberá sufrir un proceso de adecuación de acuerdo con los procesos y las expectativas concretas de estos grupos de habitantes.

Proyectos Económicos Concertados de Desarrollo

En las zonas de producción de coca visitas (La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa) se observa que la economía campesina es el modo de producción predominante. El influjo comercial de la economía ilícita no ha desarticulado la racionalidad campesina y, por factores culturales y organizativos, ésta ha tendido a conservarse, pese a que algunos colonos-campesinos y raspachines anhelan o efectivamente se convierten en medianos productores ganaderos (ver diagnóstico). En otras palabras, en las zonas rurales de estos municipios predomina la economía campesina y la ampliación de la frontera agrícola

(colonización) no ha supuesto una imposición de una economía de mercado. Con variaciones temporales y espaciales, esta tendencia parece mantenerse.

Más bien las amenazas de desarticulación de la economía campesina han provenido de la violencia política y del recrudecimiento del conflicto armado. El fenómeno de la economía ilegal de la marihuana y la coca (años setenta y ochenta) introdujo elementos básicos de producción para el mercado muy similar al que mantuvieron en años anteriores la extracción de pieles, maderas, caucho, etc.; la aparición y combinación de las racionalidades del campesino, el colono y del empresario capitalista se mantuvieron sujetas a factores políticos y sociales de construcción de espacios (ver diagnóstico). Así mismo los campesinos de estas subregiones aún producen alimentos (frutas, lácteos, cacao, etc.), tanto para autoconsumo (valor de uso) como para el mercado (valor de cambio) lo cual implica flexibilidad y un cierto nivel de autonomía, tanto frente a las condiciones de mercado como a los eventuales presiones de los grupos armados ilegales. De esta manera se muestra que la economía campesina tiene una considerable “resistencia” y adaptación a la expansión de las relaciones de producción de mercado y a las condiciones de conflicto, aunque esta adaptación suponga un grado considerable de “autoexplotación” de la familia¹⁹⁶. En otras palabras, si bien la economía y la producción campesina han estado permeadas por la economía de mercado, este factor no ha debilitado de manera drástica la capacidad de subsistencia y las posibilidades de organización comunitaria, por lo menos en las zonas rurales visitadas¹⁹⁷.

¹⁹⁶ “La lógica de producción del campesino, se fundamenta en la búsqueda de un equilibrio entre el cansancio producido por la realización de largas jornadas de trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de la familia campesina. Por tanto no busca ganancia como tal, sino la posibilidad de mantener este equilibrio como elemento de una estrategia de supervivencia cuya lógica es diferente en comparación con la que caracteriza a una empresa agrícola capitalista. Para la economía campesina es crucial el momento de contacto con la economía de mercado, especialmente en la fase de la comercialización que es donde se cruzan la lógica de la producción campesina con la del mercado (obtención de ganancia) siendo el escenario más probable que los productos campesinos encuentren precios bajos. Estos precios pueden ser tan bajos que no alcancen a cubrir los costos de producción, incluido el trabajo; al contrario de lo que ocurriría en una empresa capitalista, el campesino, regido por la búsqueda del equilibrio, no renuncia a seguir produciendo a expensas de seguir cubriendo el déficit de un eventual margen de ganancia con el recurso a la “autoexplotación” de su familia. Entre las características más notorias de esta “autoexplotación” se pueden mencionar: la intensificación del trabajo familiar y la reducción de los gastos de consumo y reproducción de la unidad familiar”. FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ, Omar y RUDQVIST, Anders, (2004:).

¹⁹⁷ Por ejemplo, en algunas de veredas de La Macarena se observa que la economía campesina conserva sus rasgos de diversificación, en condiciones de colonización, y existe cierto grado de desarrollo de capacidades “empresariales” entre sus habitantes. Es decir, el campesino ha aprendido a ser innovador pero mantiene buena parte de su legado organizativo.

En zonas donde existe una apreciable organización comunitaria, la proporción de cultivos ilícitos (como parte de los ingresos campesinos y en extensión de cultivos) parece estar, hasta cierto punto, regularizada por las Juntas de Acción Comunal. Esto no impidió que en los años ochenta y noventa se desarrollara una significativa capacidad de incorporación “artesanal” de técnicas y tecnologías de producción de base de coca¹⁹⁸. A pesar de todo esto no ha arrojado una significativa acumulación de ahorro o capital ni una reinversión en el nivel local. Aún así, algunas personas entrevistadas manifestaron que la coca les había permitido acumular (en las épocas de bonanza) algunos recursos monetarios, destinados luego a cubrir necesidades básicas en educación o salud o hacer una reconversión a la ganadería, el comercio o el transporte¹⁹⁹.

Las ventajas y, también, las desventajas más significativas del negocio de la producción de base de coca en estas zonas han estado asociadas a la demanda internacional, a los periodos intensos de persecución a los carteles de la droga y al influjo comercial y político de los grupos armados ilegales (especialmente las FARC). Estas mismas condiciones “externas” han condicionado, de una parte, la existencia y el acceso a un crédito no formal, el fortalecimiento y diversificación de las redes de abastecimiento y transporte de insumos y precursores y los “controles de calidad” de la base producida en la región; pero, de otra parte, han generado procesos inflacionarios locales y regionales e incrementado los costos de transacción (pago de cuotas a grupos armados. Al mismo tiempo, en otros eslabones del circuito, la economía ilícita se vincula al mercado de armas y la forma de pago impuesta por el duopsonio de los grupos armados, puso en crisis el negocio.

En resumen, los campesinos de estas subregiones han dado prueba de una larga adaptación a las condiciones que impuso la economía de la coca. Esta adaptación supuso aprendizajes productivos, tecnológicos, laborales y culturales en un periodo de más de veinte años y fue asumida como un recurso cíclico para generar ingresos en una economía campesina cada vez más vinculada al mercado. En consecuencia, la expansión de los cultivos de coca se enmarca en la dinámica de la relación que ha permitido a las economías campesinas, en zonas de colonización, una vinculación de adaptación en un escenario cada vez más amplio de economía de mercados. No pocos pequeños y medianos cultivadores de coca ensayaron ser “empresarios” en condiciones de ilegalidad. Así mismo, sería necesario indagar en detalle, por ejemplo, de qué manera estos productores han

¹⁹⁸ Algunos habitantes de La Macarena aseguran que en estos años, incluso se pagó a algunos “químicos” la enseñanza de los secretos del procesamiento de base de coca.

¹⁹⁹ En efecto, se han conformado hatos ganaderos, han aparecido mercados relativamente dinámicos en veredas y corregimientos y se ha intensificado el transporte fluvial y aéreo.

solventado las reducciones de sus ingresos producto de las alzas en los costos de producción del alcaloide y cómo se han mantenido en un mercado controlado por los grupos armados acudiendo a tecnologías de bajo costo y a la optimización del uso de la fuerza de trabajo y diversificando sus sistemas productivos. Estos elementos arrojarían pistas para viabilizar futuros proyectos insertados en otros circuitos productivos y ligados a procesos industriales²⁰⁰.

De cualquier forma es aconsejable seguir las experiencias de la Universidad Nacional²⁰¹ y el IICA²⁰², en el sentido de contar con el tipo de institucionalidad social nacida en estas zonas para adelantar proyectos de inclusión institucional. Esto supone un trabajo de terreno intenso y de comunicación permanente con las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones Ambientalistas existentes en municipios como La Macarena y Vista Hermosa. Sería importante adelantar con ellas procesos evaluativos de distintas experiencias de relación institucional y proyectar acciones que tengan como objetivo alcanzar mayores niveles de desarrollo sostenible sin desconocer este pasado. La idea es dar prioridad a las zonas rurales donde efectivamente se produce base de coca, evitando concentrar las acciones en las cabeceras municipales o en las ciudades intermedias, formular proyectos productivos que rescaten los conocimientos de estas organizaciones en la construcción de ordenes campesinos comunitarios y proponer metas realistas y concertadas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Hay que anteponer una plataforma productiva (sostenible en términos ambientales); planes de ordenamiento territorial y ambiental (donde posiblemente se incluyan propuestas de creación de zonas de reserva campesina o de reforma agraria) y un red institucional legal de alianzas (pública y privada) que apoye los anteriores componentes y sustituya a la institucionalidad “perversa” creada por la coca en veinticinco años de historia.

Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales

La inversión en el fortalecimiento organizativo es una condición esencial para adelantar procesos de desarrollo sostenible. Esto significa realizar esfuerzos institucionales que estimulen e incrementen las capacidades individuales y

²⁰⁰ Así mismo es importante entender el papel que ha jugado el capital comercial local en la expansión de los cultivos de coca dadas las limitaciones de crédito de los campesinos productores. En concreto, aspectos como la función que cumple este capital en el proceso de financiación (habilitación), formación de redes de comercialización y creación de relaciones sociales de dependencia entre prestamistas y productores de coca. FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ, Omar y RUDQVIST, Anders, (2004:).

²⁰¹ CUBIDES C., Fernando et. al. (1989).

²⁰² Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina, financiado con crédito del Banco Mundial.

colectivas, a mediano y largo plazo, para fortalecer a los interlocutores y a los gestores de programas de desarrollo regional. De esta forma se debe superar la visión tradicional que se basa en hallar “beneficiarios” o simples receptores coyunturales del apoyo del Estado para proyectos de desarrollo alternativo.

Este énfasis es una forma de incidir en la reorientación de un conjunto de relaciones sociales sometidas durante largo tiempo a manipulaciones pre-electorales y clientelistas o subordinadas a formas autoritarias de ejercicio del poder. Es un medio básico para fortalecer las instituciones civiles o legales y acercar a los habitantes con el Estado, bajo los supuestos de apoyo y de confianza mutua. Además es el método más claro o “natural” de generar o reconocer intereses colectivos y públicos o de emprender cambios en las nociones de solidaridad y cooperación para adelantar proyectos de desarrollo²⁰³.

En el sur del Meta ha existido y se mantiene todavía un número apreciable de organizaciones sociales o de grupos comunitarios que han enfrentado dificultades para constituirse como sujetos o actores colectivos. Es conocida la fragilidad de las experiencias de participación electoral y civil o la abierta exclusión a la que han sido sometidas estas organizaciones en distintas coyunturas históricas (ver diagnóstico). Por estas razones sería conveniente realizar un trabajo de seguimiento y evaluación a la evolución de las organizaciones o grupos que se puedan constituir en aliados o parte fundamental de las iniciativas de desarrollo y paz que se emprendan. Aquí hay un punto de partida para la planificación y realización de las distintas intervenciones que los programas y proyectos deben resolver, sin caer en visiones unilaterales, sesgos o exclusiones que afecten o subvaloren a grupos que después van a demostrar que son actores clave en procesos de desarrollo local.

De la misma forma, y puesto que adelantar acciones de este tipo en medio del conflicto tiene altos costos en términos humanos, el empeño de un Programa de Desarrollo y Paz o un Laboratorio de Paz tiene que ser sostenido y determinado al momento de apoyar a las organizaciones sociales y comunitarias; su acción debe ser producto de una política institucional (social y estatal) a largo plazo y en ella deben participar un conjunto de entidades nacionales e internacionales. Esta no es una tarea corriente y excede, para los funcionarios, las demandas de un empleo normal y cuando se asume con responsabilidad, en ella se puede arriesgar la vida. Aquí hay un elemento de ética política que es necesario ponderar con seriedad y detenimiento.

²⁰³ FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ, Omar y RUDQVIST, Anders, (2004:).

Una reflexión importante en la evaluación de los proyectos de desarrollo alternativo en el Meta ha sido que al lado de los resultados de rentabilidad, para su sostenibilidad cuenta mucho la formación de “capital social”²⁰⁴. En consecuencia, se propone adoptar una línea de trabajo estratégica que permita la vinculación creciente de habitantes (especialmente jóvenes) a los procesos de formación y capacitación y que éstos se adapten a las necesidades concretas de las organizaciones en aspectos administrativos, empresariales, productivos y tecnológicos. También es conveniente diseñar y poner en práctica gradual un componente de acompañamiento en asuntos de fortalecimiento interno y asesoría para la formulación y evaluación de proyectos. Además es básico crear lazos de solidaridad y cercanía entre los grupos de distintas zonas o municipios que se sumen a los procesos de desarrollo. En última instancia, se trata de crear redes de pobladores alrededor de una visión más o menos común sobre aspectos fundamentales (respeto a la vida, autonomía frente al conflicto armado, transparencia en el uso de recursos, liderazgo civil, formación empresarial y productiva, organizaciones de género, de jóvenes, etc.). En un sentido más amplio, resulta fundamental entender la participación social y pública de los habitantes en la vida de sus municipios como una forma de alcanzar el desarrollo y ampliar la democracia²⁰⁵.

Esta participación civil debe acompañarse de transparencia y aumento de las capacidades en los gobiernos locales. Ahora, como hace diez años o veinte años, es necesario insistir en una “apertura” de espacios democráticos a nivel municipal dado que la descentralización no ha desterrado viejas prácticas clientelistas, corruptas y autoritarias en las administraciones municipales (ver diagnóstico). El incremento de estas capacidades institucionales debe ir más allá de la eficacia administrativa o financiera e involucrar elementos de construcción de políticas públicas que viabilicen procesos de desarrollo a largo plazo²⁰⁶. Como en otras regiones del país, en el Ariari y el Duda-Guayabero, la fragilidad o las dificultades de la presencia institucional en los espacios más lejanos de su geografía genera dudas sobre la persistencia, el sustento y la perdurabilidad de los proyectos de desarrollo alternativo.

²⁰⁴ UNODC, *Informe de Avance Proyecto AD/COL/99/E45*, agosto de 2003.

²⁰⁵ FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ, Omar y RUDQVIST, Anders, (2004:).

²⁰⁶ FONSECA Daniel, GUTIÉRREZ, Omar y RUDQVIST, Anders, (2004:).

CONCLUSIONES GENERALES

De lo expuesto con anterioridad se pueden extraer las siguientes deducciones:

- El conflicto armado ha sido un eje básico de la formación del Estado en buena parte del Meta porque mediante este recurso se ha logrado la integración de territorios y poblaciones marginados. Sin embargo, en una perspectiva de larga duración, este conflicto debe distinguirse de la guerra abierta porque sus protagonistas han sido, en distintas épocas, actores que cuestionan la soberanía del Estado central o/y comparten responsabilidades con él desde las regiones o municipios y aspiran a algún grado de inclusión dentro del orden legal y social que se construye.
- La conformación y relativa vigencia de estas comunidades políticas, ligadas a los partidos nacionales pero profundamente identificadas con la historia y las transformaciones económicas y sociales del Ariari y el Duda-Guayabero, es un punto obligado de análisis para cualquier programa de desarrollo y paz de carácter regional. En el espacio de estas subregiones actuaron o actúan distintas comunidades políticas -liberales, conservadoras y comunistas- y su colonización tuvo mucho que ver con su conformación entre los años cincuenta y noventa. Una característica de las comunidades políticas allí establecidas es que, a pesar del desarrollo posterior de cierta jerarquización social, estuvieron constituidas de tal modo que impusieron ciertas exigencias de lealtad política a sus integrantes y éstos las cumplían porque sabían o suponían que podían ser víctimas de una coacción física. Así mismo, esta coacción podía o, según la coyuntura del conflicto, puede venir de los grupos armados o de la misma comunidad y ejercerse contra determinados miembros que violen códigos de comportamiento implícitamente establecidos y atenten, de esta forma, contra la seguridad interna de la comunidad partidista.
- Las subregiones que fueron objeto principal de análisis (el Ariari y el Duda-Guayabero) se integran de forma tardía a la vida social y política de la Nación y lo hacen como producto de un proceso contradictorio de colonización y poblamiento. Es una dinámica relativamente reciente que aún no muestra una definitiva cristalización de las jerarquías municipales. Granada no fue el primero ni el más importante centro urbano fundado sobre el río Ariari, le antecedieron San Juan de Arama y Medellín del Ariari, su importancia e influjo en la región se encuentran en factores que se fueron modelando a lo largo de los últimos cincuenta años. Se puede decir, entonces, que los municipios en estas subregiones tienen un bajo nivel de organización interna que varía sensiblemente de un lugar a otro de acuerdo con la mayor o menor influencia que ejerce determinado centro urbano. Además, las condiciones naturales (clima, calidad de los suelos, topografía) y las especiales condiciones bio-físicas

impiden que en la región se escenifiquen procesos de poblamiento y colonización similares a los ocurridos en los valles interandinos. Hasta ahora, en lo económico, estos municipios tienden a ser centros de suministro de servicios y de mercancías que abastecen zonas agrícolas y pecuarias o de cultivos ilícitos.

- Las zonas rurales productoras de coca en el Meta afrontan los mayores obstáculos para la integración espacial, social y política. En estas zonas se destacan la pervivencia de formas de producción que combinan aspectos modernos y tradicionales, las dificultades de acceso de sus productos a los mercados regionales y nacionales, las limitaciones en el desarrollo de infraestructuras de comunicación y transporte, la preponderancia de la producción de la droga en las dinámicas demográficas y en los flujos migratorios, las características político-ideológicas de su colonización y, sobretodo, el legado de intolerancia política que de alguna manera debería modificarse para poner en marcha los preceptos de modernización institucional.

En los últimos veinticinco años los ciclos de cultivos ilícitos han dominado la economía del Ariari y el Duda-Guayabero: en los años sesenta aparece la marihuana, en los setenta se da la progresiva sustitución de este “cultivo” por la coca que tiene su época de auge a comienzos de los ochenta y se mantiene con periodos de crisis hasta la actualidad.

La dinámica económica y demográfica que hoy muestran algunas localidades, como consecuencia de los periodos de auge en el cultivo y en la producción de base de coca, no ha reportado mayores progresos en los niveles de calidad de vida para los habitantes del área ni ha estimulado el afianzamiento de los municipios.

A nivel internacional, son tres los aspectos claves de la economía del Ariari: la producción y procesamiento de coca; la riqueza en recursos naturales y la biodiversidad; las limitaciones de una estructura agraria donde prevalecen la producción agrocomercial y la ganadería extensiva con oferta de productos de bajo valor agregado, en condiciones de baja productividad y rentabilidad por hectárea, que afrontan desde hace una década una fuerte crisis como consecuencia del desmantelamiento de las instituciones oficiales que protegían el agro y la competencia en precios de las importaciones.

- Las particularidades que asumió el proceso de descentralización en el área Ariari y el Duda-Guayabero tuvo como trasfondo un pasado de violencia política que fue sustentado de forma directa por sectores de la sociedad civil muy divididos por razones históricas e ideológicas. Estas circunstancias generan interrogantes sobre la forma como reciben el lenguaje institucional de modernización emanado del centro del país las facciones partidistas, los

grupos de poder y las organizaciones civiles que han tenido una participación indirecta o protagónica en la guerra que se vive en algunos municipios del área.

- Aún hoy el espacio del Ariari y el Duda-Guayabero se encuentra muy fragmentado como consecuencia de las particularidades políticas de su poblamiento; del establecimiento de una estructura agraria donde prima la gran propiedad ganadera o agro-comercial en detrimento de la economía campesina; del bajo nivel de especialización y de jerarquizaron de los centros urbanos; de la insuficiencia de medios modernos de comunicación y de transporte; de la débil organización de la asociaciones civiles; del influjo de la economía ilegal de la coca; de la situación de enfrentamiento militar entre el Estado, los paramilitares y las organizaciones guerrilleras.
- De otra parte, debe decirse que durante mucho tiempo el Estado fue marginal en este proceso de constitución de comunidades políticas en el Ariari y el Duda-Guayabero. Aunque desde un comienzo las lealtades a los partidos políticos fueron fuertes, la creencia en la legitimidad de la acciones del Estado, como instancia superior y reguladora de las contradicciones sociales, fue coyuntural, débil o inexistente. No obstante, es justo eso lo que el Estado quiere adquirir hoy en su empeño de modernización, lucha y negociación con los grupos armados ilegales.

Este es el punto que está realmente en juego entre el Estado y los gobiernos locales. El primero se esfuerza por constituir (con altibajos y crisis) un orden político institucionalizado allí donde han prevalecido por décadas el ejercicio particularizado del control territorial o el uso de la “coacción física y el poder de disponer de la vida y de la muerte”. Pero sólo con la participación ciudadana y la vigencia efectiva de un estado social de derecho se logra este objetivo; la legitimidad no brota de las leyes o programas de gobierno sobrepuestos a una historia de exclusión y violencia. Por esta razón los intentos del Estado son vistos con distancia o desconfianza por algunos actores sociales. En estas subregiones, la acción del Estado en materia de modernización y fortalecimiento de los gobiernos locales fue o es una lógica más dentro de un conjunto de relaciones sociales.

En el momento, en el plano político existen en la zona estudiada dos asuntos de primer orden por definirse: la instauración del monopolio de la violencia legítima a través del Estado y la racionalización de las normas destinadas a su aplicación (orden jurídico legítimo). Los intentos de modernización institucional y de descentralización enfrentaron serios inconvenientes en algunos municipios debido a la situación de violencia y para-institucionalidad que se afianzó durante años y sirve todavía de base al balance de poder entre facciones políticas.

- En los últimos quince años, los sectores políticos del departamento han cambiado su actitud hacia las subregiones del Ariari y el Duda-Guayabero; el antiguo propósito de hacer de ellas una zona de exclusión se modifica por el nuevo papel que desempeña en el contexto de la Orinoquía. El Ariari y Duda-Güayabero se hacen vitales para consolidar, por ejemplo, proyectos de desarrollo económico e integración espacial, es frontera con otros entes territoriales que tienen una mayor presencia en límites con el Meta, su importancia económica y demográfica es cada vez mayor. Parece que en algunos sectores dominantes “nació la consciencia de ser departamento” y de consolidar acciones hasta el límite más lejano.

En los años ochenta y noventa, algunos círculos dominantes vieron la experiencia de los gobiernos locales y la profundización de la descentralización como una posibilidad de fortalecimiento de los comunistas a nivel municipal. El “acercamiento del Estado a la sociedad civil, en la instancia más cercana a los individuos, el municipio”, significaba en el Ariari y en el Duda un aliento para los enemigos de la vieja clase dominante departamental; este era un precio muy alto para pagar a cuenta de la “modernización de las instituciones democráticas”. De manera que si el proceso no podía echarse atrás, las posibilidades de fortalecimiento de los “enemigos del Estado” debían limitarse a través de su eliminación política y física; este fue el razonamiento de quienes apoyaron la destrucción de la Unión Patriótica y se comprometieron a “rescatar el Ariari de la anarquía”. Si lo lograron o no es un asunto por definirse porque con estos razonamientos y las acciones que implicaron se dio origen a una fase de violencia, todavía más intensa que las anteriores.

La siembra de cultivos de uso ilícito (marihuana, coca) y la producción de pasta de coca tienen una larga tradición (25 años) en el Departamento del Meta. Es paradójico que esta situación haya favorecido la formación o recomposición de un sector de campesinos y colonos ante la crisis de la política oficial de apoyo a los procesos de colonización en tierras baldías. Esta política fue un sustituto o una fórmula de escape frente a las dificultades o costos políticos de realizar una profunda reforma agraria. Con todo, el apoyo estatal a la ocupación de baldíos resultó aún más costoso en términos ambientales y sociales debido a que se fomentó, indirectamente, la apropiación de ecosistemas únicos en el mundo y se dio margen institucional (por su ausencia) a la aparición y fortalecimiento de cultivos ilícitos y grupos armados (narcotraficantes y guerrilleros).

- Los colonos y campesinos aprendieron bastante bien el proceso inicial de transformación industrial del alcaloide. De esta forma, las actividades realizadas por los pequeños y medianos productores no terminan con la recolección de la hoja de coca sino que incorporan procesos de transformación “poscosecha” que otorgan mayor valor al trabajo realizado

en la unidad productiva familiar. Se puede suponer, entonces, que la tecnología apropiada por los pequeños y medianos productores de pasta de coca en las zonas marginales ha demostrado un buen nivel de adaptación a las variables o difíciles condiciones de los mercados (regionales y nacional). Al mismo tiempo, esta apropiación de tecnología y de sus redes de propagación han sido, en buena parte, iniciativa de los mismos pobladores, lo que muestra un esfuerzo relativamente “exitoso” por adaptar sus economías campesinas a las fuertes limitaciones del apoyo institucional y a las funciones concretas impuestas por la economía de mercado a las zonas marginales y de colonización de la Orinoquia, en un contexto de débil presencia Estatal y propagación del conflicto armado.

- En opinión de algunos líderes locales, existe cierta incoherencia entre los objetivos de los programas de desarrollo alternativo implementados en esta zona del país y la insistencia en las fumigaciones químicas a los cultivos ilícitos. Los primeros son vistos como medio para avanzar en procesos de acercamiento al Estado; las segundas han sido recibidas con temor e incertidumbre. Estos habitantes insisten en la necesidad de adelantar acciones de erradicación concertada y gradual; conforme otras fuentes de ingreso productivo sustituyan a las actuales. También reclaman que el apoyo institucional prevea el impulso a cultivos novedosos que les permitan adaptaciones tecnológicas, organizativas y empresariales, sin abandonar su cultura y economía campesina.
- La interrupción de proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno Nacional tuvo un fuerte impacto en las zonas productoras de hoja de coca en el departamento del Meta dado que se intensificó la presión militar (de las Fuerzas Armadas y el Frente Centauros de las AUC), como resultado las FARC endurecieron su posición territorial, aumentó el desplazamiento forzado y se limitó aún más el nivel de gobernabilidad de las Alcaldías. Hoy en día los habitantes de estas zonas tienen serias dificultades para elegir el lugar donde quieren vivir; no pueden opinar o participar libremente en los procesos electorales y tienen duras limitaciones para el acceso a bienes y servicios (públicos y privados); al mismo tiempo las acciones de los Alcaldes y Concejos están fuertemente restringidas por la existencia de controles territoriales ilegales, en manos de grupos armados irregulares.

BIBLIOGRAFÍA

- ARCILA N., Oscar. 1989. *SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL*, en: CUBIDES C., Fernando et. al., *LA MACARENA. RESERVA BIOLÓGICA DE LA HUMANIDAD. TERRITORIOS DE CONFLICTOS*, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- AROCHA, Jaime; CUBIDES, Fernando y JIMENO, Myriam. 1998. *LAS VIOLENCIAS INCLUSIÓN CRECIENTE*. Centro de Estudios Sociales. Bogotá.
- ARTAUD, Denise. 1995. *LES ÉTATS-UNIS ET LEUR ARRIÈRE-COUR. La défense de la troisième frontière*. Hachette. Paris.
- AVELLANEDA, Mario. 1989. *EL IMPACTO DE LA COLONIZACIÓN SOBRE LA RESERVA NACIONAL LA MACARENA Y DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA NATURAL EN LAS ÁREAS PERTURBADAS*, en: CUBIDES C., Fernando et. al., *LA MACARENA. RESERVA BIOLÓGICA DE LA HUMANIDAD. TERRITORIOS DE CONFLICTOS*, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- BARBOSA E., Reinaldo. 1998. *FRONTERA AGRÍCOLA ORINOQUENSE: DE LA PRECARIEDAD ESTATAL A LA CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS*, en: IEPRI- FESCOL, *CONFLICTOS REGIONALES. AMAZONIA Y ORINOQUIA*. Bogotá.
- _____, Reinaldo. 1992. *GUADALUPE Y SUS CENTAUROS. Memorias de la Insurrección Llanera*. CEREC-IEPRI. Bogotá.
- BAILLY, Antoine, et. al. 1988. *COMPRENDRE ET MAITRISER L'ESPACE OU LA SCIENCE REGIONALE ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE*. GIP RECLUS. Montpellier.
- BRZEZINSKI Zbigniew. 1997. *THE GRAND CHESSBOARD. AMERICAN PRIMACY AND ITS GEOSTRATEGIC IMPERATIVES*. Perseus Books LLC. Washington, D.C.
- CAMACHO G., Álvaro, LÓPEZ R., Andrés y THOUMI Francisco E. 1999. *LAS DROGAS: UNA GUERRA FALLIDA*. Tercer Mundo Editores – IEPRI Universidad Nacional. Bogotá.
- CAMARGO C., David. 2003. *LÓGICAS DEL PODER Y REGULACIÓN DE ESPACIOS*. Universidad Nacional de Colombia. Red de Estudios de Espacio y Territorio, RET. Bogotá.

- CARRIZOSA U., Julio. 1987. *MODIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES ECOSISTEMAS DE LA SERRANÍA DE LA MACARENA*, en: MOLANO B., Alfredo, et. al., *LA COLONIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA MACARENA. YO LE DIGO UNA DE LAS COSAS...* Corporación Araracuara. Bogotá.
- CASTAÑEDA T., Alvaro. 1987. *ASPECTOS FÍSICOS DE LA REGIÓN*, en: MOLANO B., Alfredo, et. al., *LA COLONIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA MACARENA. YO LE DIGO UNA DE LAS COSAS...* Corporación Araracuara. Bogotá.
- CÓRDOBA G., Claudia. 1987. *CARATERIZACIÓN FÍSICO-BIÓTICA DE LA RESERVA*, en: MOLANO B., Alfredo, et. al., *LA COLONIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA MACARENA. YO LE DIGO UNA DE LAS COSAS...* Corporación Araracuara. Bogotá.
- Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental – CORDEPAZ-. 2004. *CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y RECOMENDACIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONFLICTO ARMADO. LÍNEA DE BASE*. (copia magnética) Villavicencio.
- CUBIDES C., Fernando et. al. 1989. *LA MACARENA. RESERVA BIOLÓGICA DE LA HUMANIDAD. TERRITORIOS DE CONFLICTOS*, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- _____, Fernando. 1989. *ASPECTOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA*, en: CUBIDES C., Fernando et. al., *LA MACARENA. RESERVA BIOLÓGICA DE LA HUMANIDAD. TERRITORIOS DE CONFLICTOS*, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- DOMBOIS, Rainer. 1998. *DILEMAS ORGANIZACIONALES DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES*, en: Revista Análisis Político, No 33, enero – abril.
- ECHEVERRI P., Rafael. 2000. *CULTIVOS ILÍCITOS, DROGAS Y DESARROLLO RURAL*, en: Conversaciones de Paz, *CULTIVOS ILÍCITOS, NARCOTRÁFICO Y AGENDA DE PAZ*. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Bogotá.
- ESCOBAR, Arturo. 1998. *POLÍTICA CULTURAL Y BIODIVERSIDAD: Estado, Capital y Movimientos Sociales en el Pacífico Colombiano*. Revista Foro No 35. Bogotá.
- FAJARDO M., Darío. 2002. *PARA SEMBRAR LA PAZ HAY QUE AFLOJAR LA TIERRA*. IDEA – Universidad Nacional. Editorial Unibiblos. Bogotá.

- _____, Dario. 2001. *PROPUESTA PARA ALGUNOS CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (LOOT) REFERIDOS EN ESPECIAL A ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SECTOR AGRARIO*, en: Universidad Nacional de Colombia (Red de Estudios de Espacio y Territorio), *ESPACIO Y TERRITORIOS. Razón, Pasión e Imaginarios*. Editorial Unibiblos. Bogotá.
- _____, Dario. 1997. MONDRAGÓN. H y MORENO, O., *COLONIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO*. IICA. Bogotá.
- _____, Dario. 1987. *LA COLONIZACIÓN DE LA MACARENA EN LA HISTORIA DE LA FRONTERA AGRARIA*, en: MOLANO B., Alfredo, et. al., *LA COLONIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA MACARENA. YO LE DIGO UNA DE LAS COSAS...* Corporación Araracuara. Bogotá.
- FONSECA, Daniel, GUTIÉRREZ, Omar y RUDQVIST, Anders. 2004.
- FRANCO I., Eduardo. 1994. *LAS GUERRILLAS DEL LLANO*. Edición de Planeta Colombiana. Bogotá.
- FRANCO Fernando. 2001. *LA ECONOMÍA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y LA OCUPACIÓN RECIENTE DE LA AMAZONIA Y OTROS BOSQUES HÚMEDOS TROPICALES EN COLOMBIA*, en: Universidad Nacional de Colombia (Red de Estudios de Espacio y Territorio), *ESPACIO Y TERRITORIOS. Razón, Pasión e Imaginarios*. Editorial Unibiblos. Bogotá.
- GONZÁLEZ, Fernán. 1998. *LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LAS DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO EN COLOMBIA: UNA MIRADA DE LARGA DURACIÓN*, en : AROCHA, Jaime; CUBIDES, Fernando y JIMENO, Myriam. *LAS VIOLENCIAS INCLUSIÓN CRECIENTE*. Centro de Estudios Sociales. Bogotá.
- GONZÁLEZ A., José Jairo. 2004. *CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y RECOMENDACIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONFLICTO ARMADO. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PDP EN EL DEPARTAMENTO DEL META*. CORDEPAZ. Villavicencio.
- _____, José Jairo. 1998a. *AMAZONIA COLOMBIANA. ESPACIO Y SOCIEDAD*. CINEP. Bogotá.
- _____, José J. 1998b. *REGIONALIZACIÓN Y CONFLICTO: GUAVIARE, VICHADA Y GUAINÍA. De colonos, guerrilleros y chichipatos*, en: IEPRI-

FESCOL, *CONFLICTOS REGIONALES. AMAZONIA Y ORINOQUIA*. Bogotá.

_____, José J. 1998c. *CULTIVOS ILÍCITOS, COLONIZACIÓN Y REVUELTA DE RASPACHINES*. Revista Foro No 35. Bogotá.

_____, José J. 1992. *ESPACIOS DE EXCLUSIÓN. EL ESTIGMA DE LAS REPÚBLICAS IDEPENDIENTES 1955 – 1965*. CINEP. Bogotá.

GUTIÉRREZ M., Mario. 2000. *ANOTACIONES A LA ECONOMÍA ILÍCITA DE LA COCAÍNA*, en: Conversaciones de Paz, *CULTIVOS ILÍCITOS, NARCOTRÁFICO Y AGENDA DE PAZ*. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Bogotá.

MARTINEZ, Gabriel. 1999. *LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA: ALCANCES Y PERSPECTIVAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL*. En: MACHADO, A. Y SUÁREZ, R. *EL MERCADO DE TIERRAS EN COLOMBIA. ¿UNA ALTERNATIVA VIABLE?*. CEGA, IICA, TM EDITORES. Bogotá.

MOLANO B., Alfredo. 2000. *LA RUANA TIRA PARA UN LADO*, en: Conversaciones de Paz, *CULTIVOS ILÍCITOS, NARCOTRÁFICO Y AGENDA DE PAZ*. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Bogotá.

_____, Alfredo. 1996. *DEL LLANO LLANO. RELATOS Y TESTIMONIOS*. El Áncora Editores. Bogotá.

_____, Alfredo. 1994. *TROCHAS Y FUSILES*. El Áncora Editores - IEPRI. Bogotá.

_____, Alfredo. 1989a. *APROXIMACIÓN AL PROCESO DE COLONIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL ARIARI – GUEJAR – GUAYABERO*, en: CUBIDES C., Fernando et. al., *LA MACARENA. RESERVA BIOLÓGICA DE LA HUMANIDAD. TERRITORIOS DE CONFLICTOS*, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

_____, Alfredo. 1989b. *SIGUIENDO EL CORTE. Relatos de guerras y de tierras*. El Áncora Editores. Bogotá.

_____, Alfredo. 1987. *LA COLONIZACIÓN: VOCES Y CAMINOS*, en: MOLANO B., Alfredo, et. al., *LA COLONIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA MACARENA. YO LE DIGO UNA DE LAS COSAS...* Corporación Araracuara. Bogotá.

- NÉMERY, Jean-Claude et WACHTER Serge (comp.). 1993. *ENTRE L'EUROPE ET LA DÉCENTRALISATION. LES INSTITUTIONS TERRITORIALES FRANÇAISES*. Éditions de L'aube, Marseille.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. 2004. *COLOMBIA, Monitoreo de Cultivos de Coca*. Bogotá.
- PÉCAUT, Daniel. 2001. *GUERRA CONTRA LA SOCIEDAD*, Espasa Hoy, Bogotá.
- Presidencia de la República. 2002. *PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO – PLANTE*. Colombia Siembra Paz. Logros y Perspectivas. Bogotá.
- PUYANA M., Aura María. 2000. *CULTIVOS ILÍCITOS Y PAZ: HACIA UNA AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL*, en: Conversaciones de Paz, *CULTIVOS ILÍCITOS, NARCOTRÁFICO Y AGENDA DE PAZ*. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Bogotá.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 2003. *INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2003. El conflicto, callejón con salida*. Bogotá
- RAMÍREZ. María Clemencia. 2001. *ENTRE EL ESTADO Y LA GUERRILLA: IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL MOVIMIENTO DE LOS CAMPESINOS COCALEROS DEL PUTUMAYO*. ICANH – COLCIENCIAS. Bogotá.
- RAMÍREZ, Constanza. 1998. *CONFLICTO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE*. Revista Foro No 35. Bogotá.
- ROBB, Caroline M. 2002. *¿PUEDEN LOS POBRES INFLUENCIAR LAS POLÍTICAS? Evaluaciones participativas de la pobreza en el mundo en desarrollo*. Banco Mundial. ALFAOMEGA Grupo Editor. México.
- ROMERO V., Mauricio. 2003. *PARAMILITARES Y AUTODEFENSAS 1982-2003*, IEPRI- Editorial Planeta. Bogotá.
- RUDQVIST, Anders. 1991. *MÉTODOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA CONSULTAS Y PARTICIPACIÓN POPULAR*. Unidad para Estudios del Desarrollo, Departamento de Antropología Social, Universidad de Estocolmo.
- SABOGAL P., Melquisedec. 1998. *EL NEGOCIO DEL CULTIVO DE LA COCA A ESCALA DE PRODUCCIÓN CAMPESINA*. Presidencia de la República.

- SALGADO R., Henry. 2002. *LOS ACTORES ARMADOS Y SUS PLANTEAMIENTOS FRENTE AL TEMA AGRARIO Y AL NARCOTRÁFICO*. Revista CONTROVERSIA, Segunda Etapa, No 180, pág. 11- 51.
- _____, Henry. 2000. *DE EXPROPIADOS DE LA TIERRA A “NARCO-AGRICULTORES.” Problemática del campesinado amazónico colombiano*, en: Conversaciones de Paz, *CULTIVOS ILÍCITOS, NARCOTRÁFICO Y AGENDA DE PAZ*. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Bogotá.
- STEINER Roberto y Corchuelo Alejandra. 1999. *REPERCUSIONES ECONÓMICAS E INSTITUCIONALES DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA*. CEDE- Universidad de los Andes. Bogotá.
- TILLY, Charles. 1992. *COERCIÓN, CAPITAL Y LOS ESTADOS EUROPEOS, 900-1900*. Alianza Editorial. Madrid.
- THOUMI, Francisco, *EL IMPERIO DE LA DROGA*. 2002. *Narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes*. IEPRI- Editorial Planeta. Bogotá.
- TOKATLIAN Juan Gabriel. 2000. *GLOBALIZACIÓN, NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA. Siete ensayos sobre Colombia*. Grupo Editorial Norma. Bogotá.
- TOVAR P., Hermes. 1999. *COLOMBIA: Droga, Economía, Guerra y Paz*. Planeta Editorial. Bogotá.
- TRANSNATIONAL INSTITUTE. 2003. *DESARROLLO ALTERNATIVO Y CONFLICTO EN COLOMBIA. A CONTRAVÍA*. Drogas y Conflicto. Documentos de Debate No 7. Amsterdam.
- _____. INSTITUTE. 2002. *DROGAS: POLARIZACIÓN Y PARÁLISIS EN LA ONU. SUPERANDO EL IMPASSE*. Drogas y Conflicto. Documentos de Debate No 5. Amsterdam.
- _____. INSTITUTE. 2001. *FUMIGACIONES Y CONFLICTO EN COLOMBIA. AL CALOR DEL DEBATE*. Drogas y Conflicto. Documentos de Debate No 2. Amsterdam.
- VARGAS M., RICARDO. 2000. *NARCOTRÁFICO, POLÍTICA ANTIDROGAS Y CULTIVOS ILÍCITOS EN LOS ESCENARIOS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO*, en: Conversaciones de Paz, *CULTIVOS ILÍCITOS, NARCOTRÁFICO Y AGENDA DE PAZ*. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Bogotá.

- URIBE R., Sergio. 1997. *LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA. Extensión, técnicas y tecnologías para la producción y rendimientos. Magnitud de la industria*, en: THOUMI Francisco E., *DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA. Su impacto económico, político y social*. PNUD, Dirección Nacional de Estupefacientes. Editorial Ariel, Bogotá.
- URIBE, María Teresa. 2000. *LAS SOBERANÍAS EN DISPUTA, ¿CONFLICTO DE IDENTIDADES O DE DERECHOS?*, en: SÁNCHEZ, Gonzalo y WILLS, María Emma (Comp). *MUSEO, MEMORIA Y NACIÓN: MISIÓN DE LOS MUSEOS NACIONALES PARA LOS CIUDADANOS DEL FUTURO*. Colcultura. Bogotá.
- URIBE, María V.; VÁSQUEZ, Teófilo. 1995. *ENTERRAR Y CALLAR*. 2 Volúmenes. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Terres des Hommes. Bogotá.
- WEBER Max. 1977. *ECONOMÍA Y SOCIEDAD*. Fondo de Cultura Económica. México. 2 Tomos.